



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

TEMA:

“El Linchamiento Mediático establecido en la actual Ley Orgánica De Comunicación de la República del Ecuador y la disyuntiva que existe con la prohibición de Censura Previa establecida en el mismo cuerpo legal, a fin de garantizar que la información no pueda ser vetada con anterioridad a su emisión”

Tesis previa a la obtención del título de:

ABOGADA

AUTORA: De La Rosa Trujillo Alicia Yolanda
Correo: ilapila12@yahoo.es

TUTOR: Dr. Hernández Orozco Jaime

JUNIO-2014
QUITO

DEDICATORIA

*A mi familia: Andre,
Paty y Carlos que
son todo para mí,
con todo mi amor.*

Alicia De la Rosa

AGRADECIMIENTO

A Dios, que me ha dado la vida con su amor infinito; a mis padres Carlos y Paty, que son mi apoyo en todo momento de mi vida y que con su amor y paciencia me han enseñado las cosas más valiosas; a mi hermana Andre que es mi inspiración para avanzar y ser un buen ejemplo.

Al Dr. Jaime Hernández, Catedrático de la Universidad Central del Ecuador, por ser mi guía durante la elaboración de esta investigación, su apoyo fue fundamental para la culminación de este trabajo.

A todas aquellas personas que con su conocimiento científico, legal y académico me ayudaron a establecer las bases de este trabajo investigativo.

Alicia De la Rosa

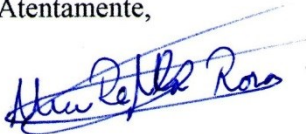
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 6 de Junio de 2014

Yo, ALICIA YOLANDA DE LA ROSA TRUJILLO, autora de la investigación, con cédula de ciudadanía No. 1713995544, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de Grado titulado: “El Linchamiento Mediático establecido en la actual Ley Orgánica De Comunicación de la República del Ecuador y la disyuntiva que existe con la prohibición de Censura Previa establecida en el mismo cuerpo legal, a fin de garantizar que la información no pueda ser vetada con anterioridad a su emisión” Es de mi plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,



Alicia Yolanda De la Rosa Trujillo

1713995544

Correo: ilapila12@yahoo.es

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, ALICIA YOLANDA DE LA ROSA TRUJILLO, en calidad de autora de la tesis realizada sobre: “El Linchamiento Mediático establecido en la actual Ley Orgánica De Comunicación de la República del Ecuador y la disyuntiva que existe con la prohibición de Censura Previa establecida en el mismo cuerpo legal, a fin de garantizar que la información no pueda ser vetada con anterioridad a su emisión” por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 6 de Junio de 2014



ALICIA YOLANDA DE LA ROSA TRUJILLO

1713995544

APROBACIÓN DEL TUTOR



Dr. Jaime Hernández Orozco
A B O G A D O

Estudio: Guayaquil 1740 y Caldas (Centro Comercial Quito) - Ofc. 107 Telfs.: 2288-054 / 2287-444
Dom.: 2610-943 Cel.: 099842-509 Quito - Ecuador

Quito, 29 de mayo de 2014

Señora Doctora

YOLANDA YUPANGUI CARRILLO MSc.

DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.-

En su despacho.

De mi consideración:

En mi calidad de profesor tutor de la Tesis previa a la obtención del título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, intitula "EL LINCHAMIENTO MEDIATICO ESTABLECIDO EN LA ACTUAL LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA DISYUNTIVA QUE EXISTE CON LA PROHIBICION DE LA CENSURA PREVIA ESTABLECIDA EN EL MISMO CUERPO LEGAL, A FIN DE GARANTIZAR QUE LA INFORMACION NO PUEDA SER VETADA CON ANTERIORIDAD A SU EMISION" elaborada bajo mi dirección, por el señorita estudiante: DE LA ROSA TRUJILLO ALICIA YOLANDA misma que ha sido ejecutada conforme al plan de tesis previamente aprobado por el "ISIJS" concluyendo con un buen trabajo investigativo, muy bien sustentado que incluye una propuesta elaborada acorde a la nueva realidad procesal, con una actitud critico social y jurídico, que facilitará el acceder a la tutela de los derechos humanos y a una adecuada aplicación de los derechos del buen vivir contemplados en el Art. 18 numeral 1 de nuestra Constitución, por lo cual emito su correspondiente informe favorable.

Procede por lo tanto la designación del Tribunal calificador que usted señora Decana habrá que nombrar para el efecto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Jaime Hernández Orozco. MSc

PROFESOR-UNIVERSITARIO.-

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA



RECIBIDO

2014-06-05

Rita

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD	iv
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL.....	v
APROBACIÓN DEL TUTOR	vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vii
ÍNDICE DE ANEXOS.....	xi
ÍNDICE DE TABLAS.....	xii
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	xiii
RESUMEN EJECUTIVO	xiv
ABSTRACTS.....	xv
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I	3
DERECHO A LA INFORMACIÓN	3
1.1 LA COMUNICACIÓN	3
1.1.1 INICIOS DE LA COMUNICACIÓN	3
1.1.1.1 COMUNICACIÓN VERBAL.....	3
1.1.1.2 SÍMBOLOS	4
1.1.1.3 ESCRITURA	5
1.1.2 LA COMUNICACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA IMPRENTA.....	6
1.1.2.1 INICIOS DE LA IMPRENTA.....	6
1.1.2.2 PRENSA EN EL ECUADOR.....	7
1.1.3 LA RADIO	9
1.1.3.1 DESARROLLO MUNDIAL	10
1.1.3.2 DESARROLLO DE LA RADIO EN EL ECUADOR	12
1.1.4 TELEVISIÓN.....	15
1.1.4.1 DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL.....	15
1.1.4.2 TELEVISIÓN EN EL ECUADOR.....	16
1.1.5 INTERNET	19
1.1.5.1 BREVE HISTORIA DEL INTERNET EN ECUADOR	19
1.2 ANTECEDENTES DEL CONCEPTO DERECHO A LA INFORMACIÓN	20
1.3 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN.....	21
1.4 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN: DERECHO FUNDAMENTAL.....	22

1.5 PERSPECTIVAS DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN	23
1.6 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.....	27
1.7 FUENTES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.....	28
1.8 NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN	29
1.9 SUJETOS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.....	29
1.9.1 SUJETO UNIVERSAL	30
1.9.2 SUJETO CUALIFICADO	30
1.9.3 SUJETO ORGANIZADO	31
1.10 EL OBJETO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.	31
1.10.1 EL MENSAJE DE OPINIÓN	32
1.10.2 COMUNICACIÓN DE IDEAS.....	32
1.10.3 LA NOTICIA.....	32
CAPÍTULO II	34
LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN	34
2.1 CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN.....	34
2.1.1 DERECHO INDIVIDUALISTA	35
2.1.2 ASPECTO INSTITUCIONAL.....	36
2.2 CONCEPTO DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN	37
LIBERTAD DE INFORMACIÓN, DE PRENSA O IMPRENTA	38
2.3 SUJETOS, OBJETO Y CONTENIDO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN	39
2.3.1 SUJETOS	39
2.3.2 OBJETO.....	40
2.3.3 CONTENIDO	40
2.4 LA FACULTAD DE RECIBIR.....	40
2.5 FACULTAD DE DIFUNDIR.....	41
2.6 FACULTAD DE BUSCAR INFORMACIÓN.....	42
2.7 CASOS EN LOS QUE SE HA INTENTADO CUESTIONAR LOS DERECHOS DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EN EL ECUADOR	43
2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL	46
2.8.1 ÁMBITO UNIVERSAL.....	46
2.8.2 ÁMBITO INTERAMERICANO	47
2.8.3 ÁMBITO CONSTITUCIONAL	50
2.8.4 LEYES Y ESTATUTOS A NIVEL NACIONAL.....	64
2.8.5 REFERENCIAS DEL DERECHO COMPARADO	66
CAPÍTULO III	72
LA CENSURA	72
3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL	72

3.2 BREVE HISTORIA DE LA CENSURA EN EL MUNDO OCCIDENTAL	73
3.2.1 ANTIGUO EGIPTO	73
3.2.2 GRECIA ANTIGUA	73
3.2.3 ROMA	73
3.2.4 EDAD MEDIA	74
3.2.5 NUEVO MUNDO	74
3.3 BREVES RELATOS DE LA CENSURA EN HISPANOAMÉRICA, VISTOS A TRAVÉS DE LA IMPRENTA	75
3.3.1 CONQUISTA	75
3.3.2 ÉPOCA COLONIAL	75
3.3.3 LA ILUSTRACIÓN	76
3.3.4 ETAPA ANTINAPOLEÓNICA	76
3.3.5 INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA	77
3.3.6 FORMACIÓN DE LAS REPÚBLICAS	77
3.3.7 ÉPOCA POST INDEPENDENTISTA 1850-1900	81
3.3.8 INICIOS SIGLO XX	82
3.3.9 1950-ACTUALIDAD	82
3.4 TIPOS DE CENSURA	87
3.4.1 CENSURA PREVIA	87
3.4.2 CENSURA POSTERIOR	89
3.4.3 AUTOCENSURA	90
3.4.4 CENSURA ECONÓMICA	90
CAPÍTULO IV	92
LINCHAMIENTO MEDIÁTICO	92
4.1 ANTECEDENTES	92
4.2 CONCEPTO LEGAL	93
4.3 UNA NUEVA FIGURA LEGAL	93
4.4 ANÁLISIS LEXICOGRAFICO	96
4.5 ELEMENTOS DEL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO	98
4.6 LA PRUEBA	99
4.7 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100
CAPÍTULO V	102
INVESTIGACIÓN DE CAMPO	102
5.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	102
5.1.1 ENCUESTA	102
5.1.2 ENTREVISTA	103
5.2 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	103

5.2.1 ENCUESTA	103
5.2.2 ENTREVISTA	105
5.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	105
5.3.1 ENCUESTA	105
5.3.2 ENTREVISTA	115
5.4 CONCLUSIONES.....	119
5.5 RECOMENDACIONES.....	120
CAPÍTULO VI.....	122
PROPUESTA.....	122
6.1 JUSTIFICACIÓN	122
6.2 OBJETIVOS.....	122
6.2.1 OBJETIVO GENERAL.....	122
6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	123
6.3 BENEFICIARIOS.....	123
6.3.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS.....	123
6.3.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS	124
6.4 FACTIBILIDAD	124
6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.....	125
6.6 FASES DEL PROYECTO	125
6.7 IMPACTOS	126
6.8 EVALUACIÓN	126
BIBLIOGRAFÍA.....	210
BIBLIOGRAFÍA VIRTUAL.....	213

ÍNDICE DE ANEXOS

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	127
2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.....	135
3. DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.....	158
4. PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA	166
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS	166
5. PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC	177
6. LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISTA.....	179
7. ESTATUTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE PERIODISTAS DEL ECUADOR	187
8. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL PERIODISTA.....	203

ÍNDICE DE TABLAS

1. Tabla: Conocimiento de la Ley de Comunicación.....	106
2. Tabla: Conocimiento del concepto de Linchamiento Mediático	107
3. Tabla: Conocimiento de la Censura Previa.....	108
4. Tabla: Posible Contradicción	109
5. Tabla: Posible consecuencia del Linchamiento Mediático.....	110
6. Tabla: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información	111
7. Tabla: Obstáculos al Derecho a la Información.....	112
8. Tabla: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información	113
9. Tabla: Reformulación del Artículo 26.....	114

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. Gráfico de Confianza:	104
2. Gráfico: Conocimiento de la Ley de Comunicación	106
3. Gráfico: Conocimiento del concepto de Linchamiento Mediático	107
4. Gráfico: Conocimiento de la Censura Previa.....	108
5. Gráfico: Posible Contradicción	109
6. Gráfico: Posible consecuencia del Linchamiento Mediático.....	110
7. Gráfico: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información	111
8. Gráfico: Obstáculos al derecho a la Información	112
9. Gráfico: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información	113
10. Gráfico: Reformulación del Artículo 26.....	114

RESUMEN EJECUTIVO

“El Linchamiento Mediático establecido en la actual Ley Orgánica De Comunicación de la República del Ecuador y la disyuntiva que existe con la prohibición de Censura Previa establecida en el mismo cuerpo legal, a fin de garantizar que la información no pueda ser vetada con anterioridad a su emisión”

La reciente Ley de Comunicación aprobada en el Ecuador ha traído bastantes dudas entre los ecuatorianos acerca de las limitaciones que se puedan presentar respecto a la libertad de expresión; entre los temas de controversia está el Linchamiento Mediático y la posible disyuntiva que pudiera existir con la prohibición de Censura Previa establecida en el mismo cuerpo legal; para aclarar esta cuestión, inicio mi trabajo con un análisis del Derecho a la Información desde sus comienzos hasta la actualidad, abordaré luego en el segundo capítulo la Libertad de Información que está garantizado en la Constitución y que es uno de los derechos fundamentales reconocidos en Tratados e Instrumentos Internacionales. En el capítulo tercero examino a la censura desde su estado puro, casos históricos a nivel de Latinoamérica y a nivel del Ecuador, para después diferenciar los tipos de censura; en el cuarto capítulo se realiza un examen de todo lo concerniente al Linchamiento Mediático; más tarde en el capítulo quinto se realiza la investigación de campo a través de encuestas y entrevistas; finalmente en el último capítulo se presenta la propuesta, su factibilidad, sus fases y como podría medirse su impacto en la sociedad.

Palabras Claves:

1. Ley Orgánica de Comunicación
2. Linchamiento Mediático
3. Prohibición de Censura Previa
4. Constitución
5. Derecho a la Información
6. Libertad de Expresión

ABSTRACTS

" The media lynching established in the current Organic Law Communication of the Republic of Ecuador and the dilemma that exists with the ban Prior censorship established in the same legal body, to ensure that the information cannot be vetoed prior to its broadcast "

The recent Communication Act passed in Ecuador has brought many doubts among Ecuador about the limitations that may arise with respect to freedom of expression; among the controversial issues is the Media Lynching and the possible dilemma that might exist with the prohibition of Censorship established in the same legal body; to clarify this issue, I will discuss in the second chapter, the Freedom of Information which is guaranteed in the Constitution and that is one of the fundamental rights enshrined in Treaties and International Instruments. In the third chapter, I examine the censorship from the pure state, historical cases at a Latin –American level and at a level from Ecuador, to then differentiate the types of censorship; in the fourth chapter, a review of all matters relating to Media Lynching is done; later, in the fifth chapter, the field research is done through surveys and interviews; finally, in the last chapter, I present the proposal, feasibility, is phases and how we could measure its Impact on society.

KEYWORDS: ORGANIC LAW OF COMMUNICATION/ MEDIA LYNCHING/ PRIOR BAN CENSORSHIP/ CONSTITUTION/ RIGHT TO INFORMATION/ FREEDOM OF EXPRESSION

KEYWORDS: ORGANIC LAW OF COMMUNICATION / MEDIA LYNCHING / PRIOR BAN CENSORSHIP / CONSTITUTION / RIGHT TO INFORMATION / FREEDOM OF EXPRESSION

Yo, **Diego Rendón Coronel**, certifico que esta es una fiel traducción del documento original.
Para cualquier referencia, mi nombre consta en la Lista Oficial de Traductores de la Embajada de los Estados Unidos de América, en Quito.
CI: 0908847627

Diego Rendón Coronel

**LOSTIN
TRANSLATION**

Traducciones legales, personales y corporativas
lostint.ecuador@gmail.com | +593 994144197

INTRODUCCIÓN

La sociedad ecuatoriana, como tantas otras sociedades, es el resultado de diversos fenómenos y hechos que han ido moldeándola y dándole una forma cada vez más desconcertante; si tan solo nos detuviéramos a observar cada detalle de la fenomenología social, cultural, económica, etc., no alcanzaría una vida antes de terminar de analizarla y tal vez así darnos cuenta de que el proceso de cambio ha comenzado otra vez. Ahora bien, en este trabajo investigativo, me he detenido en tan solo un punto de los nuevos cambios de este nuevo proceso de transformación que minuto a minuto sufrimos los habitantes dentro de un sistema social y del que apenas somos conscientes: la comunicación y su regulación dentro de las leyes.

Si tomamos la definición teórica, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, después de decirnos que la palabra Comunicar proviene del latín Comunicare nos da las siguientes acepciones: “Hacer a otro participe de lo que uno tiene. Descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa” (Novoa, 1980:87); también Aristóteles fue quien determinó el primer modelo: la comunicación con tres elementos: quien (el emisor), que (el mensaje) y a quien (el receptor). Si bien es cierto son acertados en sus afirmaciones, pero al mismo tiempo la comunicación va más allá del “Emisor” “Mensaje” y “Receptor”, porque los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, esto quiere decir que la comunicación es nata en el ser humano, sin un medio para comunicarnos y expresar nuestra voluntad, nuestros deseos y sentimientos, no podríamos sobrevivir; ésta se convirtió en el motor de los hombres, desde el más primitivo, para organizarse, alcanzar metas comunes y formar el mundo que hoy conocemos.

En nuestro país, la comunicación ha evolucionado al igual que sus medios, desde los Chasquis, pasando por “Primicias de la Cultura de Quito”, después con el primer canal de televisión “Telecuatro” y hasta la primera red de internet; si bien es cierto en la actualidad casi no hay limitaciones para encontrar un medio de comunicación a través del cual expresar nuestros pensamientos: televisión, teléfono fijo o portátil, internet, radio, correo y prensa; encontramos otros desafíos pertinentes a la materia entre ellos el que más se ha discutido en el Ecuador, ¿hasta qué punto se puede considerar que existe libertad de expresión y en qué punto se alcanza la violación de los derechos de las demás

personas? ¿Deberían existir reglas en el manejo de la comunicación? ¿Acaso hemos sobrepasado los límites de la libertad de expresión y hemos llegado a un libertinaje de vulneración de derechos?

Todas estas preguntas desencadenaron en un proceso para crear una Ley que rija los medios de comunicación y su manejo, Ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio de 2013, bajo el nombre de Ley Orgánica de Comunicación; éste cuerpo legal que posee 113 artículos encierra varios puntos de discusión, pero el que atañe a esta investigación es el Artículo 18 relativo a la Prohibición de Censura Previa y el Artículo 26 que trata el Linchamiento Mediático. Puesto que de acuerdo con la Ley mencionada dice textualmente: Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa” mientras que en lo correspondiente al linchamiento mediático dice: Queda prohibida la difusión de Información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. De allí entonces la inquietud de llevar una investigación de la profundidad de encerrar dos ideas al parecer contrarias en una Ley, establecer cuáles serán las consecuencias y verificar las posibles soluciones a fin de garantizar una comunicación libre y veraz.

CAPÍTULO I

DERECHO A LA INFORMACIÓN

1.1 LA COMUNICACIÓN

1.1.1 INICIOS DE LA COMUNICACIÓN

En La historia de la Comunicación Humana (2010), se establece una reseña de los primeros pasos de la comunicación en los seres humanos, que será de vital importancia para determinar hasta qué punto los humanos hemos desarrollado nuestra necesidad comunicacional. Así la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, la comunicación puede abarcar desde procesos simples, a las conversaciones completas y la comunicación de masas. La comunicación humana se originó hace unos 200.000 años; los símbolos se crearon hace unos 30.000 años, y la escritura nació hace unos 7.000 años.

1.1.1.1 COMUNICACIÓN VERBAL

Debido a un aspecto de evolución, que marca la diferencia con otras especies del reino animal, los seres humanos desarrollamos un medio eficaz para transmitir aquello que pensamos y sentimos: la voz, que a su vez permitió la coordinación y cooperación entre los seres humanos, lo que lo ubicó en un plano de dominación sobre el Planeta Tierra, sin embargo con el paso de los años la voz no fue suficiente para transmitir con precisión los hechos del pasado, porque en este caso dependía de la memoria de quien contaba y guardaba las historias, que casi siempre era un anciano, así con la muerte accidental de un hombre sabio, una tribu pre-alfabetizada puede perder muchas generaciones de conocimiento.

1.1.1.2 SÍMBOLOS

Los seres humanos buscaron inmortalizar sus pensamientos, de esta manera desarrollaron nuevas formas de comunicación, que por lo general se basaban en los símbolos que es una representación convencional de un concepto. A continuación algunas formas de esta comunicación empleada:

1.1.1.2.1 Arte rupestre. Son los símbolos más antiguos creado, así como el niño aprende a dibujar antes de que los maestros le muestren formas más complejas de comunicación, el homo sapiens hizo sus primeros intentos de pasar información a través del tiempo mediante pinturas. El arte rupestre más antiguo conocido es el de la cueva Chauvet, que data de alrededor de 30.000 antes de Cristo.

1.1.1.2.2 Petroglifos. El siguiente paso en la historia de las comunicaciones son los petroglifos, grabados en una superficie de roca. Tomó cerca de 20.000 años para el homo sapiens pasar de las primeras pinturas rupestres a los petroglifos, que datan de alrededor de 10.000 a. C.

1.1.1.2.3 Pictogramas. Son símbolos que representan un concepto, un objeto, actividad, lugar o evento mediante una ilustración. Pictografía es una forma de proto-escritura mediante el cual las ideas se transmiten a través del dibujo. Las pictografías fueron el siguiente paso en la evolución de la comunicación. La diferencia más importante entre los petroglifos y pictogramas es que los petroglifos simplemente muestran un evento, pero pictogramas están contando una historia sobre el evento, por lo que pueden por ejemplo ser ordenados en orden cronológico. Fueron la base de la escritura cuneiforme y los jeroglíficos.

1.1.1.2.4 Ideogramas. Son símbolos gráficos que representan una idea, pueden transmitir conceptos más abstractos, de modo que por ejemplo, un ideograma de dos palos puede significar no sólo las piernas, sino también un verbo caminar.

1.1.1.3 ESCRITURA

De acuerdo con La historia de la Comunicación Humana (2010), la invención de los sistemas de escritura es más o menos contemporánea con el comienzo de la Edad de Bronce en el neolítico tardío de finales del 4º milenio antes de Cristo. El primer sistema de escritura que generalmente se cree que fue inventado por los sumerios y desarrollado durante el 3er milenio Antes de Cristo mediante la escritura cuneiforme. Los jeroglíficos egipcios, y la Proto-elamita que siguen sin ser descifrada y el sistema de escritura del Valle del Indo también son de esa época.

El primer alfabeto propiamente dicho mediante símbolos únicos que representaban fonemas individuales surgió alrededor del año 2.000 AC en el Antiguo Egipto, aunque ya antes muchos de esos símbolos se estaban usando en sistemas de escritura, al menos durante el milenio anterior. Hacia el 2.700 AC la escritura egipcia tenía un conjunto de 22 jeroglíficos para representar sílabas que comienzan con una sola consonante de su lengua, más una vocal a ser suministrada por el hablante nativo. Durante los siguientes cinco siglos, esta semilla de alfabeto en realidad un silabario como la escritura fenicia parece haberse extendido hacia el norte. Todos los alfabetos posteriores del mundo con la única excepción del coreano Hangul han descendido de él, o se han inspirado en uno de sus descendientes.

Con el paso del tiempo, la escritura se fue desarrollando y al utilizar la tecnología creada por el mismo ser humano, se inventaron los diferentes medios de comunicación masiva; al analizar las características particulares de cada uno de los diversos medios de comunicación se puede determinar que éstos tienen características semejantes sin importar el país o la región. Se puede decir que la comunicación constituye un fenómeno mundial, que ha determinado a la humanidad en muchas maneras y que incluso ha trascendido las diferencias particulares de las sociedades.

Para realizar el análisis de los Medios de Comunicación y su legislación desde un punto de vista histórico jurídico, resulta necesario realizar una revisión por los más trascendentales medios de comunicación.

1.1.2 LA COMUNICACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA IMPRENTA

“El periódico con respecto a las dimensiones de la libertad y control es mucho más relevante para el poder estatal, dada la preponderancia de los contenidos políticos. La norma dominante es que el periódico debe ser libre y la imagen que tiene de sí mismo es de potencial oposición a la autoridad, al margen de cuál sea la realidad cotidiana”. (McQuail, 1983:45)

La imprenta es uno de los inventos más importantes y trascendentales de la historia humana, porque además de permitir plasmar de manera permanente ideas y ciencia, abrió una gran puerta a la comunicación, es por este motivo que se realizará un análisis profundo de su evolución e incursión en el Mundo, América Latina y el Ecuador, de manera que entenderemos cuál ha sido el papel de los medios en nuestra sociedad desde sus principios hasta la actualidad y de las autoridades respecto a éstos.

1.1.2.1 INICIOS DE LA IMPRENTA

En la Antigüedad los babilonios fueron las personas que dieron los primeros pasos en cuanto a la invención de la imprenta porque conocieron la impresión con sellos de arcilla; más tarde durante la Edad Media los chinos dieron grandes avances en esta área, primero por el invento del papel y segundo en su técnica que consistía en evitar copiar a mano los documentos de manera individual, entonces trazaban sus caracteres en una plancha de madera sobresaliente, la empapaban de tinta y la presionaban sobre la superficie deseada.

Pero es a Gutenberg a quien se le atribuye el perfeccionamiento de ésta técnica, es así que entre 1436 y 1450, creó un aparato que logró fundir satisfactoriamente las letras metálicas que usó en sus primeros libros, con las cuales imprimió la Biblia en 1456. De manera anecdótica se sabe que debido a sus deudas que alcanzaban los 800 florines que equivalen a un millón de dólares en la actualidad, la imprenta de Gutenberg fue embargada y mediante la venta de Biblias los acreedores lograron recuperar cinco veces la inversión inicial. Y aunque en sus inicios las imprentas fueron escasas, fueron de vital

importancia porque permitía plasmar de manera efectiva y rápida los conocimientos, pensamientos y la información, y estar al alcance de más personas. Al final, no importa quienes fueron los creadores de éste maravilloso aparato, sino que la imprenta tuvo un éxito rotundo, acompañado de una verdadera revolución a nivel tecnológico, cultural, ideológico, político, religioso y social.

Desde el desarrollo de la imprenta en Europa, hasta la creación de los periódicos tal como los conocemos en la actualidad han transcurrido más de dos siglos. El principal precursor de los periódicos parece haber sido la carta, en especial las cartas informativas cuya misión era avisar sucesos significativos para el comercio y el tráfico, que circulaban por un elemental servicio de correos. Después de haber realizado una corta reseña de los inicios de la imprenta, se realizará un examen de como éste acontecimiento impactó en el Ecuador en los años venideros.

1.1.2.2 PRENSA EN EL ECUADOR

“Se gestó uno de los ejemplares más extraordinarios de periodismo ilustrado gracias a la actuación del intelectual indígena Francisco Javier Eugenio Santa Cruz y Espejo, Primicia de la Cultura de Quito, cuyo prospecto tiene fecha de octubre de 1791.” (Álvarez, 1992:50)

A través de éste se transmitieron reflexiones morales y filosóficas, así también consejos sobre buenas costumbres, que se emitía quincenalmente, al precio de un real y medio de plata. Este periódico no tuvo una dirección revolucionario o subversiva, pero encontró obstáculos en la mente de los propios quiteños, porque al ser un periódico eminentemente de carácter cultural y científico poseía un léxico de difícil entendimiento para el pueblo que apenas se encontraba en los albores de la cultura y la educación, es así que del recibimiento frío, en unos pocos meses se convirtió en persecución, no solo en contra de la gaceta, sino también de Eugenio Espejo, alcanzando la séptima publicación fue cerrado, el 26 de marzo de 1792, dejando a Espejo bastante indignado, así en uno de sus escritos él mismo afirma: “Estamos destituidos de educación. Sería adulación, vil lisonja, llamar a los quiteños ilustrados, sabios, ricos y felices, No lo sois: hablemos con el idioma de la escritura santa; vivimos en la más grosera ignorancia y la miseria más deplorable”. (Santa Cruz y Espejo:136)

En 1810 se creó La Gaceta de la Corona que criticaba el actuar de la Corona y de sus representantes en América; años más tarde, llegaría la primera imprenta a Guayaquil, en donde se fundó El Republicano del Sur en 1822, que afirmaba expresamente que Guayaquil debía unirse a Perú y que duró solamente hasta que San Martín y Bolívar se entrevistaron. En 1824 Juan José Flores creó en Quito el diario El Noticioso, mientras que en Cuenca se creó en 1828 El Eco del Azuay.

En Ecuador no se hicieron esperar los diarios que eran parte del acontecer nacional, desde el principio de su formación la prensa estuvo presente como testigo y juez de los asuntos de interés popular, El Colombiano de Guayas tomó el nombre El Colombiano; al mismo tiempo para establecer oposición contra el General Flores la Sociedad El Quiteño Libre publicó un diario con el mismo nombre, su redactor fue Pedro Moncayo, como Enrique Ayala Mora (2011) menciona en la columna de “El Comercio” el primer número de El Quiteño Libre apareció el 12 de mayo de 1833, desde un principio fue abiertamente opositor, se fundamentaba en la defensa de las leyes, los derechos y libertades del país, y trataba de denunciar los malos manejos de la hacienda pública, uno de sus temas favoritos era la denuncia de inmoralidades y equivocaciones cometidos por Flores con los fondos públicos.

En 1838 Rocafuerte tomó el poder por medio de las armas se edita El Convencional del Ecuador, que se encargaba de informar a la ciudadanía sobre los asuntos oficiales; a partir de 1838 se imprimen periódicos en las principales ciudades del país: en Quito El Sufragante, El Ecuatoriano de Quito; en Guayaquil El Ariete, La Verdad Desnuda, La Balanza El Correo Semanal; y en Cuenca El Patriota del Azuay.

García Moreno, también forma parte de la historia de la comunicación ecuatoriana, así lo menciona el Dr. Marco Villaruel Acosta (2011) “En 1846 publica “El Zurriago”, que iba en contra del gobierno conservador del ese entonces Presidente Vicente Ramón Roca, este periódico de crudísimo lenguaje, también se burlaba en verso de su antiguo maestro, el doctor Angulo, a quien califica de fanático.” En este periodo al igual que el anterior se destacan en el ámbito de la comunicación y el periodismo Juan Montalvo y Gabriel García Moreno, este último no hacía periodismo sino, para defenderse de los ataques que venían de la oposición, liderada por Juan Montalvo.

Efrén Avilés Pino (2012) se refiere al periodismo ecuatoriano citando que a partir de 1852, durante el gobierno del Gral. José María Urbina, don Sixto Juan Bernal se convirtió en el fundador del diarismo ecuatoriano, al fundar en Guayaquil “La Ilustración”. Cuatro años más tarde el periodismo se extendió a otras regiones de la Patria con la publicación de “La Opinión de Manabí”, “El Eco de Manabí”; y “El Clamor”, de Machala, que apareció en 1857.

Diez años más tarde el periodismo ya se extendía por todo el territorio nacional con la aparición de varios diarios a través del país, entre ellos “La Calaña”, en Loja; y “La Época”, en Latacunga; y un año después, “Orden y Libertad”, en Riobamba. El Dr. Jerónimo Carrión, editó en Quito “La América Latina”, una publicación con ideales netamente americanistas, que predicaba la confederación de todos los países latinos de este continente.

En 1866 Juan Montalvo publicó “El Cosmopolita”, que causó gran polémica; y en 1878, don Juan Bautista Elizalde inició la publicación de “La Nación”, que circuló durante veintisiete años dejando a su paso una profunda huella en el periodismo nacional. Por esa misma época y para combatir al gobierno del Gral. Ignacio de Veintimilla, en 1880 apareció en Cuenca “El Correo del Azuay”.

Al iniciar el siglo XX las principales ciudades eran Quito y Guayaquil, allí fue donde surgieron los diarios de mayor importancia hasta nuestros días. El Comercio que fue fundado en 1906, según historiadores de la prensa en Latinoamérica, ha sido durante mucho tiempo el periódico más importante de Ecuador; le sigue Últimas Noticias (Quito 1938), El Universo (Guayaquil 1921), Hoy (Quito, 1982), Expreso (Guayaquil 1969), El Telégrafo (Guayaquil 1884).

1.1.3 LA RADIO

Es difícil establecer quién inventó la radio, porque, la época en la que apareció fue una etapa en la que surgieron una gran cantidad de inventos que cambiaron a la humanidad y fueron una serie de elementos los que llevaron a la aparición del radio, pero existen ciertos personajes principales en este proceso: James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas Aleksandr Stepánovich Popov

en San Petersburgo, Rusia inventó la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia; Nikola Tesla en San Luis (Misouri) hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio; Guillermo Marconi en el Reino Unido construyó el primer sistema de radio y el comandante Julio Cervera en España quien resolvió los problemas de la telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como radio. (Moragas, 1985)

1.1.3.1 DESARROLLO MUNDIAL

En 1906, en Nochebuena Reginald Aubrey Fessenden transmitió en Massachusetts la primera transmisión de audio de la historia, logrando que buques en el mar oigan la canción O Holy Night y un pasaje de la Biblia.

En cuanto a entretenimiento, las emisiones pioneras se dieron en Argentina desde 1920, con una programación basada en música clásica, su organizador, creador, y primer locutor del mundo fue el Dr. Enrique Telémaco. Cinco años después el país contaba ya con más de una docena de estaciones, que funcionaban en horarios nocturnos y en forma entrecortada.

Al hacer referencia a la información, la estación 8MK, que en la actualidad se llama WWJ de Detroit, Míchigan, que justamente pertenecía al periódico del mismo nombre comenzó a funcionar en 1920.

La British Broadcasting Corporation (BBC) hace su aparición en Inglaterra en 1922, movida por el Director General de Correos que buscaba mediante el control estatal evitar el desorden latente en Estados Unidos por la enorme cantidad de emisoras de radio. Al establecerse el Consejo de Gobernadores se encargó de gestionar la BBC, gracias a los impuestos por compra de aparatos receptores, puesto que les estaba prohibido pasar publicidad.

Pronto la radiodifusión se desarrolla de forma impresionante, al punto que el 25 de Mayo de 1926 se establece que están en pleno funcionamiento mil cuatrocientas emisoras en el mundo, cuando se aprueba en Ginebra el Primer Plan Internacional para regular el uso de las ondas hertzianas.

Es importante mencionar a Orson Wells, quien en 1938 transmitió el radiodrama *Invasion from Mars* en el día de Halloween, transmisión por la cual se hizo creer a millones de estadounidenses que el país estaba siendo invadido por extraterrestres y crear caos y conmoción social; demostrándose así la importancia y el alcance que puede tener un medio de comunicación en la población de un país.

En Italia, Alemania y La Unión Soviética, la radio cumplió un papel decisivo en la transmisión de información propagandística, a los líderes les interesaba transmitir sus ideas a una gran cantidad de personas, por eso en Alemania tomaron la medida de abaratar los costos de venta de los aparatos receptores, llegando a contar con 14 millones de radios hasta el año de 1940, existían además personas encargadas de verificar que los ciudadanos escuchaban las emisiones oficiales del gobierno y quien no lo hacía era sancionado.

Una vez que la II Guerra Mundial explotó, el uso de la radio como medio propagandístico se expandió, ahora era su principal función tanto en los Países Aliados como los países del Eje. Un claro ejemplo es Charles de Gaulle, que se pronunció en la BBC en 1940 con un discurso conocido como *El Llamado* porque convocaba a la resistencia del pueblo francés tras la derrota y la invasión por la Alemania nazi y que fue todo un éxito porque se convirtió en emblema para resistir y luchar contra esta fuerza tan nociva para la humanidad.

En 1947, se creó como agencia de la ONU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, creado con el fin de asignar frecuencias de radio a los países asistentes a las conferencias. Al término de la guerra, se puede vislumbrar en el mundo que existían dos tipos de emisoras de radio, las de carácter privado y las de carácter público, en una época en la que las tendencias de izquierda y derecha predominaban en el mundo, dividiéndolo inclusive, la radio estuvo presente para informar y muchas veces fue utilizada como un medio de control masivo.

Entre las décadas de los años 1960 y 1980 la radio entra en una época de declive debido a la competencia de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda corta de alcance global por VHF el cual solo tiene un alcance de cientos de kilómetros. En los años de 1990 las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse al mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas con la radio satelital, también llamada radio HD, esta tecnología permite el resurgimiento en el interés por la radio. Así, hoy en día la radio sigue en constante evolución, en un proceso que el fin no es el medio sino la audiencia, que es cada vez más capacitada para cerrar el proceso de la comunicación al ser retroalimentadas por medios más democráticos como es la internet. (Garza, 2008)

1.1.3.2 DESARROLLO DE LA RADIO EN EL ECUADOR

En nuestro país la radio ha ocupado un papel importante dentro de la comunicación desde el término de la II Guerra Mundial y al igual que la televisión y la prensa se ha visto rodeada e influenciada por el acontecer nacional.

Al igual que en todo el Mundo, en el Ecuador la aparición de la radio fue un adelanto tecnológico que trajo sensación dentro de la población; pero como sucede con toda innovación al principio, solo las familias más adineradas tenían los medios para adquirir uno de estos aparatos por su alto costo, además las radiodifusoras no tenían suficiente alcance tan amplio como ahora y sufrían de varios inconvenientes técnicos, de acuerdo a una entrevista realizada a Manuel Mantilla, “las transmisiones a control remoto tenían el mismo empirismo del resto, y aun cuando ya se usaba el teléfono, su técnica y empleo eran rudimentarios y las transmisiones fuera de la emisora era toda una odisea, cuando se transmitía desde las calles y carreteras las líneas se tomaban directamente de las redes telefónicas, con las consiguientes peripecias de técnicos y locutores” (San Félix, 1991:205)

La Radio en Ecuador Reseña Histórica (2010), proporciona una corta reseña de los acontecimientos más importantes que marcaron hitos en la historia de la radio Ecuatoriana.

Año 1924

Muchos afirman que en Guayaquil se introdujeron los primeros aparatos receptores de radio entre 1925 y 1927, afirmando también que la primera transmisora fue fundada por Francisco Andrade Arbaiza, en Las Peñas, llamada Radio París; sin embargo el primer aparato radial estuvo en Riobamba, en 1924 gracias a Carlos Cordovez Borja, transmisor que tuvo 100 W. para contactos con radioaficionados, antes de ser una emisora.

Año 1929

El Dr. Ortiz Arellano (2011) realizó un estudio sobre los inicios de la radio en el Ecuador, estableciendo así que el ingeniero Carlos Cordovez Borja, formado en la universidad norteamericana de Yale, fue el encargado de construir, los equipos necesarios con los que el 13 de junio de 1929 a las 21 horas empieza a funcionar desde una antigua bodega de una fábrica textil la primera emisora ecuatoriana: Radio El Prado en la ciudad de Riobamba.

El nacimiento de la radiodifusión en Riobamba se ubica en la etapa que “la edad de oro” de la ciudad, en la primera mitad del siglo XX. Fue la época de mayor esplendor que ha tenido Riobamba desde su reasentamiento en 1799. En los años comprendidos entre 1900 y 1930, los que conformaban el núcleo urbano, desarrollaron una serie de actividades de gran calidad en todos los planos: urbanístico, literario, musical, deportivo, bancario, industrial.

Año 1931

En Quito, la primera emisora de radio se dio gracias a un grupo de pastores evangélicos que adquieren un permiso de operación, que fue aceptado ser entregado por el presidente de la época Dr. Isidro Ayora, así HCJB, constituye la primera radio de Quito. (Erazo, 1980)

Año 1935

Pocos años después, en la ciudad de Guayaquil, el profesional alemán Juan Behr promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una emisora que llevaría el mismo nombre de la versión impresa Radio El Telégrafo en 1935.

Año 1938

Las primeras emisiones de radio en Cuenca fueron emitidas desde un transmisor de 50 vatios de potencia instalado en la casona de la señora Hortensia Mata.

Año 1939

Radio El Prado realizó sus últimas transmisiones cuando sus propietarios deciden radicarse en los Estados Unidos.

Año 1940

Aparece en la capital de los ecuatorianos Radio Quito radioemisora perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio.

Año 1949

El 12 de febrero se pone al aire la versión radiofónica de “La guerra de los mundos” de Orson Wells a través de la señal de Radio Quito. Esto provocó el pánico entre los quiteños, quienes una vez anunciado el mensaje, que se trataba de una obra de ficción, reaccionaron indignados contra la radioemisora.

Año 1996

Empieza a funcionar el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL). Ente encargado mediante disposición contemplada en la Ley de Radiodifusión y Televisión de autorizar las concesiones y regular la operación de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador.

1.1.4 TELEVISIÓN

1.1.4.1 DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL

La televisión es, definitivamente, uno de los inventos más extraordinarios de los últimos 100 años, y el que más ha influenciado el pensamiento actual.

Aunque para muchos la televisión se desarrolló después de la II Guerra Mundial, lo cierto es que ya se experimentaba a finales de los años 20 y las primeras emisiones se dieron a mediados de los años 30. El primer centro de emisión regular estuvo ubicado en Berlín, se llamaba Centro Paul Nipkow, al parecer como iniciativa de Goebbels, quien se preocupó de alcanzar a los ciudadanos alemanes con su ideología no solo con la radio, prensa, además a través del reciente invento la televisión, siendo el Ministerio de Propaganda el responsable de manejar sus contenidos. Sus transmisiones duraron hasta que los Aliados tomaron la capital alemana.

A la par con las primeras emisiones alemanas, la BBC también comenzó a transmitir por medio de la televisión, pero no con tanto éxito como en Alemania, los contenidos de estas emisiones se basaron en filmaciones tomadas del cine, esta innovación llamada televisión aún necesitaba de más años y experiencia para desarrollarse. En la postguerra, se pueden diferenciar 3 tipos de sistemas bien claros en cuanto al manejo de la televisión: el propagandístico que es común en los estados comunistas, el modelo comercial propio de Estados Unidos y Latinoamérica, y el monopolio público que se ve reflejado en Europa Occidental. (Varela, 2005)

1.1.4.2 TELEVISIÓN EN EL ECUADOR

Actualmente la televisión se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación. Desde sus inicios ha tenido un enfoque de carácter comercial, presentando películas, novelas, series y noticieros, en este ámbito coexisten tanto canales de carácter privado y como de carácter estatal en los ámbitos nacional, regional y local.

HISTORIA

La iniciativa la tuvieron José Rosenbaum Nebel de padres judíos alemanes que habían huido de los fragores de la Segunda Guerra Mundial y se habían radicado en Ecuador y Linda Zambrano de Rosenbaum esposa manabita, fueron pioneros de la Primera Emisión y Transmisión de la Televisión Ecuatoriana, puesto que aquí arman los primeros equipos a través de un técnico, equipos de transmisión y emisión y cámaras que fueron traídos desde Alemania, Japón, Holanda y Estados Unidos 1959; realizaron exhibiciones de televisión en 1959, primero en Quito, y luego en Guayaquil. En Quito no logran apoyo para el establecimiento de un canal de Televisión, lo que sí hallan en Guayaquil. El Primer circuito cerrado realizado en Guayaquil se efectuó el martes 29 de septiembre de 1959, a las 8 y 30 de la noche.

El Decreto N° 1917, promulgado por el entonces Presidente Camilo Ponce Enríquez, publicado en el registro oficial con el número 985, el 5 de diciembre de 1959. Expiden reglamento para televisoras Se aprobó el reglamento para la instalación de estaciones transmisoras de televisión. El Primer Mandatario firmó el Decreto N° 1917 que contiene el mencionado reglamento que ha sido elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En el reglamento se determina que se entiende por televisión un sistema de telecomunicaciones para la transmisión de imágenes. En esta pugna por llegar primero, el Estado otorgó la primera frecuencia de televisión a nombre de Linda Zambrano de Rosenbaum, para el funcionamiento de Canal 4, Teletortuga y Primera Televisión Ecuatoriana Canal 4 de Televisión con sede en Guayaquil, mediante decreto ejecutivo emitido con fecha miércoles 1 de junio de 1960.

Doña Linda recibió de manos del entonces Ministro de Obras Públicas Sixto Durán-Ballén el documento histórico que la convertía en la primera concesionaria de un canal de TV en la historia del país. El Canal fue inaugurado oficialmente el lunes 12 de diciembre de 1960.

La primera Televisora en Quito fue HCJB TV, en 1959 por iniciativa de la Unión Nacional de Periodistas se trasladan los equipos de televisión de HCJB a los Jardines del Colegio Americano de Quito, pero tuvo que esperar hasta 1961 año en que se otorga el permiso de funcionamiento para HCJB TV, que sería el segundo canal de TV en la historia del Ecuador, con funcionamiento en Quito. El decreto ejecutivo se publica en el registro oficial el viernes 12 de mayo de 1961, con el número 821, firmado por el Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente del Ecuador, así los quiteños pudieron ver televisión en blanco y negro. Así empezó la historia de la televisión comercial en nuestro país. La Ex-Teletortuga y la Ex-Primera Televisión Ecuatoriana Canal 4 de Televisión hoy es la actual RTS RedTeleSistema en la ciudad de Guayaquil, y la Ex-HCJB TV Canal 4 de Televisión hoy es la actual Teleamazonas en la ciudad de Quito. (Poma, 2013)

La industria televisiva era privada nace como un modelo anglo, siendo el Estado dueño de las frecuencias para esto se reservaba el derecho de concederlas, y esta transmitía programas estatales de educación y salud. Fue en la década de los 60's que se marca en el país un notable desarrollo es así que nacen Canal 2 en Guayaquil en 1967, el miércoles 1 de marzo de 1967 Ecuavisa lanza por primera vez su señal al aire el canal pertenece a la empresa ENSA del empresario Xavier Alvarado Roca; el viernes 30 de mayo de 1969 Tc Televisión lanza por primera vez su señal al aire, el canal pertenecía al diario El Universo del empresario Ismael Pérez Perasso; y Canal 8 en Quito en 1970. Es así que la televisión entra a formar parte de la impresionante red de comunicación del país junto con la prensa y la radio comenzando a cubrir todo el territorio nacional. (Ib.)

Con estos acontecimientos se empezaron a adquirir los primeros televisores a través del guayaquileño de apellido Noriega quien importaba estos artículos de marca Emerson, cuyo objetivo consistía en que la población adquiriera el producto, a bajo costo, poco a poco fue teniendo éxito en el mercado local, ya que el alcance de la televisora iba creciendo, a esto se instalaron antenas repetidoras para realizar

transmisiones de mejor calidad, siendo los primeros programas en donde se apoyó al talento de la música ecuatoriana con artistas invitados como Julio Jaramillo, Blanquita Amaro, entre otros. (Ib.)

En los 70's la historia continúa, así el viernes 22 de febrero de 1974 Teleamazonas comienza sus transmisiones a color convirtiéndose en la primera red en color del Ecuador y el lunes 18 de abril de 1977 nace GamaTV creándose Canal 2 en Quito.

En la década de los 80's se da paso a la televisión por cable, con la compañía TVCable, fundada en 1986, incrementando cada día el número de afiliados a esta red, teniendo un crecimiento masivo en todo el país.

En los 90's se registra y acoge la hazaña de la televisión ecuatoriana de moda Canal Uno y Telerama, que aparecieron las nuevas sangres de las universidades en el espectro televisivo del Ecuador y hacer el mejor entretenimiento de los 90.

El 3 de Noviembre de 1993 en honor a la independencia de Cuenca surge desde el Austro del país la señal de ETV Telerama, con un formato innovador, educativo y cultural, su fundador es el empresario cuencano Juan Eljuri, propietario del Banco del Austro. Canal Uno empieza a emitir su señal el lunes 6 de mayo de 2002.

Canal Uno y Telerama es hoy en día el sexto y séptimo canal más joven del Ecuador después de RTS Canal 4 de Guayaquil, Ecuavisa Canal 2 de Guayaquil, TC Televisión Canal 10 de Guayaquil, Ecuavisa Canal 8 de Quito, y Teleamazonas Canal 4 de Quito, dejando en el olvido a canales como Gama TV Canal 2 de Quito que alguna vez tuvo que sufrir después de algunos años de reinado, de ausencia, de frustraciones y de ocupar las metamorfosis de la historia de la televisión ecuatoriana. (Ib)

El canal oficial del Estado “TV Ecuador”, inicio su primera señal de prueba el 30 de Noviembre del 2007 con motivo de la instalación de la Asamblea Constituyente desde Ciudad Alfaro en Montecristi, provincia de Manabí.

El estudio sobre usos y preferencias de medios de información en sectores populares de Ecuador, realizado en 1989 por CIESPAL, informa de la costumbre socializada al ver televisión, pues su sintonía se produce dentro de espacios familiares o comunitarios, lo que determina la existencia de relaciones sociales específicas dadas por y en torno al medio, se muestra también que la necesidad de los campesinos de insertarse en el mundo hace que sean las noticias nacionales las que se prefieran más, en áreas rurales respecto a sectores urbanos. (Ib)

De esta forma se ha hecho un recuento de la introducción de la televisión al Ecuador, la cual produjo un cambio total de la forma comunicación conocida hasta ese entonces y originó una serie de actividades y oportunidades inadvertidas por la sociedad ecuatoriana.

1.1.5 INTERNET

1.1.5.1 BREVE HISTORIA DEL INTERNET EN ECUADOR

En el Ecuador, la primera institución en proveer acceso al Internet fue EcuaneX, establecido en 1991 por la Corporación Interinstitucional de Comunicación Electrónica, Intercom. Esta red forma parte de la red mundial del Institute for Global Communications/Alliance for Progressive Communications (IGC/APC), que provee este servicio a organizaciones no gubernamentales y de desarrollo.

Nuestro país decide entrar en el mundo del internet y los primeros en usarla serán los bancos y las politécnicas. Pero cada día se hace más necesaria la herramienta tecnología de la internet por lo que inmediatamente el Banco del Pacífico crea ECUANET, una empresa que empieza a manejar dominios y las primeras redes de internet. Se podría decir que en los 90 inició la masificación del internet en el Ecuador con los exploradores gráficos. Así mismo aparecen numerosos proveedores de internet y en la actualidad sobrepasan los 50 en varias especialidades como empresariales y académicas

principalmente. A inicios del año 2000 se evidencia una masificación de los cyber cafés y todas las universidades cuentan con el servicio de internet. Cinco años más tarde se masifica el internet de banda ancha para hogares e instituciones particulares, es así que el chat va tomando cuerpo y se lo utiliza para concretar varios negocios; con la novedad del chat también se crean las famosas redes sociales, los blogs y las páginas personales se hacen más comunes en el 2005. De a poco el internet va tomando fuerza en varios aspectos y uno de esos es el político, que se lo empezó a utilizar para campañas políticas así como también para emitir criterios personales a través de blogs. (Rodríguez, 2010)

1.2 ANTECEDENTES DEL CONCEPTO DERECHO A LA INFORMACIÓN

El Derecho a la Información, surgió en un discurso de Kent Cooper, director ejecutivo de la Prensa Asociada, el 23 de enero de 1945, en el cual dijo: "Los ciudadanos tienen derecho al acceso de las noticias, presentadas en forma cabal y exacta. No podrá haber libertad política en ningún país, o en el mundo en general, si no se respeta el Derecho a la Información" (Cooper, 1959:46). En Ecuador: El derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agravadas en su honra por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma gratuita, inmediata y proporcional.

La información hoy más que nunca es un factor preponderante en el desarrollo de una sociedad, es una necesidad social basada en la función social que cumple la información, que de acuerdo a conocedores en el tema es contribuir a la educación de sus integrantes para que estos a su vez produzcan nueva información. El nacimiento del concepto "derecho a la información" está ligado a los cambios desarrollados en los últimos años en las áreas de la información y la comunicación, y a los aportes que estos sucesos generan en el desarrollo de la realidad de la sociedad, al mismo tiempo estos cambios se ven reflejados en el ámbito del derecho, motivo por el cual es necesario que se establezca una respuesta a las incógnitas que surgen a partir de la información en medio de una sociedad que como todo aspecto en este universo nunca se encuentra estático, sino en constante movimiento y evolución. Así en este ámbito la construcción del derecho a la información no termina en reconocer que existe la libertad informativa, sino que surge de él, entonces el bien jurídico protegido por el ordenamiento, exige una

organización normativa que generará relaciones jurídicas creándose así la forma social de realización del derecho.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, se origina la doctrina del derecho a la información, como resultado de una reflexión democrática sobre los acontecimientos que de esta guerra se originaron, así se analizan varios puntos, entre ellos se critica que la libertad de información es sobre todo un derecho para la persona que informa, también se critica que la libertad de información ha permitido que en muchos casos el mercado someta a la información y finalmente se critica que el hecho de que exista libertad de información no imposibilita que el Estado interfiera en la información con fines de control o de orientación de su contenido. (Bonet, 1994)

Como todo componente social, la libertad de información ha pasado por varias etapas históricas, la primera que se encuentra entre el siglo XVIII y XIX, años en los que se establecen las imprentas en las primeras sociedades, sobre todo de carácter monárquico; la segunda que va desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, etapa en la que se forman nuevas naciones a partir de las colonias independizadas, prima el protagonismo de informadores profesionales y existe una tendencia al caudillismo en cuanto al contenido de la información; finalmente la tercera etapa que viene desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, en la que el derecho a la información es un derecho consagrado universalmente, los ciudadanos están protegidos tanto por los instrumentos internacionales como por las Constituciones de cada país, llegando a ser considerado una garantía e incluso una facultad jurídica. Por lo tanto la información es considerada como un bien necesario para cada ciudadano, porque a la vez que satisface su necesidad social, permite que las personas sean miembros activos de la sociedad con conocimiento suficiente del acontecer que le rodea y por lo tanto con verdadera responsabilidad de sus actos.

1.3 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN

En la actualidad, dentro del mundo de las leyes y sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, es bastante recurrente escuchar del derecho a la información, y a veces se dan confusiones entre el derecho de acceso a la información o el derecho a la información pública, he aquí la necesidad de

enmarcar al derecho de la información dentro de un concepto; además al ser una disciplina en formación y reconocimiento no es tan sencillo distinguir con claridad el alcance de los términos que abarca este aspecto. Así, se puede afirmar que el derecho a la información es una rama del derecho que regula las consecuencias y manifestaciones del actuar informativo que tienen importancia para el derecho; la presencia de esta rama del derecho está cada día más consolidada y va cobrando importancia gracias a la normativa y a la jurisprudencia que va surgiendo al respecto. Así mismo se dice que el derecho a la información es una ciencia jurídica universal y general que señala los fenómenos informativos y les otorga una configuración jurídica para normar las actividades informativas, las relaciones jurídico-informativas, al servicio del derecho a la información. (Villanueva, 2003)

1.4 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN: DERECHO FUNDAMENTAL

Según Luigi Ferrajoli (2001) son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos en tanto personas, ciudadanos capaces de obrar; partiendo de este concepto, se puede afirmar que el derecho a la información es un derecho fundamental, porque es un derecho subjetivo que garantiza a una persona el acceso a un bien jurídico que es la información, al mismo tiempo es un derecho a título universal porque como se encuentra establecido tanto en las leyes nacionales de cada Estado como en instrumentos internacionales. Por tanto el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y un aspecto vital que de acuerdo a los modelos internacionales debe tener todo Estado moderno democrático; además el derecho a la información se constituye como fundamental para garantizar a la sociedad información objetiva, completa e imparcial como elemento indispensable de un Estado democrático y plural.

Como se ha analizado, el derecho a la información abarca determinados derechos y libertades, pero además debe comprender también ciertos elementos a fin de propender a su aplicación efectiva, por eso es fundamental que se creen principios o instituciones que fortalezcan los derechos y también ayuden a su reconocimiento, en este punto, el Estado cumple un rol de gran importancia, porque tiene la obligación de cumplir todas aquellas garantías que se encuentran en la Constitución, lo que se traduce

para el poder público como la tutela efectiva. Entonces al hablar del derecho a la información como derecho fundamental, no solo nos referimos a todos aquellos elementos que lo configuran, sino también a la obligación que tiene el Estado frente a las personas que conforman la sociedad para que estos derechos sean aplicables y reales, no basta con reconocer y respetar el derecho a la información, es necesario que se aseguren mecanismos para que la información llegue a las personas, para que estas estén al tanto del acontecer nacional, los problemas que afectan a su comunidad y de esta manera buscar soluciones e incluso emitir opiniones y criterios, este es el verdadero significado del derecho a la información.

1.5 PERSPECTIVAS DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN

Dentro del estudio del derecho a la información, se realiza una diferenciación desde dos perspectivas, primero como ciencia jurídica y después como ordenamiento jurídico, sin embargo para realizar este análisis es necesario tomar en cuenta que estos son compatibles y que además se complementan para su mejor entendimiento.

1.5.1 EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN COMO CIENCIA JURÍDICA

El derecho como ciencia provee las soluciones adecuadas a los problemas, siendo un instrumento que facilita la labor de los legisladores y de las personas entregadas al derecho, en el caso del derecho de la información es una ciencia porque constituye un sistemático conjunto de conocimientos, con un objeto determinado que es la información y es ciencia jurídica porque al conocer los fenómenos que rodean al ámbito de la información, los dirige hacia la justicia. (Aguirre, 2003)

El derecho a la información es considerado como una ciencia que partiendo de la justicia, plantea soluciones a aquellos problemas que surgen del tema de la información, además se preocupa de la realidad jurídica naciente y la conceptualiza dentro de los límites necesarios con el fin de emitir juicios objetivos; por tanto el Derecho a la Información es una ciencia al igual que lo es el Derecho Civil, citando un ejemplo, porque no es solo un ordenamiento de leyes, es ciencia pura porque estudia

fenómenos de carácter social, a partir de los cuales por medio de la observación se obtienen características comunes, se construyen hipótesis, se deducen principios y finalmente se emiten leyes. Así también hablando objetivamente el Derecho a la Información, ubica a la información frente al derecho como objeto de ciencia, utilizando el lente jurídico para realizar el estudio científico, tomando conceptos, sistemas y métodos que pertenecen a la ciencia del derecho para ponerlos a las órdenes de la información.

Para ampliar un poco este tema es necesario mencionar a Desantes (1977), quien considera que el Derecho a la Información es la ciencia jurídica universal y general que, acotando los fenómenos informativos, les confiere una específica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad informativa, las situaciones y relaciones jurídico-informativas y sus diversos elementos, al servicio del derecho a la información. De esta aseveración se puede decir que el derecho a la información es una ciencia de carácter práctico, no es posible dejarla dentro del ámbito de lo teórico, puesto que evalúa conductas activas referentes a la reacción en cuanto al tema de la información y sus resultados, pero a la vez estudia el proceso que ha llevado a esos resultados, por estos motivos es una ciencia activa y práctica.

Ernesto Villanueva (2003:2) afirma: “El derecho de la información es la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan, lato sensu, las relaciones entre Estado, medios y sociedad, así como, stricto sensu, los alcances y los límites del ejercicio de las libertades de expresión y de información y el derecho a la información a través de cualquier medio.” Al respecto, Lato Sensu es una expresión latina que significa "en sentido amplio" y Stricto Sensu es una expresión latina que significa "en sentido estricto", entonces el Derecho a la Información es la rama del Derecho Público cuyo objeto es el estudio de las normas jurídicas que regulan en sentido general las relaciones entre Estado, medios y sociedad y específicamente el ejercicio de la libertad de expresión.

Por otro lado López-Ayllón (2000:173) dice: “El derecho de la información es un concepto doctrinal que se refiere al estudio y sistematización de las disposiciones jurídicas vigentes en materia de información. Por definición incluye, pero no se agota, en el estudio de las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones. Su estudio responde, en la mayoría de los casos, a tipologías ad hoc que describen la situación en países y circunstancias específicos.” El Derecho de la Información rige en todos aquellos temas de materia

de información, es decir las facultades y libertades de buscar, recibir y difundir información y opiniones.

1.5.2 EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN COMO ORDENAMIENTO

Al realizar un análisis del Derecho a la Información como ordenamiento, se llega a la conclusión de que el intercambio de opiniones, ideas, conocimientos y pensamientos, es realmente bastante previo a la aparición de la ciencia y del derecho, que por cierto heredamos de los Romanos, además la información ha estado presente en toda sociedad desde su creación y aún en el supuesto de que todo el ordenamiento sufra un cambio, la comunicación siempre estará presente.

Después de analizar al Derecho a la información como ciencia, es vital establecer los motivos por los cuales es un ordenamiento, pues bien a través de la historia comunicacional se ha dado la necesidad de crear ciertas leyes de regulación entre las ciencias informativas y de las ciencias jurídicas, como sucede a través de los años con la mayoría de las ciencias, así estas leyes se convierten en la base jurídica del derecho a la información, que a la vez está formado por el conjunto de normas jurídicas que se crean en torno a las relaciones informativas que tienen como objetivo la comunicación social. (Sánchez, 2003)

Bonet (1994:29) dice: “El derecho de la información es el conjunto de normas jurídicas vigentes en materia informativa y que tiene como característica el que sus normas sean de distinta naturaleza: penal, mercantil, administrativa o, incluso, normas constitucionales; y también, por hacer referencia a aspectos muy diferentes entre sí.”. Este ordenamiento jurídico es aún un tema delicado, y dependiendo del autor, existen diversas variaciones, a pesar de esto es posible establecer un lineamiento que le permite establecerse como un ordenamiento, a través del estudio de las libertades de recibir, buscar y difundir información, sus conflictos y límites, responsabilidades, participación del Estado, actividades de comunicación; así el conjunto de estos principios conformarían la totalidad de esta rama del derecho.

Fernández Areal (1977:9) acerca del Derecho a la Información dice: “El conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la tutela, reglamentación y delimitación del derecho a obtener y difundir ideas, opiniones y

hechos noticiables, y ello por fuentes propias o, especialmente, a través de los ya conocidos medios de comunicación social y otros que pudiera el hombre inventar.”. Este derecho se originó ante la necesidad de regular y constituir el ejercicio de un derecho propio del ser humano, reconocido con estas características en las leyes fundamentales de todos los países modelados en el ámbito jurídico-político dentro de una forma de Estado de derecho.

El derecho a informar, el derecho subjetivo a la información, y poder informarse, el derecho a emitir ideas y a recibirlas, es el objeto principal del derecho de la información, y su vez es el motivo de que exista, es decir la causa de su creación.

El Derecho a la Información, como ya se ha explicado anteriormente es un derecho de carácter natural, tomado primero a través de los instrumentos internacionales y de la Constitución de cada país, para luego desarrollarse más ampliamente a través de normas, como en el caso del Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación, es importante destacar siempre el papel fundamental del Estado de garantizar las libertades públicas mediante una adecuada imposición de normas con el fin de llevar a cabo su fiel cumplimiento.

El derecho de la información es una rama en plena formación que busca su autonomía respecto de las ramas jurídicas clásicas, porque al igual que todo en la naturaleza, todo permanece en constante movimiento, incluidos los fenómenos sociales, en materia de comunicación, también se ha desarrollado a grandes pasos, por eso es menester darle la importancia que corresponde.

Este ordenamiento jurídico, aparece y se desarrolla obedeciendo también a los avances tecnológicos de estos últimos tiempos, en la actualidad casi no hay persona en el mundo que no tenga acceso a algún tipo de comunicación, el internet ha sido el causante en última instancia de una revolución comunicacional en la que a cada segundo se está transmitiendo y recibiendo miles de datos informativos, así es imposible evitar que se aplique una regulación jurídica sobre este fenómeno social comunicacional.

1.6 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Sánchez Ferri en su libro el Derecho a la Información (1974) establece que el derecho a la información es una parte fundamental de los derechos de participación, es decir sin éste difícilmente podrían ser ejercidos de manera libre y responsable, porque como miembros de una sociedad necesitamos estar al tanto de todo aquello que podría afectarnos de manera directa o indirecta, entonces teniendo el conocimiento suficiente del entorno social se puede participar de manera legítima en el acontecer nacional, no solo como simples espectadores, sino de manera activa mediante la emisión de juicios y opiniones. Establece las siguientes características:

Es personal, porque incide en el perfeccionamiento de la persona, sobre todo en su esfera social.

Es un derecho natural, por cuanto su razón de ser radica en la naturaleza sociable del hombre.

Es un derecho público, oponible erga omnes.

Es un derecho universal, inviolable e inalienable.

Es un derecho político, en el sentido de que permite y se funda en la participación política o en las funciones públicas.

No es un derecho absoluto, sino susceptible de limitaciones, en cuanto a su manifestación práctica.

Respecto a las características generales del Derecho a la Información, Escobar de la Serna (2000), establece las siguientes conclusiones:

Que la información, objeto o contenido del derecho, y por lo tanto también del deber, no puede ser otra que aquella cuya naturaleza y calidad sea adecuada para satisfacer los intereses que se intenta proteger, de realización personal y social en la participación de los ciudadanos en la vida pública.

Que existe la necesidad de tutela del sujeto activo o acreedor del derecho a ser informado, en lo que el grado de educación y formación del receptor es cuestión fundamental.

Que tienen igualmente el derecho a obtener información y el deber de transmitirla lo más fielmente posible.

Que todo miembro de la sociedad, y ella misma en su conjunto, tiene derecho a la información.

Que los profesionales de la información son intermediarios entre los entes públicos y los destinatarios de la información.

1.7 FUENTES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, también es importante tomar en cuenta la jurisprudencia, porque al tratarse el derecho a la Información se debe contar con las referencias que hacen alusión al tema; el Derecho Social puede formar parte del conjunto de elementos fuente de este derecho.

1.8 NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Es derecho subjetivo de interés público y social porque el derecho a la información faculta a realizar las conductas permitidas, en primera instancia, a todos los miembros de la comunidad, pero en caso de conflicto con el interés privado prevalece siempre el interés público.

1.9 SUJETOS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

En este ámbito es destacable que para ser sujeto del derecho a la información no existen limitaciones, y ello tanto en el caso del sujeto activo como en el del pasivo, puesto que todas las personas son titulares de este derecho, a tal punto que a nivel de instancias internacionales se está intentando establecer un derecho universal a la información, pero para su estudio, se realizará una diferenciación entre tres tipos de sujetos:

Sujeto universal. (Público)

Sujeto cualificado. (Profesionales)

Sujeto organizado. (Empresas)

Las relaciones que se dan entre ellos son complejas, porque se afirma que puede ser de tipo contractual entre el Sujeto Cualificado y Organizado, pero al fin y al cabo aunque sean por motivos de estudio personas diferentes, en cualquier momento pueden cambiar sus roles, dependiendo de su función en un determinado tiempo o de la perspectiva con la que se los mire.

Así también se afirma que cada uno de estos sujetos simboliza los principales componentes del derecho a la información, así el Sujeto Universal la facultad de recibir, el Sujeto Organizado la facultad de difundir y el Sujeto Cualificado la facultad de investigar.

1.9.1 SUJETO UNIVERSAL

Para entender a este Sujeto es necesario tomar en cuenta al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión”. Esto significa que todos somos sujetos universales del derecho a la información, porque no importa el medio, recibimos información, aunque varios expertos en el tema afirman que este punto es discutible porque no todas las personas tienen acceso a todos los medios de comunicación, por lo que la información varía, por tanto dependiendo del nivel económico de la persona se podría medir hasta que punto quien es el verdadero sujeto universal; sin embargo dentro de un marco teórico, todas las personas son sujetos universales del derecho a la información.

1.9.2 SUJETO CUALIFICADO

En este ámbito el periodista es quien ocupa el lugar de sujeto cualificado, cuyo trabajo consiste en transmitir información, aunque es destacable que todas las personas transmitimos información de una forma u otra, la diferencia es que para el periodista esta actividad constituye una profesión.

Se afirma que el sujeto cualificado guarda una relación contractual con el sujeto organizado que se analizará más adelante, entre las características de esta relación son el contrato de trabajo y la dependencia, pero basados en esta relación no se puede decir que persigan los mismos objetivos, porque la relación entre el periodista y la empresa periodística se limita al área laboral, entendiéndose que un periodista no podría ser despedido por razones ideológicas, de esta manera el periodista es responsable de sus acciones, pero solo es responsable de lo que hace en libertad; aquello que se escribe en un diario, lleva ciertos derechos que conciernen a la empresa editorial, sin embargo no el derecho moral de autor, que es inalienable e intransferible.

1.9.3 SUJETO ORGANIZADO

Este tipo de sujeto hace referencia a las empresas informativas, así empresa es una organización, institución o industria dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales, en el caso de una empresa informativa, el objetivo es la información, que es transmitida gracias al ejercicio de la libertad de la empresa, la ley faculta a la creación de este tipo de empresas, pero no es lo mismo vender bienes que vender información, y las empresas informativas siempre van a tener un determinado público para el cual van a canalizar la información. En este sujeto también se incluyen las organizaciones que tienen finalidad informativa, que no son empresas, pero guardan otro tipo de intereses como las ONG'S, las confesiones religiosas y los partidos políticos.

1.10 EL OBJETO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Básicamente el objeto del Derecho a la Información son toda clase de ideas, hechos y juicios que se corresponden con los conceptos de propaganda, noticias y opiniones, cualquiera que sea el medio por el que se transmitan. Desantes (1997) dice al respecto que al darse un hecho, la consecuencia será un juicio de opinión, que cuando es comunitaria será llamada opinión pública y somete al hecho a un juicio de valor, es una situación intermedia que también requiere un mínimo de objetividad; la difusión generalizada de un hecho real acompañado de las circunstancias que lo rodean es llamado noticia, al menos en teoría, es reflejo de un acontecimiento real, con lo que tendrá mayor objetividad; finalmente la propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto de alguna causa o posición, es la más subjetiva.

Es importante realizar esta diferenciación dentro del objeto del Derecho a la Información porque esto determina su trascendencia y dependiendo del tipo de mensaje, así será su tratamiento jurídico. Es importante destacar que el mensaje no es de carácter universal como sucedía con los sujetos de la información, en el objeto de la información rige la generalidad, puesto que en general todos los mensajes pueden ser difundidos, con sus debidas excepciones.

1.10.1 EL MENSAJE DE OPINIÓN

En el mensaje de opinión no necesariamente rige una verdad universal, sino el carácter subjetivo de la ideología de cada persona, la forma más clara de mensaje de opinión es la Editorial de un periódico, en ella una persona con vasto conocimiento en un tema determinado realiza una crítica que dependiendo de quién lo lea determinará si es bueno o malo. Casi todo se puede criticar, aunque no sea del agrado de todos, pero al ser de interés público, generalmente se realiza sobre temas políticos o del actuar social. Por tanto en un mensaje de opinión existe crítica, ideología y subjetividad, pero esto no quiere decir que sea ilegal, puesto que dentro de los instrumentos internacionales y la Constitución se garantiza la libertad de pensamiento y su difusión.

1.10.2 COMUNICACIÓN DE IDEAS.

También conocida como propaganda, las ideas no sólo se comunican, sino que también se propagan porque unos se adhieren a ellas y otros no. Su fuerza de expansión va en incremento en un mundo globalizado, no puede decirse que sea buena o mala, excepto cuando se establece un monopolio, porque dependiendo de la capacidad económica se puede acceder a ella.

La propaganda al igual que todo tipo de información requiere de libertad para ser difundida, y al igual que todo objeto informativo debería poseer total veracidad, pero en realidad aquí se exagera un poco la verdad de los hechos, porque al tratar de vender o promocionar una idea se la muestra de una forma subjetiva, en todo caso es estudio del derecho aquello que se promociona sin ser verdad porque se podría constituir como estafa o engaño al consumidor.

1.10.3 LA NOTICIA

La Noticia como objeto del Derecho a la Información deberá ser conforme a la realidad, porque debe tener completa objetividad, he ahí la importancia de que la persona que informa tenga bien claros sus

principios, de esta manera en una noticia no pueden existir mentiras, calumnias, datos inexactos, medias verdades, disimulos; Así mismo la información dentro de una noticia deberá ser completa; es también importante que sea rápida, es decir que los hechos sean informados a la brevedad, porque una noticia atrasada puede suponer un falso conocimiento de la realidad. A la hora de informar una noticia, la persona que lo hace deberá contar con la veracidad y la objetividad para hacerlo.

CAPÍTULO II

LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

2.1 CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

La libertad de expresión es uno de los derechos humanos más importantes, si se los puede jerarquizar, entendida como la facultad que, por el solo hecho de pensar y tener un criterio respecto de algo, tenemos todos para expresar libremente ese pensamiento sin que por ella debamos ser reprimidos, censurados o recibir calificativos poco encomiables. (Checa, 2012)

Existe confusión respecto a ciertos términos que guardan relación con este tema, así de la libertad de pensamiento, se derivan la manifestación de la libertad de conciencia y de la libertad política, de aquí deriva la libertad de expresión que a su vez deriva en el Derecho a la Información. Muchos expertos se refieren al tema Libertad de información y que este tiene su origen en la libertad de expresión, que a su vez tiene su prolongación de la libertad de pensamiento, sin la cual el desarrollo del hombre en sociedad no podría ser posible.

Como afirma Villanueva (2003), esta evolución ha sido fruto de los hechos y acontecimientos sociales y tendrá su manifestación en el uso de términos empleados, entonces los primeros términos surgen vinculados a la libertad de conciencia, en una lucha por la superación de los dogmas, especialmente en materia religiosa, enmarcada en la resistencia individual, basado en la dignidad personal, oponiéndose al monopolio de la Iglesia y del Estado. Después se elabora el término libertad de expresión, que significa el derecho de comunicar libremente por el medio que se desee todo el conjunto de ideas, pensamientos e inclusive manifestaciones artísticas como la pintura, la literatura y la ciencia. Con el pasar de los años el concepto libertad de información ha venido sustituyendo a los términos anteriores, puesto que la tecnología avanza, las necesidades también van en incremento, es decir actualmente la

libertad de información no consiste solamente en la libertad de expresar o difundir, sino que el Estado tiene que ofrecer mecanismos para que la comunicación sea más amplia, para que alcance a todas las personas.

Para aclarar un poco esta confusión, históricamente, al principio de la formación de la sociedad, la comunicación interpersonal fue la única forma de comunicación humana, el derecho a la libertad de opinión era el único derecho a la comunicación. Después, con la creación de la imprenta se incrementó el derecho de expresión.

Finalmente, a medida que se desarrollaban los grandes medios de comunicación junto a la tecnología, el derecho a recibir, buscar, e impartir información se convirtió en la preocupación vital. Desde este punto de vista, el orden de los derechos específicos referidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una progresión histórica: opinión, expresión, información.

En relación con nuestra Constitución, se puede encontrar todo lo concerniente a la libertad de expresión y la información en los Artículos: 16, 18, 19, 20, 66.6.

2.1.1 DERECHO INDIVIDUALISTA

Al plasmarse las libertades en la Declaración de Derechos Humanos surge el derecho a expresar libremente el pensamiento no importa el medio utilizado para este fin. La libertad de expresión es de vital importancia para el desarrollo, la dignidad y la realización de cada persona, en primer lugar porque las personas se sienten seguras en un Estado en el que puede expresar sus opiniones, además pueden tener conciencia de su entorno al intercambiar ideas e información libremente con los demás, haciéndolos capaces de planificar como mejorar su calidad de vida.

2.1.2 ASPECTO INSTITUCIONAL

La libertad de expresión y la libertad de información contribuyen a la calidad gubernamental, porque la existencia de la opinión pública es una de las principales garantías del sistema democrático, es importante también porque a través de la información libre veraz y plural se establece la posibilidad de una opinión pública y se garantiza la democracia. La libertad de expresión es uno de los pilares básicos del sistema democrático, pero puesto que existe un aspecto institucional de la libertad de expresión, hay una posición preferente que tiene que tener tres requisitos: veracidad, interés público, que sea respetuosa.

A continuación la importancia de la libertad de expresión a nivel institucional:

Aseguran que las políticas y leyes nuevas sean cuidadosamente consideradas, gracias al debate público, además al tener mayor apoyo de la ciudadanía es más probable que sea respetada la ley.

Promueven la implementación de otros derechos humanos porque facilita que los periodistas y personas que informan señalen problemas y abusos de derechos humanos y persuadan al gobierno de tomar medidas.

Ayudan a cerciorar que el Estado sea administrado por gente honesta y competente. A través de la transmisión de debates entre los aspirantes al poder, los votantes pueden formar opiniones, además con el escrutinio de los medios sobre el gobierno y la oposición ayuda a combatir la corrupción y otras irregularidades e impide una cultura de deshonestidad.

Promueven el buen gobierno al aprobar que las personas eleven sus preocupaciones a las autoridades.

2.2 CONCEPTO DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Es necesario citar primero al Libertador Simón Bolívar con respecto a la Libertad de Información:

"El que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades y después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los Errores propios". 9 de abril de 1820. (Barletta, 2011)

"El derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable don de la naturaleza. Ni aun la Ley misma podrá jamás prohibirlo". 15 de febrero de 1819 (Ib.)

En nuestra Constitución este Derecho se encuentra consagrado en los Artículos 18.1, 19 y 20.

La libertad de expresión y la libertad de información tienen una relación activa, a tal punto que la libertad de información tiene su base en la libertad de expresión; para Salvador Ochoa (1998) estos dos términos se han confundido, pero su regulación es aquello que marca la diferencia, por ese motivo, a continuación las definiciones de estos términos tan trascendentales para este estudio:

Libertad de expresión:

Es toda exposición realizada por sujetos de derecho, por medio de la cual una o más personas llegan a conocer conceptos ideas, pensamientos, y opiniones del emisor gracias a cualquier medio disponible, conducta que se encuentra sancionada y regulada por el orden jurídico positivo.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN, DE PRENSA O IMPRENTA

Es toda actividad desplegada por los medios de comunicación social que tenga como meta difundir conceptos, pensamientos y opiniones de interés general, esta actividad se encuentra regulada por la Constitución y sus leyes secundarias.

Escobar De la Serna (1998) dice que para la doctrina constitucional española, la libertad de información posee un doble aspecto: la libertad de información pasiva o derecho a recibir aquella y la libertad de información activa, es decir el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El concepto de libertad de información se ha venido desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial, con el fin de ubicarlo en una categoría de importancia, a un nivel en el que este podría constituirse como la base para los demás derechos y libertades.

Así, en base a lo analizado y en concordancia con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se define a la libertad de información como la libertad de buscar, difundir y recibir libremente informaciones e ideas. Con fundamento en esta definición se le puede dar las siguientes características:

Al ser la información una función pública, pasa de ser solamente un derecho público subjetivo y pasa a ser también un deber de los periodistas, en la medida en que, informar sea el medio para satisfacer una necesidad social basada en la veracidad y la objetividad.

La información es también un objeto plural, porque para que las personas tengan una visión completa de los acontecimientos es importante estar al tanto de lo positivo y negativo de cada hecho social, razón por la cual la libertad de información es al mismo tiempo libertad de controversia política, cuya esencia forma parte de toda sociedad que se identifica con la democracia.

La información se transforma en una garantía primordial encontrando protección frente a los intentos estatales por suprimir o restringir indebidamente el alcance de esta libertad fundamental de todos los individuos.

2.3 SUJETOS, OBJETO Y CONTENIDO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

2.3.1 SUJETOS

Para determinar quiénes son los sujetos de la libertad de información, tomaremos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este artículo establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Partiendo de este artículo, se refiere a "todo individuo", es decir, que es universal y corresponde a todos los hombres de la misma manera en donde no cabe hablar de restricciones ni de privilegios, aunque en la práctica sea entendido como una prerrogativa de los profesionales de la comunicación. Son dos los sujetos de la libertad de información, aunque se debe insistir que estos roles sirven para diferenciarlos teóricamente:

Sujeto Activo: es cualquier individuo, pero, para el ejercicio de su deber profesional, para el periodista esta libertad constituye como hemos visto su fundamento vital.

Sujeto Pasivo: está conformado por el público en general, aunque el público no es menos sujeto de la libertad que el informador

"Hasta el sujeto más activo de la información es también pasivo y viceversa". (Desantes, 1977:44)

2.3.2 OBJETO

Fundamentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el objeto en que recae, son las opiniones e informaciones, es decir, todo aquello susceptible de comunicación, a la vez susceptible de comunicación es todo aquello que es posible incorporar a un mensaje.

2.3.3 CONTENIDO

Como se estudio en el contenido del Derecho a la Información en el capítulo I de este estudio, el contenido es básicamente: noticias, propagandas y opinión. Las noticias, consisten en la difusión de un hecho real; las opiniones son resultado de aplicar unos principios a un hecho real; la propaganda, entendida como la transmisión de una idea subjetiva.

Después de haber realizado este análisis de sus sujetos, objeto y contenido cómo se conforma la libertad de información y viendo más de las distintas definiciones que se puedan dar acerca la de libertad de información; lo primordial es establecer su esencia, que la doctrina ha delimitado en tres facultades jurídicas concurrentes en el proceso informativo y que son: facultad de recibir información, la facultad de difundir información y la facultad de investigar información.

2.4 LA FACULTAD DE RECIBIR

Jordi Bonet (1994) indica que la mayoría de la doctrina coincide en que esta facultad se refiere únicamente a las informaciones e ideas transmitidas por los medios de comunicación social. Implica el derecho de toda persona a recibir información libremente de acuerdo con lo que cada uno crea

necesario o conveniente, acompañado de pluralidad porque en el momento en que haya una sola información, o una sola opinión, o ideología, puede decirse que la facultad de recibir informaciones y opiniones no se facilita plenamente; es una facultad jurídica, que atribuye al individuo un ámbito de libre actuación tutelado por el derecho; desde esta perspectiva, para garantizar la facultad jurídica de recibir información basta con la posibilidad de optar entre varios medios de comunicación; que el individuo reciba esa información dependerá de la responsabilidad de los propios medios. Es consecuencia de dos planteamientos previos:

Carácter universal del derecho a la información

Aspecto institucional de la libertad de expresión

Como se ha visto a lo largo de este estudio, la doctrina del Derecho a la Información siempre establecerá la necesidad de garantizar efectivamente su ejercicio, lo que significa la exigibilidad jurídica de la información como bien jurídico, esto significa que no es un complemento a las libertades, sino que es un derecho fundamental garantizado en Tratados Internacionales y en Constituciones de estados democráticos. De esta manera la efectividad de esta facultad implica que se garantice a la persona la posibilidad de acceder a los medios de comunicación que desee, que incluso se le facilite el acceso a los medios y que la información que reciba sea la adecuada a las exigencias del tiempo y de la tecnología. La diferencia en el contenido del derecho a la información respecto de la libertad de información, se apoya, primordialmente, en la exigibilidad jurídica de la información como bien jurídico, y en el hecho de que la tutela de la posición jurídica del receptor y del emisor sea la misma.

En nuestra Constitución Ecuatoriana la Facultad de Recibir se encuentra garantizada en los Artículos: 18.1 y 66.6

2.5 FACULTAD DE DIFUNDIR.

La facultad de difusión institucionaliza el rol de los medios de comunicación, dándoles el carácter de actores sociales de la información, es bastante común confundir la facultad de difundir con la libertad

de expresión, la posibilidad de difusión adquiere una dimensión diferente a la ofrecida por la libertad de información, así difundir es:

Derecho a opinar y hacerse oír.

Derecho a comunicar noticias.

Libertad de crear medios de comunicación.

Esta Facultad se encuentra garantizada en la Constitución Ecuatoriana en el Art. 18

2.6 FACULTAD DE BUSCAR INFORMACIÓN

Esta facultad se entiende como la facultad atribuida a los profesionales de la información, a los medios informativos en general y al público de acceder de forma directa a las fuentes de información y de conseguirla sin límite general. En este concepto prima la idea de que la sociedad necesita que la información sea un aporte para que las personas participen en la vida social y política y se sientan unidos por las decisiones sociales, siendo verdaderos ciudadanos activos.

Entonces, la información ha de ofrecer al individuo la transmisión de ideas socialmente integradoras, y le va a permitir tener conocimiento de las actividades sociales, lo que quedaría subsumida en la facultad de informar, al constituirse una actividad previa e indispensable para la realización de la actividad informativa. La meta de la información no es solamente la transmisión de noticias, también es la participación a través de datos, hechos, opiniones, comentarios y mensajes necesarios para comprender de una manera real las situaciones individuales, colectivas, nacionales e internacionales y para estar en condiciones de tomar las decisiones adecuadas.

En nuestra actual Constitución la Facultad de Buscar o de Investigar se encuentra garantizada en el Art. 18.2

2.7 CASOS EN LOS QUE SE HA INTENTADO CUESTIONAR LOS DERECHOS DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EN EL ECUADOR

En nuestro país en las últimas décadas se han presentado ciertos casos que han generado polémica respecto a los límites de la libertad de información, las opiniones son divididas, por una parte, hay quienes afirman que los medios de comunicación abusan de la libertad de información con el fin de negociar y vender sus ideas en una sociedad altamente consumista; por otro lado, hay quienes afirman que a libertad de información es el mecanismo para garantizar a los ciudadanos un derecho fundamental. Por este motivo se realizará a continuación un análisis de los casos más relevantes en los últimos años:

1. En 1995, el Juez Décimo de lo Penal de Pichincha sentenció al analista Alberto Acosta a dos años de prisión y 160 sucres de multa, por un comentario en uno de los noticieros de ECUAVISA, medio de comunicación televisivo, en el que advertía sobre los peligros de las financieras sin control; un año más tarde, el país vivió el sobresalto de la quiebra de muchas financieras.

Acosta apeló la resolución y el Presidente de la Sexta Sala de la Corte Superior resolvió la apelación exculpando a Acosta. En su providencia, estableció: El acusado se ajustó a la libertad de opinión y expresión consagrada en la Constitución del Estado, haber comentado hechos que impactaron negativamente, para con su análisis, realizar previsiones en beneficio de la sociedad, que tiene el derecho a estar informada, no solo constituye un derecho, sino un deber del periodista. (Apoyo para Acosta, 1995)

Comentario: la libertad de información es necesaria dentro de un país para mantener a los ciudadanos al tanto de los hechos, la realidad puede ser dura, pero al tener conocimiento pleno se puede prevenir y evitar consecuencias negativas.

2. En 1996, el Presidente del club Emelec, Enrique Ponce Luque, puso una demanda penal contra dos periodistas de la Revista Estadio, Joaquín López y Cesar Torres. Los reporteros analizaban las condiciones de las graderías que se desarmaron para ampliar el estadio Capwell, ampliación que no ocurrió porque no se tenía permiso municipal. Afirmaron en una de sus notas que: soldar nuevamente las graderías podría significar una tragedia a futuro, pues los metales tienden a ceder con el tiempo, y más aun, si se considera el peso al que estarán sometidas las estructuras. Por esta nota, Ponce no solo demandó penalmente a los reporteros, sino también civilmente, exigiendo una indemnización de 5.000 millones de sucres. (Los pájaros contra las escopetas, 1996)

Comentario: la libertad de información es a la vez un deber de los periodistas, en el que se debe contar la verdad completa para evitar males mayores, en esta caso el análisis de las condiciones de las graderías pudo significar salvar a los fans del fútbol que asistían a los partidos, no solo usaron un derecho sino que cumplieron con un deber.

3. En 2002, el presidente de la Federación Nacional de Exportadores, Sr. Maldonado concedió una entrevista al diario El Telégrafo, en la que opinó que Noboa no tenía la suficiente preparación intelectual para ser Presidente del Ecuador. Esta fue la causa por la que fue Luis Maldonado Lince paso cinco días en prisión por la denuncia impuesta por el entonces intendente de Pichincha, Víctor Hugo Olmedo, quien inició el proceso; fue apresado el 18 de julio del 2002, después dejó el Centro de Detención Provisional por un hábeas corpus concedido por el vicealcalde de Quito. Al momento de su salida, Maldonado dijo que nunca había insultado al presidente, lo que hizo es cuestionar sus actos y mientras haya más personas que opinen lo mismo que él seguirá siendo cuestionado por la sociedad. (Chiriboga, 2011)

Comentario: dentro de la libertad de información se encuentra el derecho a opinar y hacerse oír, aunque el presidente de la Federación Nacional de Exportadores, estaba siendo entrevistado y no ejerce la función de periodista, como ciudadano tiene los mismos derechos, porque libertad de información es de carácter universal.

4. En 2007, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, demandó al Sr. Francisco Vivanco, presidente nacional del diario LA HORA por la comisión del delito de desacato del artículo 230 del entonces Código Penal, que establecía: "El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con prisión de seis meses a dos años de prisión y multas de dieciséis a setenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica", el ciudadano Mauricio Ordóñez supuestamente ofendió al Presidente Correa, por lo cual estuvo recluido, en la cárcel, durante cinco días. (Querella contra diario La Hora de Quito y su director Francisco Vivanco Riofrío por el editorial "Vandalismo Oficial", 2010)

Esta demanda recibió críticas dentro y fuera del país, así Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, calificó como una medida torpe de parte del Presidente ecuatoriano al accionar penalmente contra un medio de comunicación, utilizando la figura del delito de desacato para demandar al Director de un diario ecuatoriano por un editorial crítico.

Comentario: la libertad de información, garantizada por nuestra Constitución y por los tratados internacionales, establece claramente que esta no consiste solamente en la libertad de expresar o difundir, sino que el Estado tiene que ofrecer mecanismos para que la comunicación sea más amplia, para que alcance a todas las personas, por lo tanto la figura del desacato en ese entonces era claramente opuesta a la garantía de esta libertad fundamental.

5. En 2006, la Corte Superior de Justicia de Latacunga condenó al periodista Nelson Fuentala por haber transcrito declaraciones del comisario de Pujilí, Ricardo Estrella, en contra del alcalde de esa ciudad, Marcelo Arroyo, en las que criticó su salario y su supuesta actitud prepotente. Tras la publicación, el Alcalde inició un juicio, pero el periodista fue absuelto por el Juzgado Segundo de lo Penal, tras lo cual la autoridad apeló ante la Corte Superior de Latacunga, que finalmente lo sentenció. Fuentala presentó un recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo. (Condenan a periodista de La Gaceta a 60 días de prisión, 2007)

Comentario: No puede haber libertad de prensa si no existe libertad de expresión del pensamiento, es decir libertad de información, por este motivo es necesario aplicar en todo momento los principios legales que fundamentan esta libertad a fin de garantizarla.

2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En un Estado de Derecho el derecho a la información es un pilar fundamental; por eso no puede existir vigencia del Estado de derecho sin derecho al acceso y difusión de la información, porque entre sus garantías principales se encuentra la libertad de pensamiento. Por tanto, sin derecho a la información no podría practicarse la vigilancia ciudadana de la gestión pública.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 presenta el derecho de libertad de expresión con el concepto de libertad de expresión que 150 años después fue ampliado por la Declaración de las Naciones Unidas con el concepto de libertad de información, tratándose de un derecho fundamental que toca a cada persona que vive dentro de un estado, ya sea que ejerza o no el periodismo, todos los ciudadanos dentro de un Estado de Derecho tienen garantizado poder expresar sus pensamientos de manera libre y a la vez acceder a la información difundida por los medios.

La consagración jurídica del derecho a la información en Ecuador está basada no sólo en el texto constitucional, sino además en diversos instrumentos internacionales, tanto universales como regionales, normas de fuente internacional que integra el ordenamiento jurídico interno.

2.8.1 ÁMBITO UNIVERSAL

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 19, reconoce el derecho a todo individuo de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Es importante destacar que al ser una Declaración Universal establece una titularidad universal de los derechos que compone, es por este motivo que sí reconoce el derecho a la información, entonces debe ser respetado por todos los Estados y también se deben establecer mecanismos que fomenten su correcta aplicación.

- El Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos en el Artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la “Carta Internacional de Derechos Humanos”, aquí se reafirma una vez más la importancia de la libertad de información en todo el mundo, porque solo con este derecho se puede alcanzar una sociedad democrática.

- La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 13 numeral 1, consagra: “el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”.

La Libertad de expresión es un derecho de titularidad universal, es por eso que la Convención de los Derechos del Niño consagra este Derecho, la Convención reconoce a los niños y niñas como sujetos de este derecho, pero convierte a las personas adultas en sujetos de responsabilidad respecto al cumplimiento del mismo.

2.8.2 ÁMBITO INTERAMERICANO

- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Artículo 4 consagra el derecho de toda persona a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, constituye uno de los Instrumentos jurídicos de mayor importancia a nivel de América, y confirma el derecho a la información que posee todo ciudadano.

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969, en el Artículo 13 señala:

"Libertad de pensamiento y de expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás.

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre entró en vigor el 18 de julio de 1978, a la fecha, las siguientes veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la

Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, es por eso que nuestro país está obligado a acatar las disposiciones concernientes a este Instrumento Jurídico, y si existiera violación a la de libertad de expresión, se puede incluso acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En relación a los tratados y convenciones, cuando un Estado firma o se adhiere a uno de estos, toma un compromiso jurídico y de cierta forma cede una parte de su soberanía con la finalidad de atender a un interés superior, que en este caso específico es la tutela y vigencia de los derechos humanos. Es así que después de adherirse o ratificar un tratado o convenio, luego no puede simplemente hacer caso omiso del compromiso que ha tomado por motivo de defender su soberanía, pues como Estado Soberano firmó con conciencia de las consecuencias, tampoco puede dictar una ley que contravenga las disposiciones contenidas en estos instrumentos internacionales.

Existe entonces un orden público internacional que determina que existen principios absolutos que no pueden ser ignorados o dejados a un lado, estos principios son los derechos humanos y los tribunales dentro de un Estado son los garantes en primer término de la plena vigencia de los derechos humanos; en la actualidad el conjunto de normas que tienen origen internacional, gozan de plena vigencia y por lo tanto son directamente aplicables en nuestro país; nuestro derecho nacional constituye un todo jerárquico, donde la norma jurídica superior es la Constitución, seguida de los tratados y convenios internacionales, así:

- La Declaración de Chapultepec también merece ser nombrada a nivel Interamericano; nació de la Conferencia Hemisférica que la Sociedad Interamericana de Prensa organizó en Marzo de 1994 en México en el Castillo de Chapultepec, que reunió a periodistas, abogados, líderes políticos y personas especializadas en el tema de libertad de expresión, después de una extensa reunión se reunieron diez principios que abarcan todo lo relativo a este tema, en 1998 se reunieron a ratificar los principios y agregaron 10 contribuciones a la Declaración, muchos países del hemisferio Occidental firmaron y suscribieron esta declaración, Ecuador no lo firma aún y el presidente Correa en declaraciones oficiales

dijo que suscribiría la Declaración de Chapultepec si los medios de comunicación respetan los derechos laborales de sus trabajadores y cumplen con sus obligaciones patronales, así que este tema aún no se define por completo.

2.8.3 ÁMBITO CONSTITUCIONAL

En las diferentes Constituciones que se han elaborado en nuestro país se ha tratado de consagrar la libertad de expresión y de información, así:

Constitución Quiteña de 1812

Pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el Estado de Quito dictado por el Congreso Constituyente el 15 de febrero de 1812.

“Art. 20.- El Gobierno del Estado se obliga a todos los habitantes de él, y les asegura que serán inviolables sus derechos, su religión, y civil: y en su consecuencia declara que todo vecino y habitante en él de cualquier estado, condición, y calidad que sea, puede libre y francamente exponer sus sentimientos, y sus dictámenes por escrito, o de palabra, no siendo en materia de religión, o contra las buenas costumbres, y levantar sus quejas y representaciones al Gobierno guardando sólo la moderación que es necesaria, para la conservación del buen orden.”

Aunque dentro del conocimiento general se cree que la primera Constitución fue la de 1830 creada a partir de la separación de Ecuador de la Gran Colombia, originalmente la primera Constitución fue creada en 1812 paradójicamente, es un documento poco difundido. Fue el resultado de varios hechos sociales, entre ellos la invasión de Napoleón a España, cuya consecuencia fue una oportunidad disfrazada para las colonias americanas españolas para alcanzar la libertad, así bajo la proclama: “Qué viva el rey, abajo los chapetones” se comenzaron a crear Juntas de Gobierno integradas por criollos para autogobernarse, en Quito Carlos Montufar creó la Junta de Gobierno que daría origen a esta Constitución el 15 de febrero de 1812. Si analizamos lo relativo a la libertad de expresión, el artículo

20 comienza estableciendo su responsabilidad con el pueblo: “El Gobierno del Estado se obliga a todos los habitantes de él”, circunstancia que nos induce a admitir que esta Constitución es bastante moderna para la época, y se guía de los lineamientos de pensamiento franceses en los que el Gobierno está hecho por el pueblo y para el pueblo; la inviolabilidad de los derechos de las personas es otro punto fundamental porque es principio base para la formación de los derechos humanos: “y les asegura que serán inviolables sus derechos, su religión, y civil”; a continuación se encuentra la declaratoria por la que se reconoce el derecho de la libertad de expresión: “declara que todo vecino y habitante en él de cualquier estado, condición, y calidad que sea, puede libre y francamente exponer sus sentimientos, y sus dictámenes por escrito, o de palabra” con el análisis de este artículo también nos podemos percatar la influencia que tenía la religión sobre el vivir de la Sociedad Quiteña: “no siendo en materia de religión, o contra las buenas costumbres”; pudiendo también tener la libertad de acudir ante el gobierno para quejarse: “y levantar sus quejas y representaciones al Gobierno guardando sólo la moderación que es necesaria, para la conservación del buen orden.”

Constitución de 1830

Dictada por el Congreso Constituyente en Riobamba en de septiembre de 1830

“Art. 64: Todo ciudadano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley.”

Al separarse Ecuador de la Gran Colombia, en 1830, se reúne en Riobamba debido a la creación del estado el Congreso Constituyente, La Asamblea nombra a Juan José Flores, Presidente y a José Joaquín de Olmedo, Vicepresidente. En esta Constitución se introduce el término “Ciudadano”: “Todo ciudadano”, que es el término que se da a toda persona nacida en un determinado territorio y por lo tanto es titular de los derechos y deberes propios de la ciudadanía, lastimosamente esta Constitución es excluyente, que si bien es cierto todos los nacidos en el territorio Ecuatoriano eran Ecuatorianos, solamente cierto grupo de personas accedían a la calidad de ciudadanos. Así:

“Artículo 9.- Son Ecuatorianos:

Los nacidos en el territorio y sus hijos;

Los naturales de los otros Estados de Colombia, avecindados en el Ecuador;

Los militares que estaban en servicio del Ecuador al tiempo de declararse en Estado independiente;
Los extranjeros, que eran ciudadanos en la misma época;
Los extranjeros, que por sus servicios al país obtengan carta de naturaleza;
Los naturales, que habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que determine la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio.”

“Art. 12: Son ciudadanos activos del Ecuador, los que reúnan las cualidades siguientes:

1. Ser casado o mayor de diez y ocho años;
2. Tener una propiedad raíz, valor libre de doscientos pesos, o ejercer una posesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente, doméstico o jornalero;
3. Saber leer y escribir.”

Por tanto durante este período solo las personas que obtenían la cualidad de ciudadano, podían expresar su pensamiento libremente, lo que resulta en un retroceso en materia de derechos humanos y de seguridad jurídica.

Constitución de 1835

Creada por la Convención reunida en Ambato el 30 de Julio de 1835.

“Art. 103: Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley.”

Al expresar todo ecuatoriano, esta Constitución indica que la libertad de expresión es absolutamente para todos aquellos que ocupen la calidad de ecuatorianos, así en el Artículo 4 de esta Carta Magna encontramos lo siguiente:

“Art. 4: Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.”

Es un aspecto positivo que en el Artículo 103 diga “Ecuatorianos” y no “Ciudadanos”, a diferencia de la anterior Constitución en la que este derecho era exclusivo para los ciudadanos:

“Art. 9: Son ciudadanos activos del Ecuador, los que reúnan las cualidades siguientes:

1. Ser casado o mayor de diez y ocho años;
2. Tener una propiedad raíz, valor libre de doscientos pesos, o ejercer una posesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente, doméstico o jornalero;
3. Saber leer y escribir.”

Constitución de 1843

Dictada por la Convención Nacional en Quito.

“Art. 87: Todo individuo residente en el Ecuador, tiene el derecho de escribir, imprimir y publicar sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de previa censura sujetándose a las restricciones y penas que establecen la ley para impedir y castigar su abuso.”

Esta Constitución es conocida como la Carta de la Esclavitud debido a que procuraba mantener al presidente Flores en el poder de manera ilimitada y aunque durante el período que se emitió las libertades eran bastante limitadas por el gobierno de Flores, en teoría este Artículo es incluyente, no solo para los ecuatorianos o para los ciudadanos, sino que para toda personas que se encontrare en el territorio ecuatoriano; por otro lado establece que no se aplicará censura previa, pero a continuación dice que se deben sujetar a las restricciones y penas que la ley establece, lo que nos indica ambigüedad y una falta de estabilidad jurídica.

Constitución de 1845

Dictada por la Convención Nacional en Cuenca en 1845.

“Art. 123: Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, y sujetándose a la responsabilidad de las leyes.”

Este artículo representa ciertamente un retroceso en el ámbito de la libertad de expresión, porque nuevamente se incluye “todo ecuatoriano”, lo correcto sería decir: “toda persona”; además se establece un único medio de libertad de expresión, la prensa; además al decir: “respetando la decencia y moral pública” se establece una forma subjetiva de control, porque es difícil determinar cuáles son los límites de la moral y la decencia.

Constitución de 1851

Dictada por la Convención Nacional reunida en Quito en 1851

“Art. 110: Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la imprenta, respetando la religión del Estado, la decencia y moral pública, y sujetándose a la responsabilidad que determina la ley.”

En esta Constitución existe un grave retroceso respecto a la libertad de expresión porque dice “todo ecuatoriano”, cuando debería decir “Toda persona”, es decir es exclusivo para extranjeros que no se hubieran naturalizado, así:

“Artículo 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Artículo 5.- Son ecuatorianos por nacimiento:

1. Los nacidos en el territorio del Ecuador.
2. Los nacidos fuera del territorio del Ecuador, de padre o madre ecuatorianos por nacimiento.
3. Los naturales que, habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que designe la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio.

Artículo 6.- Son ecuatorianos por naturalización:

1. Los naturales de otras naciones que se hallen actualmente en el goce de este derecho.
2. Los extranjeros que, adquiriendo legítimamente bienes raíces en la República, o poseyendo alguna ciencia, arte o industria útil, o teniendo un capital en giro, obtengan carta de naturaleza conforme a la ley.

3. Los extranjeros que, habiendo obtenido carta de naturaleza del Gobierno del Ecuador, y domiciliándose en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que determine la ley, el deseo de recuperar su antiguo domicilio.
4. Los extranjeros que, sin haber residido en el país, hubiesen prestado, o prestaren importantes servicios a la República, y obtengan de la Asamblea Nacional la correspondiente carta de naturaleza.
5. Las mujeres extranjeras casadas, o que se casaren con ecuatoriano.
6. Los hijos de padre ecuatoriano, por naturalización, que hubiese estado ausente en servicio de la República.”

Además se reconoce un único medio por el cual se puede expresar libremente el pensar; y se establece a la religión, la decencia y moral pública como límites, lo que significa que es una forma subjetiva de limitar este derecho. En 1852 se dicta una nueva Constitución, en la que se mantienen los mismos parámetros ya analizados; así mismo en 1861 se dicta una nueva Constitución en la que en lo referente a la libertad de expresión se dice exactamente lo mismo, el único cambio es que en vez de decir: “sujetándose a la responsabilidad de las leyes”, dice: “sujetándose a la responsabilidad que impongan las leyes”, tal vez se añadió esa palabra con el fin de establecer la “Dura lex sed lex” que significa la ley es dura, pero es la ley.

Constitución de 1869

Emitida por la Convención Nacional en Quito en 1869, conocida como la Carta Negra, llamada así porque el Presidente de la República duraría en sus funciones por un período de seis años, reelegible indefinidamente luego de una alternatividad entre el segundo y tercer período; disponía además que los senadores actuarían durante nueve años y los diputados durante seis.

“Art. 102: Es libre la expresión del pensamiento, sin previa censura, por medio de la palabra o por escrito, sean o no impresos, con tal que se respete la religión, la moral y la decencia; al que abusare de este derecho será castigado según las leyes y por los jueces comunes, quedando abolido el jurado de imprenta.”

En esta Constitución se enmiendan los claros errores de las anteriores Constituciones respecto a la libertad de expresión, así se establece que no deberá existir censura previa, sin importar el medio, porque como ya hemos visto a lo largo de este trabajo investigativo, en estos años los principales medios de comunicación se constituían a través de la oralidad y la imprenta; se siguen conservando ciertas limitaciones: “con tal que se respete la religión, la moral y la decencia” nuevamente hay que preguntarse cuáles son estos límites y quién los define; “quedando abolido el jurado de imprenta” , pues

bien el jurado de imprenta es una institución que nace en las Cortes Españolas, creado exclusivamente para los delitos de imprenta, es decir aquellas causas penales en las que existía un abuso de la libertad de imprenta, es un avance jurídico que se hayan eliminado estos jurados.

Constitución de 1878

Dictada por la Asamblea Nacional en Ambato.

“Art. 17: La Nación garantiza a los ecuatorianos

8.- El derecho de expresar libremente sus pensamientos de la palabra o por la prensa sujetándose a la responsabilidad que imponen las leyes. Jamás podrá establecerse la censura o calificación previa de los escritos.”

Este representa un gran avance en materia de libertad de expresión, porque se retiraron los límites de la decencia, la religión y la moral.

Constitución de 1884

Dictada por la Convención Nacional en Quito

“Art. 28: Todos pueden expresar libremente sus pensamientos de palabra o por la prensa, respetando la religión, la decencia, la moral y la honra y sujetándose, en caso de infracción, a la responsabilidad legal. Quedan sujetos a igual responsabilidad los que de palabra o por la prensa inciten a la rebelión o perturbación del orden constitucional.”

Nuevamente se establecen límites a la libertad de expresión, además se instituye la autocensura en cuanto a la formación de movimientos sociales y protestas.

Constitución de 1897

Emitida por la Asamblea Nacional en Quito.

“Art. 32: Todos pueden expresar libremente su pensamiento de palabra o por la prensa, sujetándose a la responsabilidad establecida por las leyes. Un jurado especial conocerá en las causas por infracciones cometidas por medio de la imprenta.”

Si bien es cierto en esta Constitución se procura mantener la libertad de expresión sin limitaciones religiosas o morales, se instaura una institución abolida en la Constitución de 1869 que es los Jurados de Imprenta.

Constitución de 1929

Dictada en la Convención Nacional en Quito

“Art. 151: La Constitución garantiza a los habitantes del Ecuador, principalmente, los siguientes derechos:

12. La libertad de opinión, de palabra, por escrito, por la prensa, por medio de dibujo o de cualquiera otra manera. La injuria y la calumnia, en cualquier forma, y toda manifestación de carácter notoriamente inmoral, estarán sujetas a responsabilidad legal.”

En este Artículo los encargados de elaborarla tuvieron especial cuidado en incluir todo medio de expresión; los límites son aquello considerado inmoral.

Constitución de 1945

Promulgada por la Asamblea Constituyente en Quito.

“Art. 141: El Estado garantiza:

10. La libertad de opinión, cualesquiera que fueren los medios de expresarla y difundirla.

La injuria, la calumnia y toda manifestación inmoral, están sujetas a las responsabilidades de ley.

La ley regulará el ejercicio del periodismo, tomando en cuenta que éste tiene por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y constituye un servicio social acreedor al respeto y apoyo del Estado. Establecerá también los medios de hacer efectivas las responsabilidades en que incurrieren los periodistas.

Ninguna autoridad podrá suspender o clausurar periódicos ni, por delitos de prensa, secuestrar imprentas o incautar publicaciones. Tampoco se perseguirá o encarcelará, bajo pretexto de tales delitos, a los redactores, colaboradores, expendedores, voceadores y demás trabajadores de la prensa, a menos que se demuestre la responsabilidad de ellos en forma legal.

Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho, en la forma que la ley determine, a la rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas hechas por la prensa, por la radio o por cualquier otro medio de publicidad. Esta rectificación deberá hacerse en el mismo órgano en que se hicieron las imputaciones.”

Recoge cabalmente todo lo concerniente con el derecho a la información del pueblo, además incluye el Derecho a la Rectificación

Constitución de 1946

Promulgada en Quito por la Asamblea Nacional Constituyente

“Art. 187: El Estado garantiza a los habitantes del Ecuador:

11.- La libertad de expresar el pensamiento, de palabra, por la prensa o por otros medios de manifestarlo y difundirlo, en cuanto estas manifestaciones no impliquen injuria, calumnia, insulto personal, sentido de inmoralidad o contrario a los intereses nacionales, actos que estarán sujetos a las responsabilidades y los trámites que establezca la ley.

La Ley regulará el ejercicio de esta libertad, tomando en cuenta que el periodismo tiene por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y constituye un servicio social, acreedor al respeto y apoyo del Estado.

La ley regulará el ejercicio de esa libertad, tomando en cuenta que el periodismo tiene por objeto primordial, la defensa de los intereses nacionales y constituye un servicio social, siempre que se respeten la ley, la moral y la honra de las personas.

Este derecho se ejercerá tomando en cuenta que los medios de comunicación colectiva tienen por fin esencial la defensa de los intereses nacionales y la difusión de la cultura, y que deben constituir un servicio social, acreedores al respeto del Estado. Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, secuestrar o incautar publicaciones, imprentas u otros medios de comunicación colectiva. Tampoco se perseguirá o encarcelará, a pretexto de delitos cometidos por dichos medios, a sus directores, redactores y a sus demás trabajadores auxiliares, salvo resolución judicial.”

En esta Constitución se defiende la libertad de expresión, al mismo tiempo se reconoce la responsabilidad pública de los medios de comunicación de difundir información, es una Constitución que refleja claramente como nuestro país fue tomando un curso positivo en cuanto a seguridad jurídica.

Constitución de 1967

Dictada por la Asamblea Constituyente en Quito.

“**Art. 28:** Sin perjuicio de otros derechos que se deriven de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza:

5.- La libertad de opinión y la de expresión del pensamiento por cualquiera de los medios de comunicación colectiva, siempre que se respeten la ley, la moral y la honra de las personas. Este derecho se ejercerá tomando en cuenta que los medios de comunicación colectiva tienen por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y la difusión de la cultura, y que deben constituir un servicio social acreedor al respeto del Estado.

Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, secuestrar o incautar publicaciones, imprentas u otros medios de comunicación colectiva. Tampoco se perseguirá o encarcelará, a pretexto de delitos cometidos por dichos medios, a sus directores, redactores y demás trabajadores y auxiliares, salvo resolución judicial.

En cuanto a las publicaciones anónimas, se estará a las disposiciones.

Toda persona natural o jurídica tiene derecho, con arreglo a la ley, a la rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas hechas por los medios de comunicación colectiva.”

En esta Constitución se introduce el Derecho a la Rectificación, que consiste en que las personas físicas como jurídicas que se consideren perjudicadas en su fama, su buen nombre o intereses por informaciones falsas o desfiguradas para exigir la aclaración de esa información.

Constitución de 1998

Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en Riobamba el 5 de Junio de 1998

“Art 23: Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y Garantizará a las personas los siguientes:

9.- El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica.

10.- El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión.

Art. 81: El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes: a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de medios de comunicación.

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos.

La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación.

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.”

En esta Constitución se establece la prohibición de censura previa, el derecho de rectificación, la actividad del comunicador como servicio social y la clausula de secreto profesional; además como innovación no solo se establece la libertad de expresión, además ya se introduce el derecho a la información, que como se vio en el inicio de este capítulo es el desarrollo que se ha dado en todo el mundo respecto a este derecho fundamental.

Constitución del 2008

Es la actual Constitución que rige en nuestro país desde el 20 de Octubre del 2008

“**Art. 425.-** El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”

TÍTULO II DERECHOS

Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir

Sección Tercera

Comunicación e Información

“**Art. 16.- Derecho a la comunicación.-** Todas las personas, en forma individual colectiva, tienen derecho a:

- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

- La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.

- El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

- Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.”

“Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.”

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.”

“Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.”

“Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.”

TÍTULO II DERECHOS

Capítulo tercero

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

Sección Segunda

Jóvenes

“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.”

TÍTULO II

DERECHOS

Capítulo sexto

Derechos de libertad

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.”

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo primero

Inclusión y equidad

Sección séptima

Comunicación social

“Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.”

En esta Constitución el derecho a la comunicación está garantizado a todo nivel; para todas las personas, sin importar su edad, género o sexo; se prohíbe la censura previa, garantizándose la libertad de expresión y el derecho a información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural; se establece un sistema de Comunicación, aspecto que demuestra el deber que tiene el Estado para crear políticas que se encaminen a la correcta aplicación de este derecho humano universal.

2.8.4 LEYES Y ESTATUTOS A NIVEL NACIONAL

Ley de Ejercicio Profesional del Periodista

Ley promulgada en el Registro Oficial No. 900, de 30 de Septiembre de 1975, establece las sanciones a los periodistas, protege a la fuente de información y proclama que: Los ecuatorianos tienen derecho a expresar su pensamiento sin otras restricciones que las que impone la ley, moral y seguridad nacional.

Estatuto de la Federación Nacional del Periodista (FENAPE)

En su Capítulo 1, Artículo N° 3, literal A, establece como una de sus finalidades: Velar por el respeto a la libertad de expresión y el derecho del pueblo a una información objetiva, veraz y oportuna.

Código de Ética del Periodista Profesional

En su Declaración Fundamental, consigna: La libertad de expresión se plasma esencialmente en las libertades de información y opinión a través de los medios de comunicación social. Este derecho es, en consecuencia, inalienable, por lo que le corresponde al periodista profesional su plena aplicación práctica, para contribuir a la correcta interpretación y orientación de los problemas en el complejo mundo en que vivimos, para ofrecer distracción constructiva y útil.

El periodista profesional debe cumplir en este contexto con su rol esencial. Está obligado a ser leal y consecuente con los principios y aspiraciones de su pueblo, de su comunidad y de su familia. No es ni puede ser neutral, porque en la sociedad es imposible esa neutralidad, como no sea para favorecer directa o indirectamente intereses populares.

Capítulo 1, Art. 2 y 7. El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores fundamentales de su comunidad, y el periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente de los marginados de la comunidad social.

Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho, en la forma que la ley determine, a la rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas hechas por la prensa, por la radio o por cualquier otro medio de publicidad. Esta rectificación deberá hacerse en el mismo órgano en que se hicieran las imputaciones.

Ley de Radiodifusión y Televisión

Expedida el 2 de abril de 1975, dice:

“Art. 58: limitaciones a la libertad de información, tales como: transmitir remitidos injuriosos o contrarios a la moral y buenas costumbres: originar, provocar, producir o incitar todo acto de violencia o contra la seguridad del Estado, en este último caso, regirán, además, las sanciones contempladas en la Ley de Seguridad Nacional. Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes.”

2.8.5 REFERENCIAS DEL DERECHO COMPARADO

La libertad de información, así como la libertad de expresión están reconocidas y vigiladas en la mayoría de las Constituciones de los países democráticos

2.7.4.1 Estados Unidos

En la Primera Enmienda de la Constitución la que garantiza esta libertad al establecer que:

“El Congreso no hará leyes referentes a la religión o prohibiendo el libre ejercicio de la misma o restringiendo la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y hacer peticiones al gobierno en demanda de justicia.”

2.7.4.2 Francia

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, la que hace lo propio en él:

“**Artículo 11:** La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre; todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir e imprimir libremente, sin perjuicio de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.”

2.7.4.3 España

En el artículo 20 de su Constitución:

“Se reconocen y protegen los derechos:

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción;

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica;

A la libertad de cátedra;

A comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España.

Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título ("De los derechos y deberes fundamentales"), en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

2.7.4.4 México

En el Artículo 7 de su Constitución se establece que la libertad de prensa o de información está garantizada:

“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que con pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros",

operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.”

2.7.4.5 Cuba

Lastimosamente en este país la libertad está restringida constitucionalmente, en el artículo 53, el cual establece que:

“Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La ley regula el ejercicio de estas libertades.”

2.7.4.6 Argentina

La Corte Suprema de Argentina, en 1996 dio un histórico fallo a favor de la libertad de prensa, determinando que los periodistas no pueden ser demandados por difundir informaciones erróneas de buena fe. La Corte acogió expresamente una doctrina de origen estadounidense, entonces las personas que se sientan perjudicadas tienen la carga de probar que el periodista actuó de mala fe. También comprende a aquellos que al momento de emitirse se creían ciertas, aunque después resulten ser inexactas; la tutela constitucional de la libertad de expresión no puede restringirse a las afirmaciones que, con posterioridad a los hechos, son verdaderas, dijo la Corte.

2.7.4.7 Panamá

La libertad de información está garantizada en su Constitución:

“Artículo 37.- Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.”

2.7.4.8 Costa Rica

La Constitución de Costa Rica dicta en su Artículo 29:

“Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos, sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.”

2.7.4.9 Chile

La Constitución chilena en el Artículo 19 señala que se asegura a todas las personas:

“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder a los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas, periódicos, en las condiciones que señale la ley.

El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de estos medios de comunicación. Una ley de quórum calificado señala la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas.”

En el numeral cuatro, en lo que se refiere al respeto y protección a la vida privada y pública como a la honra de las personas y de sus familias, señala:

“La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el Tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. Además, los propietarios, editores, directores o administradores serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan.”

2.7.4.10 Colombia

En la Constitución de Colombia en el Artículo 42 se señala:

“La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.”

2.7.4.11 Guatemala

La Constitución de Guatemala, expresa en su Artículo 65:

“Es libre la emisión del pensamiento sin previa censura. Anteriormente existía la Ley de Emisión de Pensamiento, creada por Decreto N° 9 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1964. Según dicha ley, es responsable quien abuse de este derecho faltando el respeto a la vida privada o moral.

Además, no constituyen delito de calumnia o de injuria las denuncias, críticas o censuras contra funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales ejecutados durante su función pública.

Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de su defensa y rectificación. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la firma que determina la referida ley,

declare que la publicación que los afectó se basa en hechos inexactos o que los cargos que se le hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo órgano de prensa donde apareció la publicación de la ofensa. No podrán formar parte de dicho tribunal funcionarios o empleados públicos.

Los talleres tipográficos, las estaciones radiodifusoras de televisión y cualquier otro medio de difusión, no podrán ser por razón de delito o falta en la emisión del pensamiento, decomisados, confiscados, embargados, ni clausurados o interrumpidos en sus labores.

Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo y una ley de carácter constitucional determinará todo lo relativo a este derecho.”

2.7.4.12 Perú

La Constitución vigente en el Perú, al referirse a los derechos fundamentales de la persona, en el Art. 2, numeral cuatro, señala que toda persona tiene derecho:

“A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de opinar e informar comprenden los de fundar medios de comunicación.

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en forma gratuita, en forma inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.”

CAPÍTULO III

LA CENSURA

3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL

El término censura proviene del latín censura, se utiliza para nombrar al juicio y dictamen que se hace sobre una obra, es decir censura es la corrección o reprobación de algo. La censura previa, según el DRAE, es el examen y aprobación que de ciertas obras hace un censor autorizado antes de hacerse públicas, la censura criminaliza la comunicación de determinadas acciones, porque supone la prohibición de producir, imprimir y difundir cierta información, determinado arte o incluso la simple expresión coloquial de algunos temas.

Generalmente el concepto de censura se aplica a la intervención de algún tipo de mecanismo para controlar la difusión de cierto contenido por motivos ideológicos, políticos, morales o religiosos, de esta manera se prohíbe la expresión de contenidos porque alguien los considera dañinos para la sociedad, por ejemplo en el sentido político la censura se aplica para que no se difunda información o mensajes contrarios a sus intereses; en las sociedades democráticas se prohíbe de forma oficial y los gobernantes no tienen la potestad de impedir la publicación de información, sin embargo existen mecanismos que pueden afectar de manera negativa la libre difusión de información, los avances contra la libertad de prensa son perceptibles en administraciones municipales y comunales, así se utilizan medios de presión más sutiles, como eliminar programas críticos con el gobierno o a través de presiones políticas y económicas a los órganos de dirección de las privadas.

La censura puede operar de distintas maneras, se puede presentar de manera directa a través de la ley como en Cuba, país donde la libertad de información está restringida constitucionalmente; propagarse a través de mecanismos como sucedió durante los años 60 en Estados Unidos se aplicó la intimidación

para censurar a personas con supuesta ideología comunista incluso decenas de actores fueron juzgados por el “crimen” de tener una ideología distinta al gobierno; o la censura popular en la que las personas tienen franco temor de expresar sus ideas por las consecuencias que esto represente como perder un nivel de vida, una posición social o un trabajo estable.

3.2 BREVE HISTORIA DE LA CENSURA EN EL MUNDO OCCIDENTAL

3.2.1 ANTIGUO EGIPTO

En el antiguo Egipto, al morir un faraón e iniciar un nuevo mandato, la persona que lo sucedía ordenaba borrar de la historia a su antecesor, eliminaba los bajorrelieves a punta de cincel y martillo, se prohibían las palabras que hacían referencia a esos objetos, personas y sucesos, se cerraban templos, se cambiaba de dioses e incluso se cambiaba la capital del poder, gran parte de la línea de faraones se ha perdido debido a que los templos y los bajo relieves fueron borrados, todo esto debido a que, todo aspecto distinto a su ideología resultaba una amenaza para el nuevo mandante. (Gil, 2007)

3.2.2 GRECIA ANTIGUA

En la Grecia antigua las primeras manifestaciones de censura que se conocen se producen contra los poemas de Homero, así mismo en Esparta las representaciones teatrales se prohíben, la enseñanza de la filosofía y de la retórica se suprime terminantemente. Los libros son desterrados del país al igual que los maestros extranjeros, y el odio a la palabra escrita se lleva al extremo de no escribir las leyes. (Ib.)

3.2.3 ROMA

La censura se aplicó a través de la persecución de la magia, la superstición y la adivinación, la lex Cornelia de iniuriis; con el Imperio se inaugura una faceta de la censura que ha perdurado hasta la

actualidad, la censura religiosa y la censura social, así aquellos que pensaban distinto eran ridiculizados, después eran llevados al escarnio y finalmente al martirio, para que nadie los imitara o pensara en hacerlo, también se añade una tercera forma de censura, la política, contra toda crítica oral o escrita a los agentes de la autoridad. En Roma surge el concepto del Panem et Circus que significa Pan y Circo, una forma de distraer la atención de las masas de los acontecimientos sociales. (Ib.)

3.2.4 EDAD MEDIA

Durante la Edad Media en el mundo occidental, la llave de la censura era la ignorancia generalizada. La cultura se organizaba por jerarquías, así surgen los gremios, de esta manera el hijo del zapatero debía ser zapatero, así como sus hijos y nietos y solo aquellos que dominaban el lenguaje culto, es decir el conocimiento dominaban las reglas de la sociedad, la mayor parte del tiempo para defender sus propios intereses.

Al final de la Edad Media, la gente era más culta así que nacen nuevos mecanismos de censura a través de la inquisición, la censura de esta época tenía como factores centrales al terror a la muerte y a la intimidación ante la posibilidad de ser despojados de sus bienes, expulsados de su comunidad; pero aquellos que aplicaban la censura de hecho, tenían la certeza de que hacían lo correcto. (Ib.)

3.2.5 NUEVO MUNDO

Con el descubrimiento de América, empiezan las migraciones hacia el Nuevo Mundo; aquellos que se cansaban de la censura y la opresión preferían abandonar su lugar de origen y probar suerte en otra sociedad, pero la verdad es que a pesar de las distancias, la monarquía seguía ejerciendo su control sobre sus colonias, por eso la promesa de libertades de pensamiento fue algo que duró poco, es en esta época donde las sociedades secretas se multiplican por miles y aumentan su influencia y diversidad y comienza una nueva lucha por la libertad de expresión. (Ib.)

3.3 BREVES RELATOS DE LA CENSURA EN HISPANOAMÉRICA, VISTOS A TRAVÉS DE LA IMPRENTA

3.3.1 CONQUISTA

Gutenberg fue el precursor de la imprenta en 1456, diez años después varias ciudades de Europa ya contaban con esta tecnología, es así que en el año de 1475 se registra la primera impresión que consistía en una colección de Canciones a la Virgen María, este hecho se da dos años antes de que la Reina Isabel la Católica autorizara de manera oficial el ingreso de imprentas al país. La difusión de textos impresos obligó a la creación de una ley de control en 1502, que manifestaba que los textos previos a su emisión debían tener la aprobación tanto de autoridades civiles como eclesiásticas.

En La Historia de la Prensa Hispanoamericana (Álvarez, 1992) se establece que al conquistar el Nuevo Mundo, los españoles tuvieron siempre clara la importancia de mantener control sobre los medios de expresión, al mismo tiempo que se valieron de la imprenta con dos propósitos: político y cultural. Los archivos históricos le dan el reconocimiento de haber introducido la imprenta en América al Obispo de Nueva España Juan de Zumárraga y al virrey Antonio de Espinoza.

3.3.2 ÉPOCA COLONIAL

Durante ésta etapa el “periodismo fue un fenómeno urbano y selectivo” (Álvarez, 1992:31) porque no todo el mundo podía tener acceso a éste medio, entre los grupos privilegiados se encontraban los comerciantes, ganaderos mineros y autoridades eclesiásticas o civiles.

Entre las primeras impresiones aparecen las hojas volantes, más conocidas con el nombre de Relaciones, que eran emitidas solamente en ocasiones especiales, en las cuales no se daba un trabajo periodístico como tal, sino que se mostraban acontecimientos relevantes de manera exagerada

Después se dieron a conocer las noticias de carácter internacional que recibían el nombre de Noticiarios que tenían bastante acogida en el Nuevo Mundo, aunque no se emitieron muchas ediciones se tienen en consideración las emitidas por Andrés de Almansa, persona que es considerada como el primer reportero de España, años más tarde comenzaron a emitirse documentos con un sentido más informativo, éstos se llamaban Gacetas, pero en cuanto ésta labor comenzaba a desarrollarse, encontró obstáculos y condiciones, así la Censura, creada para impedir la trasmisión de escritos revolucionarios después de la Revolución Francesa; la Inquisición, por la cual se tiene conocimientos de varios procesos iniciados en contra de americanos por poseer documentos peligrosos para la religión; y la falta de maquinarias, porque solo las pocas ciudades principales eran poseedoras de una imprenta.

3.3.3 LA ILUSTRACIÓN

La Ilustración llegó a Costas Americanas y nuevas ideas circundan por la mente fértil de los habitantes del Nuevo Mundo, mentes que se dan cuenta de un mundo donde la Monarquía abusa de sus derechos, irónicamente, estas ideas provienen de Europa, de Francia e Inglaterra. Se habla de ciencia, revolución y cultura, acepciones que son discutidas en medio de las tertulias con periódicos y panfletos en mano; se denuncian las medidas borbónicas, así: los impuestos de estancos y alcabalas, la menospreciación de los criollos, y el hecho de verse dominados por un Rey tan lejano a los asuntos y problemas que los americanos vivían día a día. Los periódicos que se imprimieron desde la década de 1770 es considerada parte de la Ilustración y aunque fue reducida a panfletos, trataron sobre asuntos revolucionarios, debates sobre política y filosofía que si bien es cierto eran limitados por la poca cantidad de lectores, se establece como la voz progresiva de un gran pueblo dominado por la Monarquía Española, que comienza a entrañar el concepto de Patria, una Patria libre fundada sobre la base de ideas como la Libertad, Igualdad y la Fraternidad. (Ib.)

3.3.4 ETAPA ANTINAPOLEÓNICA

Con la invasión napoleónica a España, llegó una nueva etapa periodística, en la que se unificó la opinión pública en torno a un solo objetivo: apoyar a España. Para cumplir el fin, las imprentas

trabajaron arduamente en material de apoyo como proclamas, muestras de lealtad, condenas a la actitud de Francia y listas de donativos patrióticos. Fue un arduo proceso en el que muchas veces no se establecían los límites entre la fidelidad al Rey Fernando VII y la gestación de una nueva opinión criolla, desembocando en una división de corrientes.

3.3.5 INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA

PROCESO INDEPENDENTISTA

“Entre las realizaciones de mayor alcance promovidas por las Cortes de Cádiz para iniciar el proceso que rompería ciertas estructuras del Antiguo Régimen en España, hay que hacer mención a la libertad de imprenta que sirvió de marco al nacimiento y desarrollo, desde entonces irreversible a pesar de los intervalos absolutistas, del periodismo político en el mundo hispánico.” (Seoane, 1977:47)

Las cortes aprobaron el decreto de Libertad de Prensa el 10 de noviembre de 1810, con lo que abrieron un pequeño puente entre los intereses de los patriotas y la libertad de expresión, aunque unos años más tarde se pusieron varios obstáculos como las Juntas de Censura, y nuevas disposiciones prohibitorias como el decreto de 1815 en el que se prohibía de manera general la publicación de cualquier tipo de periódico, con excepción de la Gaceta y el Diario de Madrid, bastó un instante para que las llamas de la revolución empezaran con la liberación de las colonias; fue increíble el gran número de periódicos que se publicaban en tierras Americanas durante el proceso independentista, lo que inició con la invasión napoleónica como una defensa a la monarquía a través de las gacetas, desembocó en la expresión de la necesidad de que los pueblos hispanoamericanos se gobernarán a sí mismos. Es importante decir que el proceso independentista tiene su desarrollo dependiendo de cada región, pero es justamente la prensa quien se encarga de recoger todos estos aspectos fundamentales. (Lynch, 1976)

3.3.6 FORMACIÓN DE LAS REPÚBLICAS

Al finalizar el dominio español, empieza un nuevo proceso en Hispanoamérica, en el que reinaba la inestabilidad, la violencia, los desacuerdos, la búsqueda del poder y diferentes visiones de cómo se

debían formar y organizar las nuevas naciones. Desde un principio, la prensa ha sido un adversario real o potencial del poder establecido, aunque desde el punto de vista del estado y de los intereses creados más que desde la realidad. En la historia de la prensa hay acontecimientos en los que hubo enfrentamientos con el poder: medidas contra editores, directores y periodistas.

En este contexto caótico la prensa fue tan frágil como sus caudillos, así nacían y se cerraban de acuerdo a la persona que estaba en el poder, pero aun así son la voz viva de la historia que se dio durante estos tiempos tan difíciles.

MÉXICO

Al igual que en toda la región, México presentó grandes complicaciones a la hora de organizarse después de abolir la dominación española, se dan grandes cantidades de corrientes filosóficas y políticas en las que las más diferenciadas eran las de los liberalistas que apoyaban la existencia de un país con una organización similar a la de Estados Unidos, y la de los conservadores que buscaban la creación de un modelo similar al de Europa en el que el ejecutivo tenga casi el poder absoluto; como se dijo anteriormente, en este contexto los diarios no eran neutrales y se inclinaban de acuerdo a la posición del editor del periódico.

En 1947 entre Estados Unidos y México, por la incorporación de Texas a la Unión, se suspendió la libertad de expresión en cuanto a temas de política y milicia, hasta tal punto llegó esta decisión que el Ministerio de Guerra ordenó la clausura de todos los periódicos. Esta medida duró hasta fines de 1948, luego de lo cual resurgió la prensa, entre los periódicos nacientes están: El Universal, El Siglo XIX y El Demócrata. (Miquel, 1941)

VENEZUELA

Entre 1821 y 1830 Bolívar logra unir gran parte del territorio Americano: Venezuela, Nueva Granada y Quito, creando así La Gran Colombia. En relación al periodismo en la Constitución de Cúcuta del 30

de Agosto de 1821, se expresa lo siguiente: Todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir, publicar, libremente sus pensamientos y opiniones sin necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la publicación. Pero los que abusen de esta preciosa facultad sufrirán los castigos a que se hagan acreedores conforme a las leyes.

COLOMBIA

Como en el resto de países recién formados la inestabilidad era la situación diaria, los periódicos se encargaron de plasmar este vivir social; ahora las posiciones se dividían entre quienes apoyaban a lo que fue el sueño de Bolívar y los que lo atacaban, así se fue formado poco a poco esta nueva Colombia y la Gaceta de Colombia continuó con su labor periodística y de información. (Otero, 1936)

PERÚ

Al existir la Confederación Perú-Boliviana, toda la atención se dirigió hacia las decisiones tomadas en torno a este tema, y debido a que el General Santa Cruz, Presidente de Bolivia y Protector de la Confederación Perú-Boliviana se encontraba débil de salud, decidió emitir la Censura Previa, pero la respuesta a esta medida fue la impresión de alrededor de 20 diarios; al subir Gamarra al poder en 1839 se emite el reglamento de la Policía y la moralidad que restringe aún más la libertad de expresión y de prensa, porque establecía que no se podía abrir una prensa sin la autorización de la Policía y que en cualquier momento podría ser clausurado, en 1842 al morir Gamarra se aprueba un reglamento de Imprenta que mantiene similar línea conservadora. (Gargurevich, 1991)

BOLIVIA

Después del fracaso de formar una Confederación Perú-Boliviana, comenzó una etapa de inestabilidad hasta 1841, tiempo en el que solamente circulaban hojas volantes o periódicos eventuales y efímeros

expresando su posición a favor o contra el gobierno, por mencionar algunos El Patriota y El Defensor de la Patria. Pasado este período, José Ballivián ascendió al poder desde 1841 hasta 1847, entonces los periódicos alcanzaron cierta estabilidad. (Ocampo, 1978)

ARGENTINA

La declaración de la Independencia Argentina fue el 9 de Julio de 1816. Este territorio antes formaba parte del Virreinato del Río de la Plata dentro de la Organización Administrativa dentro del Imperio Colonial, al obtener su independencia las Provincias Unidas de Sud América la organización era el tema principal de discusión, las dos posturas contrarias que giraban en torno al tema de discusión eran los federalistas y los centralistas, los primeros exigían una federación de provincias y los segundos que pedían un gobierno centralizado; esta es la causa principal de las guerras civiles que inundarían por décadas el vivir Argentino y que a la vez fueron el tema periodístico, ya sea para defender a los federalistas o para apoyar a los centralistas. Las restricciones legales sobre la libertad para imprimir aumentaron a partir de 1835, y como consecuencia, la edición de periódicos prácticamente desapareció. (De Lussarreta, 1956)

URUGUAY

En Uruguay, la expresión Declaratoria de la independencia refiere al acto realizado el 25 de agosto de 1825 por el Congreso de la Florida, integrado por representantes de los cabildos de los pueblos de la Provincia Oriental. A partir de este momento comenzó a existir inestabilidad en el país por la falta de experiencia en cuanto a organización, y los conflictos dieron origen a periódicos de duración efímera que defendían la posición de los caudillos que surgieron durante este período.

CHILE

Durante sus inicios Chile se caracterizó por ser cuna de literatos y pensadores, a pesar de los conflictos propios de toda nación recién creada la expresión escrita tuvo un auge increíble y justamente los dos periódicos que sobresalen: El Araucano y El Mercurio.

CUBA

La situación en Cuba fue totalmente distinta, porque mientras en América del Sur la mayoría del territorio se libró de las ataduras de la Colonización alcanzando la independencia, Cuba no lo hizo hasta 1895. En 1834 España tenía bastantes temores acerca de perder la última de sus colonias por eso introdujo la política de censurar casi todo periódico que se creaba y prohibió la discusión política. En 1852 el Rey promulgó una ley de imprenta, estableciendo que no había escrito que pudiera publicarse sin la autorización del gobierno, de ahí que la prensa tuviera un período silencioso.

3.3.7 ÉPOCA POST INDEPENDENTISTA 1850-1900

Formados los estados y resueltos los conflictos internos, los estados comenzaron a buscar un sistema económico viable para mantener la estructura interna que tanto trabajo les había costado formar, en este contexto Gran Bretaña situó de cierta manera a los países de Latinoamérica como productores de materia prima, lo que marcó el inicio de un cambio sustancial en cuanto al desarrollo.

Marcos Kaplan (1969:187) establece una serie de elementos que fueron propios de esta época: “el establecimiento de alianzas internas entre los grupos dominantes y con sectores del exterior; la institucionalización del proceso apoyado en una legislación cuyo marco fundamental es la Constitución y un sistema de propaganda para defender los valores básicos, en el cual el sistema educativo y la Iglesia desempeñarían un papel esencial.”

Es así que la prensa tuvo un papel de suma importancia como medio de comunicación, pero también cumplió un rol del poder, es decir los grupos poderosos trataron de formar una opinión en los ciudadanos en torno a las propuestas sociales que ofrecían.

3.3.8 INICIOS SIGLO XX

(1910-1950)

En esta primera mitad del siglo XX existen elementos comunes a toda Hispanoamérica, primero la influencia de los grandes acontecimientos mundiales que se irían presentando, entre ellos la I y la II Guerra Mundial, segundo, la presencia de una población en constante crecimiento, acompañado de la migración de las áreas rurales a las ciudades y tercero, la consolidación de los principales diarios de cada país, muchos de los cuales siguen presentes hasta la actualidad. Es el caso de El Espectador y El Tiempo de Bogotá; de El Colombiano, de Medellín; de los diarios bonaerenses La prensa y La Nación; de El Comercio de Lima; de El Comercio, de Quito; de El Telégrafo y El Universo de Guayaquil. Entre estos diarios algunos procuraron ser periódicos de opinión sin un compromiso explícito con un partido. El desarrollo de la prensa comercial permitió a las clases populares el acceso a la información.

3.3.9 1950-ACTUALIDAD

El mundo había quedado afectado por la II Guerra Mundial, mientras gran parte de Europa trataba de curar sus heridas para empezar de nuevo, la prensa a nivel de Hispanoamérica recogía todas las experiencias de los años pasados, para llegar a la conclusión de que el periodismo lejos de representar una u otra ideología, es un servicio a la comunidad y depende de su seriedad para efectos de la credibilidad.

En Inglaterra se creó The Royal Commission of Freedom. Fueron tres, la primera de 1947 a 1949 planteó la organización de un Consejo General de la Prensa con el fin de tutelar los diversos impactos económicos y sociales de la industria de imprenta. Más tarde en 1953 se creó el Consejo de la Prensa. La segunda Comisión Real que duró desde 1961 a 1962 analizó las circunstancias económicas que influenciaban a la prensa, finalmente la tercera Comisión que tuvo vigencia desde 1974 a 1977 planteó la opción de crear un Código de carácter escrito donde se establecieran que prácticas serían correctas en la prensa. Es importante hacer referencia a The Royal Commission of Freedom porque la

mayoría de países hispanoamericanos tomo como modelo su actuar, a excepción de Cuba que basaba su práctica en el bienestar del Estado como la forma práctica de alcanzar el bienestar social.

A partir de los años 70, sufre una gran metamorfosis y surge una prensa creativa que se aproxima a la literatura. El periodista es el que protagoniza y transmite aquello que ha vivido tratando de hacerlo de manera objetiva, usa técnicas categóricas demostrando su condición bajo principios de moral. Ya en el siglo XXI Latinoamérica ha sufrido grandes cambios a nivel social y político, con el nacimiento de Estados de Derecho, sus Constituciones garantizan a los ciudadanos el derecho a la información, con lo que los Estados se hacen responsables de que este derecho sea cumplido a cabalidad; a continuación, un breve examen de la situación a lo largo de cada uno de los principales países de Hispanoamérica:

URUGUAY

Hasta 1970 un estudio realizado por la OEA determina que la producción de periódicos en Uruguay es la más alta en toda Latinoamérica, estadísticas solo superadas por Estados Unidos. Al terminar los años 70 se abre un conflicto institucional en el país, provocando que se implemente la censura previa, sobre todo con periódicos con tendencias de izquierda, llegando al punto de prohibirse palabras en las publicaciones como células, terroristas, extremistas, comandos, subversivos. Durante los últimos años de la dictadura militar que es alrededor de 1983, los llamados semanarios fueron las principales formas de oposición al establecido régimen militar. Así Jaque, Búsqueda, Brecha.

VENEZUELA

Conocida como la década militar, desde 1948 los militares asumen el poder, aparte de la inestabilidad política vigente, la censura era parte del diario vivir, es el caso de La Tribuna, que fue suspendida por 5 ocasiones, aumentando el tiempo de suspensión en cada una.

Fue un tiempo oscuro para el periodismo porque se cerraban periódicos, se arrestaban editores, se amenazaban lectores. En 1958 la dictadura termina y con este hecho se empieza una etapa de total libertad de expresión.

MÉXICO

Gracias a los gobiernos revolucionarios, México fue implementando medidas que aportaban al fortalecimiento de la libertad de expresión, pero con el advenimiento de Luis Echeverría en 1970, la discusión entre el gobierno y los medios de comunicación privados fue intensa, el Presidente intentó por todos los medios alcanzar el control total de la prensa, pero le fue imposible, debido a la fuerte oposición que se presentó; al terminar su presidencia, los mandatarios que le sucedieron se preocuparon más por el ámbito de la libertad de expresión y los cuestionamientos posibles. Miguel La Madrid trató de evitar los conflictos que Echeverría había creado por medio de la fuerza y se procuró mantener una situación de equilibrio en la que el Estado poseía determinados canales de información, pero no insistía en tener el control total.

PERÚ

Desde inicios de los años 50 Perú creó cierta dependencia económica de Estados Unidos en el aspecto económico; así mismo invadió al país una ola de intolerancia respecto a los temas de izquierda y de comunismo, motivo por el cual se encarcelaron a bastantes pensadores y editores de periódicos. Tras 12 años de poder militar, los civiles tomaron el poder otra vez, con lo que en 1981 se creó el Sistema Nacional de Comunicación Social que se encargaba de regular los medios de comunicación; al poco tiempo nace el grupo terrorista Sendero Luminoso, situación que pone en alerta al Estado y emite la Ley Antiterrorista, en la que hacía mención a la prensa, estableciendo penas para los medios que incitaran a la comisión de delitos terroristas y también para quienes hicieran apología de un acto terrorista ya cometido o del delito.

BOLIVIA

Al caer el presidente Villarroel, la prensa y todos en el país pensaron que iniciaba un período de paz, pero al emitirse un decreto en el que se transformaba el tipo de cambio monetario, los más perjudicados, que eran las personas pertenecientes a la clase trabajadora se alzaron en protestas, lastimosamente el gobierno en respuesta restringe la libertad de expresión mediante el cierre de periódicos y hasta el arresto de algunos periodistas. Al darse la Revolución Nacional de 1952 por el control del Estado sobre los recursos naturales la distribución de tierras, y la economía nacional; este golpe fue uno de los más sangrientos en la accidentada vida republicana: desde su inicio (9 de abril) hasta el 14 del mismo mes arrojó un saldo aproximado de 3.000 muertos y 6.000 heridos, especialmente en La Paz. La mayoría de diarios suspendió sus actividades porque las vidas de los que participaban en la prensa corrían un gran peligro, solo los más valientes publicaban, entre ellos el diario La Razón, sin embargo fue cerrado (Ocampo, 1978). De 1964 a 1982 se da una etapa de gobiernos militares, pero al finalizar esta etapa se establece la democracia, que está latente hasta nuestros días.

CHILE

Gracias a la Constitución de 1925, que consagraba la libertad de prensa, Chile pudo desarrollar de una manera increíble este sector, creándose grandes empresas periodísticas, destacándose el diario El Mercurio, aunque existieron también La Sociedad Periodística del Sur (SOPESUR), propietaria de los diarios Correo de Valdivia, El Diario Austral de Temuco, La Patria de Concepción y La Prensa de Osorno. Durante el fin del siglo es visible la oposición constante de los diarios derechistas con los diarios de izquierda, que se acentuó con la dictadura de Pinochet (1973-1988), que desde sus inicios en el poder se dedicó a cerrar diarios con tendencias de izquierda, así como el arresto y fusilamiento de periodistas. Al terminar la dictadura de Pinochet se consolida la democracia hasta nuestros días.

ARGENTINA

En 1946 fue electo presidente Juan Domingo Perón, quien junto a su esposa Eva Perón implantaron políticas sociales, una de ellas el voto femenino, sin embargo se tenía el concepto de que el Estado

debía controlar los medios. Al morir Perón en 1974, la anarquía llegó al país, situación que fue aprovechada por los militares para tomar el poder y en marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar, llamado Proceso de Reorganización Nacional con una duración de 8 años, durante el cual se estableció un terrible régimen de terrorismo de estado que se encargó de torturar y secuestrar personas causando el temor del pueblo.

En cuanto a las políticas sobre los medios de comunicación, esta Junta Militar se encargó de encarcelar a un sinnúmero de editores que publicaran información sobre grupos guerrilleros o que se refiriera a violación de derechos humanos por parte del Gobierno; se llegó, inclusive a hacer una lista de diarios, películas y libros prohibidos; más la censura favoreció a los dos principales diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires, pero debilitó a los periódicos más pequeños del país. Luego del sufragio del 30 de octubre, la democracia regresó al país en 1983, eligiéndose a Raúl Alfonsín, quien apoyaba la libertad de expresión y cuyo primer objetivo fue eliminar la Censura Previa; desde esa memorable fecha hasta el día de hoy ha regido la democracia en Argentina.

CUBA

Desde la caída de la Dictadura de Batista, Fidel Castro estando en el poder, se dio cuenta del valor de los medios de comunicación, es así que a pesar de que cuando entró en La Habana ofreció poner fin a la censura y a la prohibición de la libertad de expresión, solo cambió los controles establecidos por Batista por los suyos propios.

A partir de 1960 se cerraron diarios opositores, se encarcelaron editores de periódicos contrarios al régimen o que no servían en totalidad a sus intereses, se exiliaron personas que no estaban de acuerdo con las medidas tomadas. El monopolio ejercido por Castro dio resultados favorables a su causa, porque le permitió alcanzar sus objetivos de revolución, dominio y poder; hasta la actualidad se mantiene el mismo régimen de control del Estado sobre los medios de comunicación.

PARAGUAY

En 1954 el general Alfredo Stroessner tomó el poder, fue reelegido presidente seis veces, durante los 34 años que duró el gobierno de Stroessner, las libertades políticas se vieron terriblemente limitadas, no se podía criticar ni al presidente ni a su familia, ni los mandos militares y las personas que se presentaban como opositores al régimen sufrieron el acoso, la cárcel y el exilio. En 1989 se produjo un golpe de Estado que terminó con esta larga dictadura de Stroessner, convocándose a elecciones y llamando al restablecimiento de la democracia; actualmente la libertad de prensa y de libertad están garantizadas por la Constitución.

3.4 TIPOS DE CENSURA

3.4.1 CENSURA PREVIA

Consiste en revisar el material que se pretende publicar antes de que éste pueda emitirse, generalmente este tipo de censuras van acompañadas de leyes o disposiciones por parte de los gobiernos, hay listas de temas, personas, cosas y personajes que no pueden aparecer en los medios. Conforme al derecho internacional, se permite la censura previa solamente en el caso de una amenaza inminente al interés nacional, pero al presentarse debe justificarse de manera específica como protege el interés nacional.

El Dr. Villarruel (2011) al hablar de censura, afirma que es el abuso de poder de manera directa o indirecta que ejercen ciertas organizaciones que tienen la autoridad para controlar la libertad de pensamiento o expresión de los individuos; en un país quienes ejercen estas arbitrariedades son por lo general grupos de poder, como los gobiernos, grupos monopólicos en medios de comunicación o quienes influyen en los mismos. Una de las principales preocupaciones del ser humano ha sido tener el control de la comunicación y los medios que la viabilicen, debido a que quien controla la información, gobierna y tiene el poder.

Al concebir su prohibición en términos absolutos, es importante determinar de modo estricto el concepto constitucional de censura previa, en el Manual de Derecho Constitucional (Rodríguez, 2012), se establece que censura previa es cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra, fundamentalmente al hacerla depender del examen previo y oficial de su contenido. Para entender mejor este concepto es necesario analizar sus elementos constitutivos:

- 1) El carácter previo de una restricción, es decir que se realice con anterioridad al momento de la elaboración o difusión del mensaje, aunque difícilmente puede servir de fundamento tomando en cuenta que es relativamente corto el tiempo que transcurre entre la elaboración y la difusión del mensaje.
- 2) Que la restricción previa se imponga a través de la exigencia de una autorización, pues es básico que dentro de la censura se haga depender el mensaje de un previo examen oficial, entonces debe añadirse como requisito fundamental para que opere esta situación.
- 3) Que la autorización dependa del examen oficial del contenido, con la intervención previa por parte de un poder público dirigida a autorizar la difusión de una obra.

Ejemplos de censura previa:

Caso Francisco Martorell, en 1996, en Chile, un tribunal había impartido una orden prohibiendo la publicación de un libro la noche anterior a la fecha de su salida a la venta. El libro relataba las circunstancias que habían llevado a que un ex embajador de la Argentina en Chile abandonara este país. Francisco Martorell, autor del libro, apeló la decisión ante la Suprema Corte, quien rechazó la apelación y prohibió la circulación del libro. Asimismo, se presentaron cargos contra el autor por difamación y calumnias. La Comisión consideró que se había violado el Artículo 13, porque la orden contra el libro constituía censura previa y observó lo siguiente: La prohibición de la censura previa, con la excepción consignada en el párrafo 4 del Artículo 13, es absoluta y exclusiva de la Convención Americana, por cuanto ni la Convención Europea ni la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos contienen disposiciones similares. El hecho de que no se estipulen otras excepciones a esta disposición,

indica la importancia que los autores de la Convención asignó a la necesidad de expresar y recibir cualquier clase de información, pensamientos, opiniones e ideas.

Caso La última tentación de Cristo, suscitado por la prohibición de que esa película se exhibiera en Chile, brindó a la Corte Interamericana la oportunidad de tratar a fondo el alcance de la prohibición de la censura previa. La Corte señaló que el Artículo 13 no permite la censura previa, salvo cuando se trate de espectáculos públicos y exclusivamente para la protección moral de niños y adolescentes. En este caso, la prohibición de la película también se aplicaba a los adultos, y, por ende, violaba el Artículo 13. (Censura Previa, 2011)

En la actualidad en China, existen reguladores de contenido, permitiéndose que solo se exhiban en los cines 34 películas extranjeras por año y las películas aprobadas deben pasar por otros censores estatales en los que se editan cualquier cosa que el Partido Comunista considere ofensivo o subversivo. La censura no solo existe en el ámbito de las películas, también se da en el acceso a internet, así se bloquean páginas relativas a derechos humanos o con críticas al partido comunista y redes sociales; Youtube y Facebook son páginas a las que no se puede obtener acceso en este país. Los libros no quedan exentos, antes de ser publicados la censura es un procedimiento obligatorio, Los libros a menudo son pasados de contrabando en China desde jurisdicciones que incluyen a Hong Kong. La censura es el pan de cada día en este gran país: las charlas de importancia fundamental sobre los derechos humanos, el Tíbet o el Partido Comunista están prohibidas y presentar informes sobre el patrimonio de los funcionarios chinos también está prohibido.

3.4.2 CENSURA POSTERIOR

Este tipo de censura se presenta después del hecho, después de la difusión de la información no deseada, se toman medidas para que este hecho no se repita como sanciones económicas o suspensión de programas o personas, de esta manera los responsables tienen una sanción y las demás personas de la sociedad también se ven intimidados para no obrar de modo similar.

3.4.3 AUTOCENSURA

La autocensura consiste en que la persona no expresa su real opinión por temor a las consecuencias, posibles represalias que pueden ser asumidas o por la conveniencia de sus intereses, es decir, consiste en renunciar a la libertad personal. Considerada como el resultado de una iniciativa personal fundada en el temor y la represión. Se entiende también como una acción precautoria por parte de los medios para evitar reacciones legales o meta legales por un gobierno autoritario. La autocensura es la limitación que los propios medios establecen, aquí se encuentra la dificultad de reconocer la existencia de la autocensura, pues implicaría asumir las propias limitaciones del periodista y su estado de indefensión frente al censor, sin embargo la no difusión de ciertos temas se encuentran vinculados en su mayoría con intereses políticos o económicos.

Muchos afirman que los gobernantes y personas con mucho poder ejercen presiones para que se produzca la autocensura cuando ven que sus errores y delitos, expuestos ante la opinión pública, terminarán por atentar contra su mantenimiento en el poder, de la misma manera los periodistas dicen que caer en la autocensura sería una traición a la naturaleza de su labor, porque si las noticias e ideas que se pasan por alto en los medios de comunicación, están sometidas al poder político y económico la prensa seguirá convirtiéndose en una entidad de comunicaciones de los mismos y se rebajará para siempre la dignidad de la profesión periodística.

La consecuencia de la autocensura es la lesión del derecho que tiene la sociedad a recibir información veraz e imparcial puesto que lo ideal es que los ciudadanos tengan acceso a información amplia y variada para que puedan tomar decisiones de todo tipo.

3.4.4 CENSURA ECONÓMICA

La censura económica se entiende como la situación en la que los medios están sometidos a un tipo de censura indirecta aplicada por empresarios o por el Estado que, si el medio llega a publicar alguna información en contra de cualquiera de las partes mencionadas, pueden retirar sus pautas publicitarias,

que actualmente son el principal sustento económico de los medios. La censura económica no solo se encuentra en las editoriales, también es la práctica diaria de los medios de comunicación tradicionales.

Para muchos la emisión de los medios masivos, especialmente la televisión y el cine, es centralista y antidemocrática, porque sus altos costos de emisión permiten que sólo un grupo de poderosos accedan a manejarlos. El medio decide si se transmitirá una manifestación o protesta, un evento cultural o una noticia. Si tomamos como base este tipo de censura, los canales en manos del Estado tendrían un valor democrático mucho mayor que los grandes emporios económicos, porque dentro de una política estatal es más probable que existan incentivos hacia programas culturales y proyectos comunitarios que no dependan tanto de los anunciantes publicitarios o del rating.

CAPÍTULO IV

LINCHAMIENTO MEDIÁTICO

4.1 ANTECEDENTES

En la histórica obra teatral Fuenteovejuna, el dramaturgo Lope de Vega narra la historia de un pueblo que, en el siglo XV, donde el pueblo de Fuente Ovejuna está sometido bajo la Orden de Calatrava. El pueblo ya harto de los robos y crueldades del Comendador, decide unirse y tomar la justicia por su mano. Una noche llegan todos juntos al palacio y lo matan en nombre de Fuente Ovejuna y de los Reyes Católicos. En el juicio, cuando el juez les pregunta quién mató al Comendador, todo el pueblo responde: Nadie, o todos, Fuenteovejuna todos a una; por eso absuelven al pueblo, porque es imposible determinar la identidad de los culpables concretos. Este podría ser considerado linchamiento en el aspecto físico y material, pero ¿de dónde surge el término “Linchamiento”?

El término “Linchamiento” tiene orígenes en el idioma anglo con la palabra "lynching"; hace referencia a Charles Lynch, un plantador de Virginia y revolucionario estadounidense que encabezó una irregular corte en Virginia para castigar a los colonos americanos leales a Gran Bretaña y su monarquía en el período de la Guerra de la Independencia. Según el historiador Robert Middlekauff, en esa época alrededor del 19% de la población aún permanecía fiel al gobierno de los ingleses, Lynch al ser coronel de milicia, junto con otros militares, descubrió a un grupo de personas a los que acusaron de ser los causantes de una sublevación de lealistas en el sudoeste de Virginia. Los sospechosos, acusados de sublevación, nunca fueron sometidos a un proceso judicial en su año en la cárcel por la falta de condiciones para lograrlo. Por eso, Lynch en 1780, junto a algunos vecinos, decidieron tomar el caso con sus propias manos y mandar a los leales a la horca.

Este fue el antecedente concreto para la utilización del término Linchamiento, y en Estados Unidos continuaron los linchamientos, a tal nivel que al realizarse un estudio entre 1880 y 1920 se llegó a

determinar que alrededor de 3724 personas fueron linchadas, la mayoría de ellas eran de raza negra y los linchadores siempre fueron blancos, aspecto que nos indica que la principal causa pudo ser el racismo. (Mantilla, 2012)

4.2 CONCEPTO LEGAL

Ley Orgánica de Comunicación. Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información.
2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas.

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.

4.3 UNA NUEVA FIGURA LEGAL

En Ecuador, más allá de la Ley de Comunicación, están vigentes penas por delitos como injurias y daño moral, de hecho en estos últimos años periodistas ecuatorianos han sido enjuiciados al ser

acusados del cometimiento de dichos delitos. El linchamiento mediático es una figura introducida en la legislación ecuatoriana después de casi cuatro años de discusión, así, en la Asamblea Nacional de Ecuador se aprobó el viernes 14 de junio de 2013 la Ley de Comunicación, gracias a la votación de una mayoría absoluta del oficialista Alianza País.

María Augusta Calle, fue quien planteó la figura del linchamiento mediático, asambleísta por el movimiento de gobierno Alianza PAIS (AP) desde hace más de seis años su trayectoria con AP empezó en el 2007 como asambleísta de la Constituyente que elaboró la actual Constitución, después fue parte del denominado Congresillo y de la Asamblea Nacional, donde estuvo en el periodo 2009-2013 y había sido reelecta para el período 2013-2017, Durante su gestión, Calle aportó en la redacción de varias leyes, como la de Servicio Público y de Seguridad Social, según una de las rendiciones de cuentas que están colgadas en la web de la Asamblea, además de impulsar la aprobación de la Ley de Comunicación promovió la inclusión del delito de linchamiento mediático en dicha norma, entre otros motivos, la oficialista argumentó que ella fue víctima de esto cuando fue vinculada a las FARC, luego del ataque a Angostura en el 2008.

Esta nueva figura legal generó polémica en el país y fuera de él, ha desatado las críticas tanto de la oposición como de organismos internacionales, hasta el punto de recibir el apodo de ley mordaza por el supuesto control que impone a los medios de comunicación privados, a continuación algunas opiniones que de apoyo y de rechazo sobre el Linchamiento Mediático:

La asambleísta oficialista Ximena Ponce dice a BBC Mundo que lo que busca esta figura legal es "proteger al ciudadano" y "parar la difusión de información que pretende de manera sistemática desprestigiar a una persona". "Esta ha sido una práctica que lamentablemente ha estado ocurriendo y frente a esto se la norma". (Mena, 2013)

Para periodistas como Arturo Torres, editor de Investigación de diario El Comercio, la figura del "linchamiento mediático" interrumpirá procesos periodísticos de seguimiento de temas de interés público. "Cuando uno quiere ir más allá de la noticia, necesita hacer un seguimiento pormenorizado de un caso para ir profundizando y mostrando por qué ocurrió ese hecho, qué desencadenantes ha tenido.

Muchas de las grandes investigaciones periodísticas toman meses, sino años. Recordemos el caso "Watergate", señala Torres a BBC Mundo. (Ib. 2013)

El presidente Rafael Correa se mostró partidario de sancionar el denominado ‘linchamiento mediático’, cuando “sistemáticamente se trata de imponer una verdad y destruir a una persona”. Lo dijo durante un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil, donde defendió la independencia de la Justicia. (Linchamiento Mediático, 2013)

El 9 de noviembre de 2013 la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras pidió al Gobierno de Ecuador que precise una norma contenida en la nueva ley de Comunicación que se refiere al llamado "linchamiento mediático", sobre la supuesta concertación de medios para afectar la imagen de personas o entidades. y se preguntó "cómo se puede probar" una acción concertada en los medios para desprestigiar a una persona o institución, como reza la normativa. (RFS pide precisar norma linchamiento mediático en Ecuador, 2013)

La relatora para libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero en una carta enviada al Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, señaló varias disposiciones en la ley que "podrían resultar incompatibles con los estándares internacionales en la materia", sobre la nueva Ley de Comunicación. "Algunas de las obligaciones que impone la Ley sobre los medios de comunicación pueden resultar ambiguas y exorbitantes", subrayó la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su carta, Botero expresó además su inquietud por la figura del "linchamiento mediático" y la posibilidad de que pueda aplicarse a "cualquier denuncia sostenida de corrupción" sobre un funcionario público, sin requerir evidencias de "falsedad de la noticia" o "negligencia" del comunicador. (CIDH urge a Ecuador a cambiar Ley, 2013)

Según Mary Verduga, diputada de Alianza País, con este delito se pretende evitar que los periodistas afecten la dignidad de las personas. El paradigma que esgrime el Gobierno es el caso de María Augusta Calle, diputada de su partido, que sufrió un “linchamiento mediático” —palabras del propio Correa— por parte de la “prensa mercantilista”, que la acusó de vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (Medina, 2013)

La Superintendencia de Información y Comunicación, hasta el momento ha recibido alrededor de 10 denuncias de Linchamiento Mediático, pero el primer caso aceptado a trámite como tal fue el propuesto por Sandra Correa quien fue Ministra de Educación durante la presidencia de Abdalá Bucaram, su denuncia corresponde a presuntamente haber sido víctima de linchamiento mediático en los casos "Copia" y "Mochila Escolar"; la audiencia de sustentación se realizó el lunes 13 de abril de 2014 a las 10:30 a la que compareció el radio difusor Diego Oquendo, director del medio radial, la audiencia se realizó de forma oral en la que se contestó a la denuncia y se presentó las evidencias. Correa había interpuesto además denuncias contra Diario El Comercio y Diario Hoy pero en la providencia de la Supercom se excluyó a dichos medios por que las publicaciones correspondían a fechas anteriores a la aprobación de la Ley de Comunicación. Sobre el tema, el Superintendente de Información indicó que la Ley Orgánica de Comunicación vigente desde el 25 de junio de 2013 regula la figura jurídica del linchamiento mediático, la misma no tiene carácter retroactivo por las fechas en las cuales salieron las publicaciones.

4.4 ANÁLISIS LEXICOGRÁFICO

Linchar, verbo que en inglés está en uso desde 1811, se registró como de uso en español, en 1899, con este significado: “Ejecutar a un criminal sin formación de proceso o tumultuariamente, como se practica con frecuencia en los Estados Unidos de América”. Así:

1. **Matar**: linchar es matar a una persona;
2. **Tumultuariamente**: mucha gente y en tumulto, no de manera ordenada;
3. **Sin proceso**: ese disturbio no da tiempo para establecer un proceso.

Establece la Ley de Comunicación:

Art. 26. Linchamiento mediático. Queda prohibida la difusión de Información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

Como la acción de difundir información a la que hace referencia la Ley no produce una muerte real y así mismo no es tumultuaria, el uso de la expresión “linchamiento” en ese artículo de la Ley no es propio, sino metafórico. La metáfora consiste en trasladar el sentido de una palabra o una frase a otra palabra o frase para establecer una relación identificativa: un término representa a otro, en la literatura, el concepto que la metáfora representa no siempre es explícito y puede variar según las diferentes interpretaciones de los lectores, por tanto, es lenguaje extraño en el ámbito jurídico.

El problema surge, cuando se analiza que no es posible aplicar un sentido metafórico en la formulación de leyes, el sentido debe ser directo y unívoco, sin dar lugar a interpretaciones diversas ni cargar de emotividad las tipificaciones legales, con el fin de evitar ambigüedades y confusiones. Además el Art. 136 de nuestra Constitución dice que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la EXPRESIÓN CLARA de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará. Esta figura también fue analizada por la Academia Ecuatoriana de la Lengua y señaló que no es propio su uso en la Ley, ya que linchar es matar y la acción periodística no produce una muerte real, está claro que el uso de linchamiento en ese artículo de la Ley no es propio, sino metafórico.

Además, en general la teoría de la norma jurídica, indica que ni en la parte hipotética ni en la dispositiva de la norma pueden emplearse figuras literarias, ni conceptos equívocos; tanto la enunciación de la norma cuanto su estructura deben responder al rigor de la lógica jurídica, y sus palabras han de ajustarse a ella. El lenguaje jurídico es siempre normativo, porque su función es prescriptiva, ya que su finalidad es reglar o inducir la conducta, es decir, prescribir, dar órdenes, establecer prohibiciones, tipificar infracciones, permitir acciones, etc. Bobbio (1996:59) dice que “un cuerpo de leyes tiende a eliminar todo aquello que no es precepto, y por tanto, la característica de un código

moderno consiste precisamente en eliminar todos los elementos descriptivos y evocativos que a menudo han sido mezclados con elementos prescriptivos.”

Al realizar este análisis lexicográfico, podemos determinar que a pesar de las excelentes intenciones de los legisladores, el término “linchamiento mediático” no es el más adecuado para la figura legal que está siendo analizada en este trabajo, porque como se ha explicado, la palabra “linchamiento” se aplica a términos físicos, específicamente cuando un grupo desordenado de personas (turba) se reúnen y matan a una o varias personas, hubiese sido más acertado buscar un término objetivo y no metafórico.

4.5 ELEMENTOS DEL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO

1. Difusión de Información:

La difusión de información es el proceso por el cual se transmite al usuario la información que necesita o en darle la posibilidad de obtenerla, consiste en una operación documental de salida; a la vez a información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación. Es importante destacar en este punto que el linchamiento mediático se aplica sobre la difusión de información, no de opinión que es el concepto que cada persona tiene respecto a algo o alguien; es decir no sería aplicable sobre programas radiales o televisivos que emitan entrevistas o de diarios y revistas que impriman en sus páginas criterios y opiniones.

2. Producción de manera concertada a través de uno o más medios de comunicación

La Real Academia Española (2014) dice que concertación es pactar, ajustar o convenir; situación en la que sería necesaria por lo menos la participación de dos medios de comunicación. En este punto es relevante mencionar que para que opere el linchamiento mediático se debería probar que dos o más medios de comunicación se reunieron con el fin de pactar desprestigiar a una persona a través de la difusión de información.

3. Publicación reiterada a través de uno o más medios de comunicación

De acuerdo con la Real Academia Española (2014), reiteración quiere decir repetir algo. Una reiteración, por lo tanto, consiste en realizar o expresar una cosa que ya se había hecho o manifestado con anterioridad. Sin embargo las bibliotecas virtuales que contienen los archivos digitales de cada medio de comunicación para que el público acceda a ellos en cualquier momento no deberían ser tomados en cuenta, porque tal y como dice la ley, hace referencia a las publicaciones reiteradas y no a las publicaciones permanentes.

4. Propósito de desprestigiar a una persona o reducir su credibilidad

Es la Intención de los medios de comunicación que se han reunido de manera concertada para causar un daño grave a la honra de una persona en específico; este elemento constitutivo en la práctica es bastante difícil de comprobar, pero si se quiere demostrar que existe linchamiento mediático en una denuncia presentada ante la Superintendencia de la Información y la Comunicación, es necesario adjuntar las pruebas pertinentes.

4.6 LA PRUEBA

Para que después de presentada la denuncia ante la Superintendencia de Comunicaciones, se determine que efectivamente el acto denunciado es Linchamiento Mediático se deben probar tres condiciones:

La concertación de las partes, así la información difundida debió ser pactada entre dos o más generadores de noticia. Se debe producir evidencia de la existencia del pacto. En derecho no podemos asumir que ha existido concertación con el solo hecho de que la misma información haya sido publicada o difundido por varios medios al mismo tiempo.

La información debe ser publicada o difundida de manera reiterativa, es decir, en más de una ocasión; y,

Que exista una afectación en contra de un sujeto o institución.

4.7 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

En el caso del "linchamiento mediático", la entidad que aplica las sanciones dispuestas en la Ley de Comunicación será la Superintendencia de la Información y Comunicación, esta funcionará como un "organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionadora, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa.

Que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación"; cuya máxima autoridad será nombrada por el estatal Consejo de Participación Ciudadana de una terna enviada por el presidente de la República. No solo podrá aplicar las sanciones a los medios de comunicación, sino también "requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación información sobre sí mismos que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones".

En el caso de que se llegare a comprobar la existencia de Linchamiento Mediático, las sanciones consisten en:

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información.

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas.

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.

CAPÍTULO V

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

5.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

5.1.1 ENCUESTA

El instrumento de medición que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario, un cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa, por lo cual cada una de las preguntas que se incluyen en este instrumento serán dirigidas a conocer los aspectos específicos del objeto de estudio de este trabajo de investigación.

Para esta investigación se realizó un cuestionario, que consta de 8 preguntas, de las cuales 7 son cerradas, una pregunta es cerrada pero con posibilidad a dar opciones en caso de que sea positiva; hacen referencia a datos generales del conocimiento sobre el linchamiento mediático y la censura previa, así como la percepción que tienen los encuestados sobre la situación actual de la libertad de expresión en nuestro país; con la finalidad de facilitar las respuestas al cuestionario.

Las preguntas fueron elaboradas y definidas de acuerdo a los objetivos y limitaciones perseguidos en esta investigación, permitiendo al encuestado elegir la opción que describiera con mayor puntualidad el conocimiento de la circunstancia puesta en estudio, de esta manera las preguntas abiertas que tiene el cuestionario son preguntas en las que las personas pueden expresar una idea simple y precisa.

5.1.2 ENTREVISTA

La Entrevista es una de las técnicas más comunes para investigar la realidad social, porque permite recolectar datos sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas acerca de un determinado tema, por eso es importante la selección del sujeto a ser entrevistado, porque su capacidad para responder las preguntas elaboradas en la entrevista serán parte fundamental dentro de un trabajo investigativo.

5.2 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

5.2.1 ENCUESTA

Después de elaborar el formato del cuestionario, tomando en cuenta que se estableció como población a alumnos de sexto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y a alumnos de sexto semestre la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, se estableció la muestra tomando en cuenta la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$$

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

O= desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la estimación del intervalo de confianza para la media, la cual es:

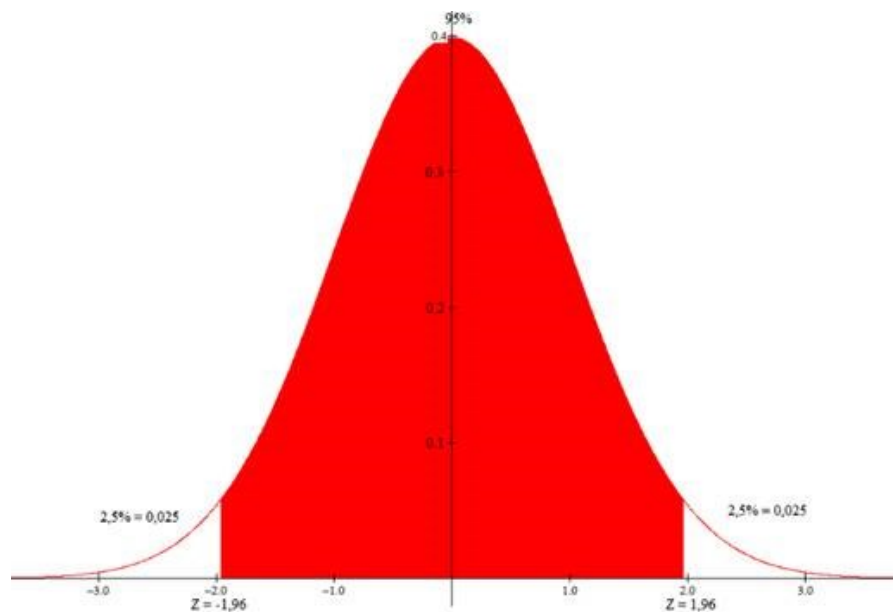
$$\bar{X} - Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

De donde el error es:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Realizando el gráfico que representa el 95% de confianza se obtiene:

1. Gráfico de Confianza:



Así después de realizada la fórmula se determinó que para el primer cuestionario realizado a los estudiantes de sexto semestre de Derecho la muestra era de 56 alumnos y para el segundo cuestionario realizado a los estudiantes de Comunicación la muestra era de 47 alumnos. Así también se realizó una encuesta a ciudadanos comunes que pasaban por un sector concurrido de la ciudad, la Plaza Grande, para esto se tomó una muestra de 173 personas. De esta manera se estaría encuestando a personas con relación al área legal, al área de la comunicación y ciudadanos.

5.2.2 ENTREVISTA

Para esta investigación se elaboró un cuestionario con 6 preguntas y se escogió a personas idóneas para aportar con su conocimiento científico y legal: Dr. Marco Villarruel catedrático de la Facultad de Comunicación, Dra. Elsa Quispe asesora legal de la Superintendencia de la Información y Comunicación y Dr. Manuel Alvarado experto en temas del derecho a la información.

5.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.3.1 ENCUESTA

Una vez obtenida la información gracias a la aplicación de los cuestionarios, se descargaron las respuestas en una matriz de resultados elaborada en Excel, por medio de la cual se facilitó el análisis de los datos, ordenándolos de manera que su interpretación y manejo de información fuera sencilla.

Pregunta 1:

¿Sabía Ud. que desde el 14 de Junio de 2013 rige en nuestro país la Ley de Comunicación?

SI....

NO....

A través de esta pregunta se pretende determinar cuál es el conocimiento de las personas respecto a su entorno legal, es decir la situación actual del país.

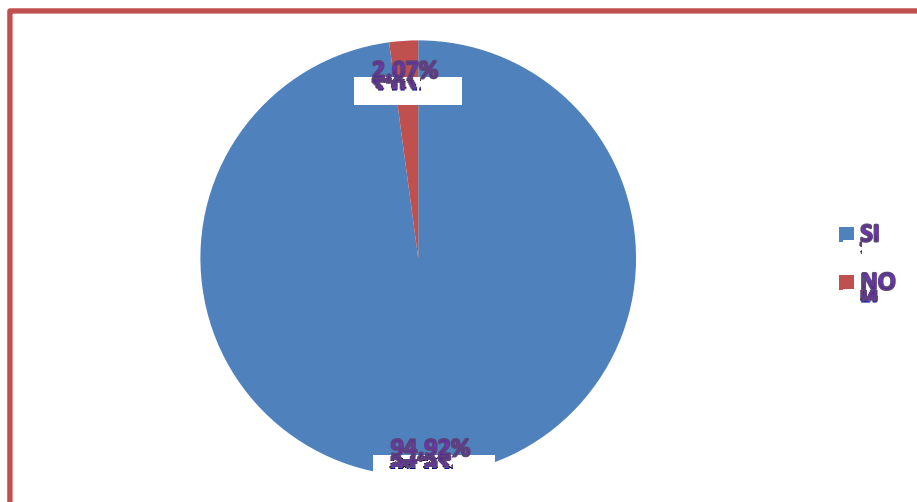
1. Tabla: Conocimiento de la Ley de Comunicación

Elaborada por Alicia De la Rosa

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	56	0	100%	0%	SI: 94.92%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	47	0	100%	0%	NO: 5.07%
CIUDADANOS	159	14	91.90%	8.09%	

2. Gráfico: Conocimiento de la Ley de Comunicación

Elaborado por Alicia De la Rosa



Pregunta 2:

¿Conoce Ud. en qué consiste el Linchamiento Mediático?

SI....

NO....

Mediante esta pregunta se pretende conocer si las personas conocen el concepto de Linchamiento Mediático, tema concerniente a este trabajo de estudio.

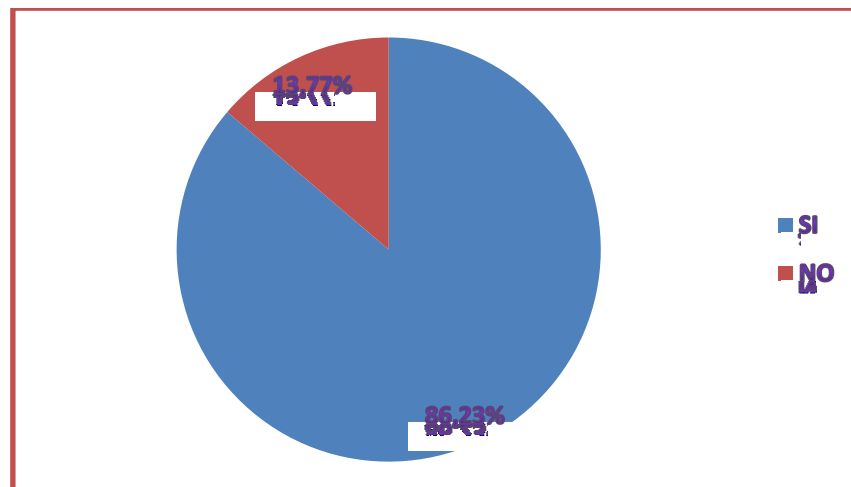
2. Tabla: Conocimiento del concepto de Linchamiento Mediático

Elaborada por Alicia De la Rosa

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	56	0	100%	0%	SI: 86.23%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	47	0	100%	0%	NO: 13.77%
CIUDADANOS	135	38	78.03%	21.97%	

3. Gráfico: Conocimiento del concepto de Linchamiento Mediático

Elaborado por Alicia De la Rosa



Pregunta 3:

¿Conoce Ud. en qué consiste la censura previa?

SI....

NO....

Con esta pregunta se puede saber si las personas en general saben en qué consiste la censura previa, es necesario examinar este punto, para después establecer la relación con Linchamiento Mediático.

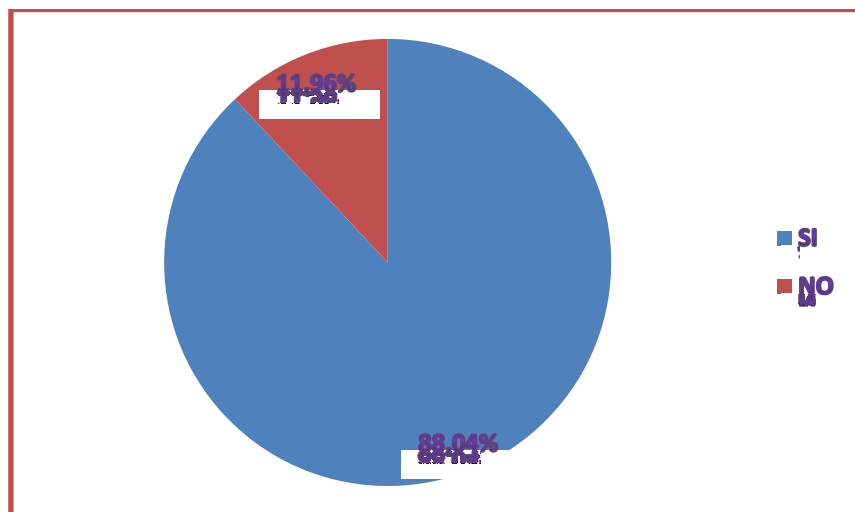
3. Tabla: Conocimiento de la Censura Previa

Elaborada por Alicia De la Rosa 56 47 173

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	56	0	100%	0%	SI: 88.04%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	47	0	100%	0%	NO: 11.96%
CIUDADANOS	140	33	80.92%	19.08%	

4. Gráfico: Conocimiento de la Censura Previa

Elaborado por Alicia De la Rosa



Pregunta 4:

¿Al encontrarse estos dos preceptos legales (Censura Previa y Linchamiento Mediático) en la Ley de Comunicación cree Ud. que existe algún tipo de contradicción?

SI....

NO....

Con esta pregunta se puede tener acceso a la opinión general acerca de una posible contradicción en la Ley de comunicación entre dos preceptos legales.

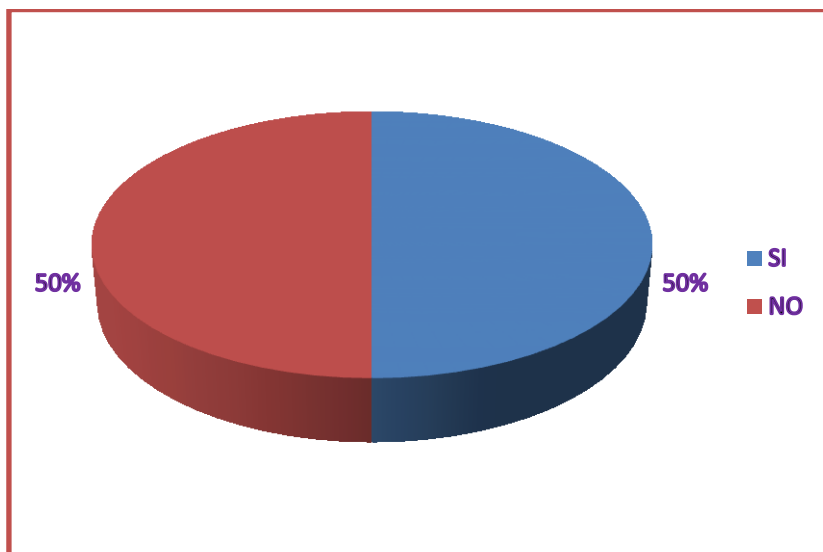
4. Tabla: Posible Contradicción

Elaborada por Alicia De la Rosa

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	27	29	48.21%	51.78%	SI: 50%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	24	23	51.06%	48.94%	NO: 50%
CIUDADANOS	87	86	50.28%	49.72%	

5. Gráfico: Posible Contradicción

Elaborado por Alicia De la Rosa



Pregunta 5:

¿Cree Ud. que el linchamiento Mediático puede producir censura previa?

SI....

NO....

A través de esta interrogación se puede establecer si la ciudadanía considera que el Linchamiento Mediático puede ser una causa para que se produzca censura previa.

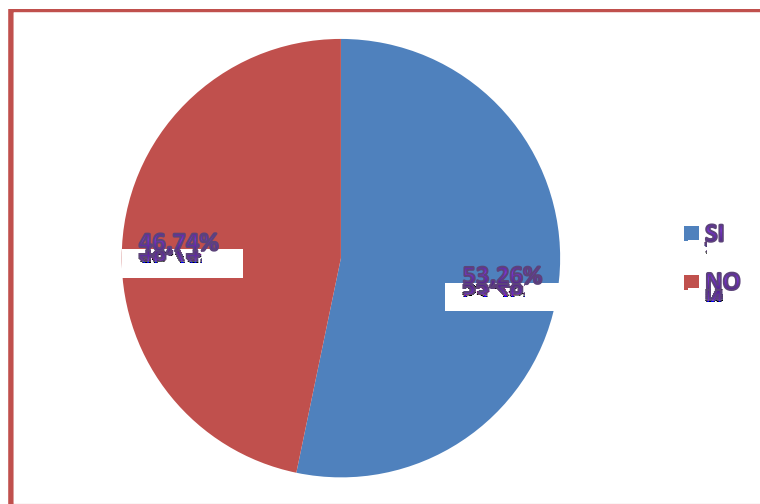
5. Tabla: Posible consecuencia del Linchamiento Mediático

Elaborada por Alicia De la Rosa

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	27	29	48.21%	51.78%	SI: 53.26%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	30	17	63.82%	36.18%	NO: 46.74%
CIUDADANOS	90	83	50.02%	47.98%	

6. Gráfico: Posible consecuencia del Linchamiento Mediático

Elaborado por Alicia De la Rosa



Pregunta 6:

¿Considera Ud. que el linchamiento mediático puede obstaculizar la garantía del derecho a la información?

SI....

NO....

¿De qué manera?.....

Esta pregunta consta de dos partes, la primera es cerrada, dependiendo de la respuesta, si esta es afirmativa, se da la posibilidad al encuestado para expresar su punto de vista, es importante porque con esta pregunta se puede determinar si en la opinión pública se considera que el Linchamiento Mediático puede obstaculizar la garantía del derecho a la información.

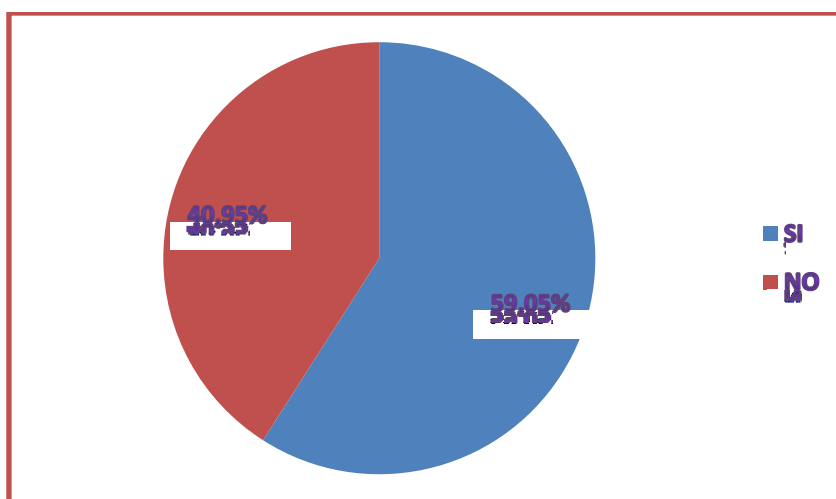
6. Tabla: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información

Elaborada por Alicia De la Rosa

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	29	27	51.78%	48.21%	SI: 59.05%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	31	16	65.95%	34.05%	NO: 40.95%
CIUDADANOS	103	70	59.53%	40.47%	

7. Gráfico: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información

Elaborado por Alicia De la Rosa



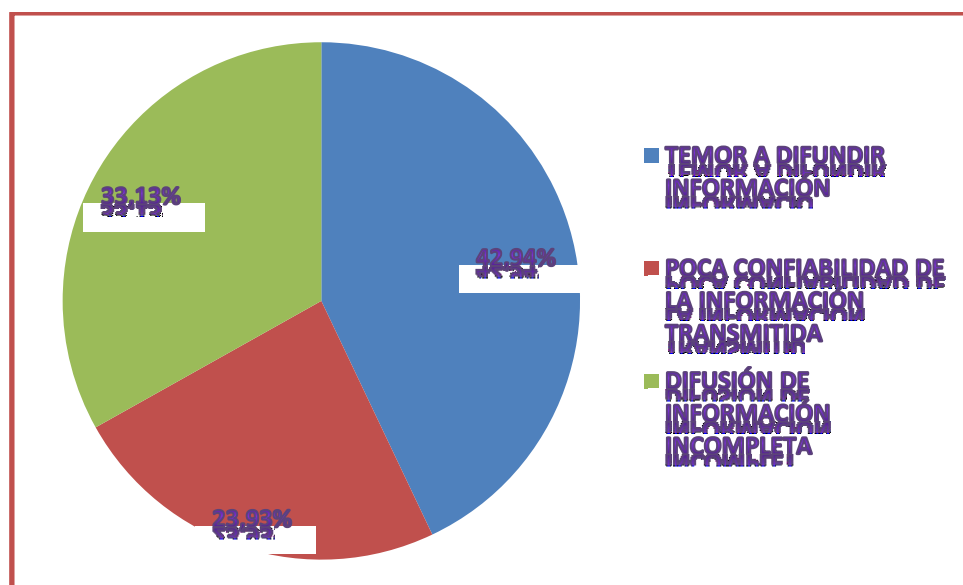
7. Tabla: Obstáculos al Derecho a la Información

Elaborada por Alicia De la Rosa 29 31 103 163

RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
TEMOR A DIFUNDIR INFORMACIÓN	70	42.94%
POCA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA	39	23.93%
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INCOMPLETA	54	33.13%
TOTAL:	163	

8. Gráfico: Obstáculos al derecho a la Información

Elaborado por Alicia De la Rosa



Pregunta 7:

¿Cree Ud. que el artículo 26 correspondiente al Linchamiento Mediático presenta algún tipo de dificultad para el entendimiento entre la ciudadanía?

SI....

NO....

Esta pregunta es necesaria dentro del cuestionario porque se puede determinar hasta qué punto es comprendida esta nueva figura legal, porque al ser entendida se la puede aplicar de una manera correcta.

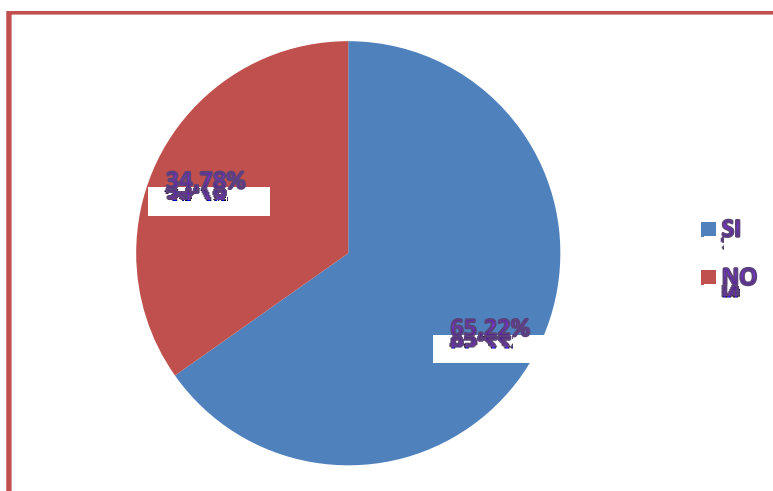
8. Tabla: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información

Elaborada por Alicia De la Rosa

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	31	25	55.35%	44.64%	SI: 65.22%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	29	17	63.04%	36.96%	NO: 34.78%
CIUDADANOS	120	53	69.36%	30.64%	

9. Gráfico: Linchamiento Mediático y Derecho a la Información

Elaborado por Alicia De la Rosa



Pregunta 8:

¿Considera Ud. que el artículo 26 correspondiente al Linchamiento Mediático debería ser reformulado para su mejor aplicación y entendimiento general dentro de la ciudadanía?

SI....

NO....

Con esta pregunta cerrada, se puede llegar a conocer si las personas consideran oportuna una reformulación del Artículo 26 de la Ley de comunicación con la finalidad de garantizar el derecho a la información.

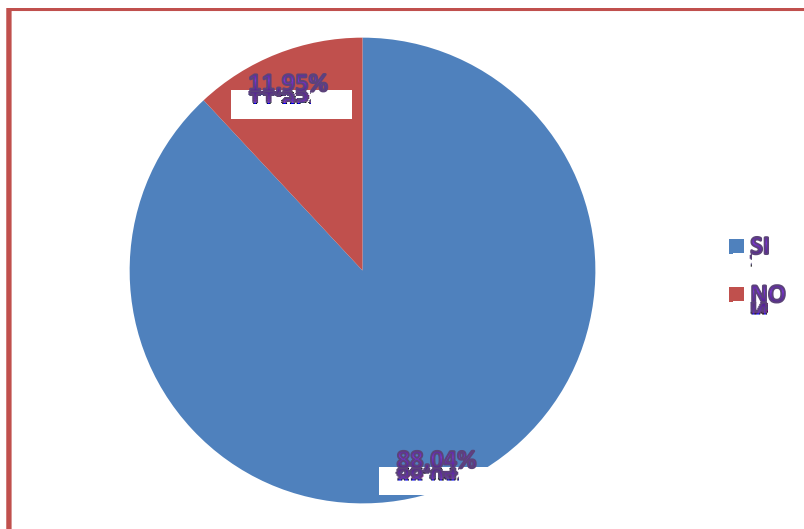
9. Tabla: Reformulación del Artículo 26

Elaborada por Alicia De la Rosa

MUESTRA	SI	NO	PORCENTAJE SI	PORCENTAJE NO	PORCENTAJE TOTAL
ESTUDIANTES DE DERECHO	50	6	89.28%	10.72%	SI: 88.04%
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN	43	3	93.03 %	6.97%	NO: 11.95%
CIUDADANOS	150	23	86.70%	13.30%	

10. Gráfico: Reformulación del Artículo 26

Elaborado por Alicia De la Rosa



5.3.2 ENTREVISTA

Entrevista realizada al Dr. Marco Villarruel, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador:

- 1. ¿Como profesor de la Facultad de Comunicación Social, cuál es su concepto de linchamiento mediático?**

Es una figura legal recientemente creada por ciertos legisladores con el fin de establecer cierto control sobre los medios de comunicación, es el caso de Sandra Correa, que fue una de las personas que impulsó esta figura en la Ley de Comunicación recientemente aprobada, con motivo del acoso que supuestamente recibió de los medios de comunicación mientras ejerció el cargo de Ministra de Educación durante la presidencia de Abdalá Bucaram.

- 2. ¿Cree Usted que el linchamiento mediático y la prohibición de Censura Previa son principios contrarios?**

No

- 3. ¿Cree que de alguna manera el linchamiento mediático es una forma de censura previa?**

No

- 4. ¿Considera Ud. que el linchamiento Mediático es una forma de censura?**

Si, de autocensura.

- 5. ¿Cree que dentro de la ciudadanía existe cierta confusión en cuanto a su aplicación?**

Si

6. ¿Cree que el linchamiento mediático afecta a las garantías de libertad de expresión de las personas?

De cierta manera si porque los medios de comunicación se sienten atemorizados de incurrir en el delito de Linchamiento Mediático y por eso prefieren callar y autocensurarse para evitar las consecuencias que pueda traer la difusión de cierta información.

Entrevista realizada a la Dra. Quispe, funcionaria dentro de la Superintendencia de Información y la Comunicación en el área de Asesoría Legal:

1. ¿Como asesora legal de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, cuál es su concepto de linchamiento mediático?

Es una figura legal recientemente creada con el fin de proteger la integridad de las personas que muchas veces se sienten atacadas o violentadas por los medios de comunicación, así se prohíbe la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

2. ¿Cree Usted que el linchamiento mediático y la prohibición de Censura Previa son principios contrarios?

No

3. ¿Cree que de alguna manera el linchamiento mediático es una forma de censura previa?

No

4. ¿Considera Ud. que el linchamiento Mediático es una forma de censura?

No

5. ¿Cree que dentro de la ciudadanía existe cierta confusión en cuanto a su aplicación?

Sí, porque al ser una figura nueva, existen aún bastantes dudas, sobre todo en lo relativo a las pruebas que se deben presentar para comprobar que ha existido una concertación de los medios de comunicación con el fin de desprestigiar a las personas; tal es el caso que de las diez denuncias presentadas ante esta Superintendencia, la mayoría han sido rechazadas y otras no han llegado a comprobarse justamente por el tema relativo a las pruebas.

6. ¿Cree que el linchamiento mediático afecta a las garantías de libertad de expresión de las personas?

Este tema es bastante subjetivo porque así como hay personas que dicen que se han sentido atacadas por los medios de comunicación, hay la otra parte que afirma que los medios de comunicación deben informar cuanto se encuentra en su haber para bien de la sociedad, entonces a mi parecer este artículo debería ser reformulado para establecer un equilibrio en el que se defiendan los derechos de la sociedad, de los medios de comunicación y de las personas de quienes se informa.

Entrevista realizada al Dr. Manuel Alvarado, experto en temas del derecho a la información:

1. ¿Como experto en temas del derecho a la información, cuál es su concepto de linchamiento mediático?

Linchamiento mediático es la conducta orientada a la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y pública reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública

2. ¿Cree Usted que el linchamiento mediático y la prohibición de Censura Previa son principios contrarios?

No

3. ¿Cree que de alguna manera el linchamiento mediático es una forma de censura previa?

No

4. ¿Considera Ud. que el linchamiento Mediático es una forma de censura?

Sí, porque es una manera de establecer presión psicológica sobre las personas que informan, con este tipo de represalias se establece una censura indirecta que afecta a la correcta difusión de información, que afecta no solo a los periodistas y comunicadores, también afecta a la ciudadanía que se entera de la verdad a medias, es autocensura.

5. ¿Cree que dentro de la ciudadanía existe cierta confusión en cuanto a su aplicación?

Sí, porque de acuerdo a mi opinión el Artículo 26 de la Ley de Comunicación no fue debidamente elaborado, empezando por la expresión “Linchamiento Mediático”, no es posible linchar metafóricamente a las personas, creo q se debió utilizar una expresión distinta como “acoso”, entonces al no ser conciso, las personas pueden malinterpretar este Artículo y utilizarlo de manera inadecuada o limitarse a expresar ciertas expresiones a través de los medios por temor a incurrir en Linchamiento Mediático.

6. ¿Cree que el linchamiento mediático afecta a las garantías de libertad de expresión de las personas?

Sí, porque al ser una forma de censura, afecta a las garantías de libertad de expresión, a pesar de que en Instrumentos Internacionales suscritos por el Ecuador se establece que la censura está prohibida.

5.4 CONCLUSIONES

La comunicación desde sus inicios marcó la diferencia entre el ser humano y el resto de seres vivientes, la comunicación para el ser humano es una necesidad, ese es el motivo por el que a través de cientos de años se ha puesto especial atención en el desarrollo de medios para expresar nuestros pensamientos, entonces los medios de comunicación han tenido un papel importante en hacer realidad que este derecho sea universal y que se efectivice dentro de nuestra sociedad.

El derecho a la información es una rama del derecho que regula las consecuencias y manifestaciones del actuar informativo, es un derecho fundamental, y de titularidad universal, tiene como finalidad que el individuo obtenga una información adecuada a sus necesidades de participación y conocimiento, información que debe cumplir con una condición ineludible: ser veraz; es decir al protegerlo se asegura el derecho del pueblo de estar informado sobre su gobierno y otros aspectos inherentes a la sociedad que la integran.

De la libertad de pensamiento, se derivan la manifestación de la libertad de conciencia y de la libertad política, de aquí deriva la libertad de expresión que a su vez deriva en el Derecho a la Información, la información es una función pública, es decir no es solamente un derecho público subjetivo pasa a ser también un deber de los periodistas, en la medida en que, informar sea el medio para satisfacer una necesidad social basada en la veracidad y la objetividad, dando lugar a que surja un derecho del público a la información, que ha legitimado la incorporación de la libertad de información en el derecho constitucional ecuatoriano.

Después del estudio realizado en este trabajo investigativo se concluye que el Linchamiento Mediático no es censura previa porque esta consiste en revisar el material que se pretende publicar antes de que éste pueda emitirse, por lo tanto el Artículo 18 relativo a la Prohibición de Censura Previa y el Artículo 26 que trata el Linchamiento Mediático no se encuentran en contradicción, no existe antinomia jurídica entre estos dos preceptos legales.

Si bien es cierto el Linchamiento Mediático no es censura previa, puede generar autocensura porque por el afán de evitar las consecuencias del Linchamiento Mediático las personas no expresarían su real opinión, renunciando de forma personal a la libertad de expresión garantizada en la Constitución y en Instrumentos Internacionales suscritos por nuestro país, si no se respeta la libertad de expresión no se pueden cumplir las demás libertades.

Como se reflejó en las encuestas y en las entrevistas realizadas en este trabajo investigativo, el Linchamiento Mediático es una figura legal que trae confusión y preocupación entre la ciudadanía, motivo por el cual se vulnera la estabilidad jurídica, además después de realizar el análisis lexicográfico de esta figura legal el uso de la expresión “linchamiento” en ese artículo de la Ley no es propio, sino metafórico y no es posible aplicar un sentido metafórico en la formulación de leyes porque puede dar lugar a interpretaciones diversas y confusiones.

El derecho a la información es vital dentro de una sociedad organizada como la nuestra, todos los sectores de la sociedad deben involucrarse, porque cuando se limita el acceso a informar o ser informado, o no se permite la libre expresión, no existe democracia, en conclusión se debe propender a mejorar la normativa relativa a este tema con el fin de llevar a cabo su fiel cumplimiento.

5.5 RECOMENDACIONES

Se recomienda a la ciudadanía manejar con sumo cuidado la figura del Linchamiento Mediático, porque si bien es cierto, puede ayudar a una persona a denunciar el acoso sufrido por años a través de los medios de comunicación, al mismo tiempo puede terminar limitando el derecho a la información.

Se recomienda realizar un análisis lexicográfico profundo con el fin de establecer un cambio de términos de “Linchamiento” que significa ejecución sin proceso legal por parte de una multitud, a un sospechoso o a un reo, por un término más adecuado como “Acoso” que es cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra; con la finalidad de evitar las metáforas que no deberían ser

utilizadas dentro de la ley, con la finalidad de impedir que se den confusiones para tener estabilidad legal y seguridad jurídica.

Se recomienda a la Superintendencia de Comunicación y de Información realizar conversatorios para explicar a la ciudadanía cuál es el funcionamiento del Linchamiento Mediático, casos en los que se aplica y sus sanciones, a fin de tener ciudadanos conscientes de sus derechos.

Se recomienda a las universidades incentivar a los alumnos a realizar investigaciones en el área del Derecho a la Información que es un área del derecho aún en formación, para aportar con conocimientos y teorías que establezcan una base sólida en esta materia naciente.

Se recomienda a los periodistas continuar con su labor de comunicar y difundir hechos, tomando siempre en cuenta que todos los derechos están limitados por el abuso del propio derecho, por eso los periodistas deben prepararse con un alto nivel ético y profesional.

Se recomienda a la ciudadanía estar siempre pendientes del acontecer nacional a fin de adquirir suficiente conocimiento para formar una opinión de los hechos participar activamente en el acontecer nacional y así formar una sociedad con una verdadera democracia.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 JUSTIFICACIÓN

Tomando en cuenta la importancia que tiene el Derecho a la Información, puesto que es un Derecho Fundamental reconocido en Instrumentos Internacionales suscritos por el Ecuador y en la Constitución Ecuatoriana, es determinante que la actual Ley de Comunicación sea entendida en su totalidad por los ciudadanos, esta comprensión debe incluir a su Artículo 26 que determina al Linchamiento Mediático, pues bien, después de haberse determinado sus elementos constitutivos, su formación lexicográfica y su posible relación con la censura previa, se llegó a determinar que el Linchamiento Mediático no se constituye como Censura Previa, sin embargo puede traer como resultado la Autocensura, justamente por el temor de difundir información por las consecuencias de esta figura legal, y este temor estaría fundado de acuerdo a la investigación realizada mediante encuestas y entrevistas por la poca comprensión y la gran confusión que trae en si la sola expresión de Linchamiento Mediático, por eso es vital reformular este artículo a fin de evitar caer en metáforas que no son posibles aplicar en una ley.

6.2 OBJETIVOS

6.2.1 OBJETIVO GENERAL

Dentro de la Ley de Comunicación en su Artículo 26, cambiar el término “Linchamiento Mediático” por Acoso Mediático” con el fin de que esta figura legal puede ser comprendida por toda la población para garantizar una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos puedan acceder a sus leyes con una visión clara de lo que estas representan para ejercer plenamente sus derechos.

6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Crear conciencia en la población acerca de la importancia de conocer el contenido de las leyes y su aplicación para hacer efectivos sus derechos.

Crear una campaña informativa entre la ciudadanía del Linchamiento Mediático acerca de como ayudaría a evitar la autocensura, el cambio de término, “Linchamiento” por el de “Acoso”.

Realizar la recolección de firmas necesarias para cumplir con los requerimientos legales y así poder reformar el Artículo 26 de la Ley de de Comunicación.

Acudir ante el Órgano Legislativo de nuestro país, es decir la Asamblea Nacional para presentar proyecto de reforma del Artículo 26 de la Ley de Comunicación, explicando los debidos motivos.

6.3 BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de un proyecto son las personas que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación del mismo. Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios: Directos e indirectos:

6.3.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

Todas aquellas personas que deseen denunciar el Linchamiento Mediático, pero con el suficiente conocimiento para hacerlo.

Todas aquellas personas que sean denunciadas por Linchamiento Mediático, porque van a saber cómo defenderse.

6.3.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Los ciudadanía en general del territorio Ecuatoriano, pues al poseer leyes claras se está garantizando el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución.

6.4 FACTIBILIDAD

Esta propuesta será factible en la medida en la que se logre informar a la ciudadanía sobre las ventajas de reformar este Artículo, además en el ámbito legal, existe una fundamentación clara, así:

TÍTULO IV PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER

Capítulo primero

Participación en democracia

Sección cuarta

Democracia directa

“**Art. 103.-** La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.”

Capítulo segundo

Función Legislativa

Sección primera

Asamblea Nacional

“**Art. 120.-** La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley:

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.”

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta consiste en presentar un proyecto de reforma del Artículo 26 de la Ley de Comunicación para cambiar el término “Linchamiento” por “Acoso”, porque al tomar la palabra Linchamiento, su definición es: Ejecutar a un criminal sin formación de proceso o tumultuariamente, en la Ley de Comunicación se la utiliza en sentido metafórico para describir la difusión de Información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública; mientras que acoso es un hostigamiento o molestia reiterada que encaja de manera real con esta figura; como se analizó en este trabajo investigativo si bien es cierto el Linchamiento Mediático no produce censura previa puede provocar autocensura por la confusión que representa utilizar un sentido metafórico dentro de un precepto legal.

6.6 FASES DEL PROYECTO

FASE 1:

Campaña de información a la ciudadanía en sectores estratégicos a lo largo de las principales ciudades del país para que las personas tengan conocimiento de la situación respecto del Linchamiento Mediático.

FASE 2:

Recolección de firmas hasta recolectar el cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

FASE 3:

Proponer la reforma del Artículo 26 ante la Función Legislativa, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.

6.7 IMPACTOS

Si se llegare a hacer realidad esta propuesta tendría grandes impactos en la sociedad ecuatoriana, en primer lugar porque los ciudadanos deberían tratar de participar en la formación de nuestro país a través de la presentación de proyectos, y si las personas son conscientes que un proyecto como este puede hacerse realidad se podría estar fomentando la participación social y democrática.

Otro impacto sería el incentivo a las personas a usar correctamente las leyes, porque solo con la comprensión correcta de leyes claras se podría alcanzar una sociedad más justa en la que las personas tengan suficiente conocimiento para hacer valer sus derechos.

Otro impacto de importancia sería que a través de la correcta aplicación de aquello que significa el Linchamiento Mediático, con el cambio de términos para su mejor comprensión se estaría evitando la Autocensura y por lo tanto estaríamos mejorando la garantía del derecho a la información dentro de la sociedad Ecuatoriana.

6.8 EVALUACIÓN

En caso de hacerse realidad esta propuesta se procurará seguir la trayectoria del proyecto a través de un sistema de monitoreo y evaluación basado en encuestas a la ciudadanía para emitir informes sobre estos avances y para evaluar el estado de las actividades, de esta manera se podrá vigilar el cumplimiento del Derecho a la Información e incluso de podrían presentar más proyectos para perfeccionar la Ley, este proceso es crítico para la comprensión continua de su evolución y para mejorar su eficacia.

ANEXOS

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A del 10 de diciembre de 1948. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".

***COMENTARIO:** La Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso que este documento fuera: “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios” todo esto con el fin de mantener informadas a todas las personas no importa el lugar, que existen derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados por los Gobiernos, Autoridades y ciudadanía en general.

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

***COMENTARIO:** en el preámbulo se reconoce la libertad de los seres humanos y que tiene como base los derechos fundamentales de los seres humanos.

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

***COMENTARIO:** en el preámbulo se establece una gran verdad para todos los seres humanos, la falta de información trae caos, ignorancia y manipulación, aquí está consagrado cuán vital es que las personas tengamos acceso a la información, que podamos expresarnos libremente y difundir información.

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

***COMENTARIO:** en este artículo se establece el Derecho a la Información con todas sus facultades: la Facultad de Recibir, de Investigar y de Difundir; al decir que todo individuo tiene este derecho, se afirma que es un derecho de titularidad universal; al afirmar “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones” significa que por motivo de las opiniones expresadas no pueden existir represalias, es por eso que debe revisarse con detenimiento el Linchamiento Mediático, justamente porque puede generar autocensura debido al temor a las consecuencias; al establecer “por cualquier medio de expresión” se determina que no importa el canal se podrá expresar la opinión y la información, puede ser por radio, televisión, internet,

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

***COMENTARIO:** Los Estados poseen la obligación de establecer mecanismos a fin de que se cumplan de manera cabal los derechos establecidos en este Instrumento Jurídico, en nuestro país se está intentando este tipo de acciones, pero aún nos falta mucho camino para alcanzar una sociedad democrática bien organizada y fundada en el cumplimiento de aquello que se ofrece.

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

Parte I

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Parte II

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
 - a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.

Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Parte III

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie estará sometido a servidumbre.

3.

a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia.

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad;

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que

aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2.

a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Artículo 11

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

Artículo 13

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
- b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
- c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
- d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el

interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Artículo 15

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Artículo 16

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

***COMENTARIO:** no puede existir sanción alguna por las opiniones emitidas por una persona por ningún medio de comunicación.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

***COMENTARIO:** este Pacto se reafirma en la Declaración de Derechos Humanos, brindándole la importancia que se merece el Derecho a la Información, se reafirma también en el medio utilizado, agregando también todo medio artístico.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

- a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
- b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

***COMENTARIO:** como todo derecho trae también sus respectivas responsabilidades, es por eso que la Difusión de Información y de Opiniones debe ser expresado por las personas tomando en cuenta su ética personal y respetando los derechos de las demás personas.

Artículo 20

- 1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
- 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Artículo 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22

- 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
- 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o

del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

Artículo 23

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

- a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
- c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Parte IV

Artículo 28

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.
2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.

Artículo 29

1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga.

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

Artículo 30

1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto.

2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de tres meses.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados Partes en el presente Pacto convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

Artículo 31

1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.
2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos.

Artículo 32

1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años. Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve miembros.
2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.

Artículo 33

1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.
2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

Artículo 34

1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte del presente Pacto.

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 35

Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.

Artículo 36

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud del presente Pacto.

Artículo 37

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.

2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean en su reglamento.

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Artículo 38

Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 39

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
 - a) Doce miembros constituirán el quórum;
 - b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 40

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
 - a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados;
 - b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.
2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.
4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.
5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.

Artículo 41

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto.

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado.

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo.

e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto.

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b que faciliten cualquier información pertinente.

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso obtendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras.

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de la notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada:

ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.

En cada asunto, se enviará el informe los Estados Partes interesados.

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 42

1.

a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). Los

buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, basada en el respeto al presente Pacto.

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 41.

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados.

5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.

7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes interesados:

a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen del asunto;

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

- c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b, el informe de la Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados;
- d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c, los Estados Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.

8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en el artículo 41.

9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas.

10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo.

Artículo 43

Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

Artículo 44

Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.

Artículo 45

El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades. Parte V

Artículo 46

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto.

Artículo 47

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

Parte VI

Artículo 48

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

Artículo 49

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 50

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 51

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

Artículo 52

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

- a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48;
- b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51.

Artículo 53

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.

3. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana

Bogotá, Colombia, 1948

La IX Conferencia Internacional Americana,

CONSIDERANDO:

Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritualmente y alcanzar la felicidad;

Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana;

Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución;

***COMENTARIO:** la importancia que tiene la protección de los Instrumentos Internacionales por cada Estado con el fin de preservarlos y protegerlos para bienestar de toda la comunidad; solo con la aplicación de estos principios se puede mejorar la sociedad en el Ecuador y en toda Latinoamérica.

Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias,

ACUERDA: adoptar la siguiente DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Preámbulo

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan.

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría.

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu.

Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.

CAPÍTULO PRIMERO – Derechos

Artículo 1 - Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 2 - Derecho de igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Artículo 3 - Derecho de libertad religiosa y de culto

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.

Artículo 4 - Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión.

***COMENTARIO:** en el ámbito Interamericano se declara el derecho a la información que comprende la facultad de investigar, difundir y recibir información; en la vida práctica aún se presenta este derecho como una utopía en su total realización porque aún existen países en los que la libertad de expresión se ve bastante limitada.

Artículo 5 - Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar

Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

Artículo 6 - Derecho a la constitución y a la protección de la familia

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

Artículo 7 - Derecho de protección a la maternidad y a la infancia

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.

Artículo 8 - Derecho de residencia y tránsito

Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Artículo 9 - Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

Artículo 10 - Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia.

Artículo 11 - Derecho a la preservación de la salud y al bienestar

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Artículo 12 - Derecho a la educación

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.

Artículo 13 - Derecho a los beneficios de la cultura

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

Artículo 14 - Derecho al trabajo y a una justa retribución

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

Artículo 15 - Derecho al descanso y a su aprovechamiento

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Artículo 16 - Derecho a la seguridad social

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

Artículo 17 - Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

Artículo 18 - Derecho de justicia

Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Artículo 19 - Derecho de nacionalidad

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.

Artículo 20 - Derecho de sufragio y de participación en el gobierno

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.

Artículo 21 - Derecho de reunión

Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

Artículo 22 - Derecho de asociación

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical de cualquier otro orden.

Artículo 23 - Derecho a la propiedad

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

Artículo 24 - Derecho de petición

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.

Artículo 25 - Derecho de protección contra la detención arbitraria

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.

Artículo 26 - Derecho a proceso regular

Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.

Artículo 27 - Derecho de asilo

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.

Artículo 28 - Alcance de los derechos del hombre

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.

***COMENTARIO:** otro principio universal es aquel que procura que los derechos de una persona no pueden sobrepasar los de las personas que lo rodean, si bien es cierto el Derecho a la Información es de titularidad universal también trae implícito que no se pueden sobrepasar los límites de los derechos de los demás.

CAPÍTULO SEGUNDO – Deberes

Artículo 29 - Deberes ante la sociedad

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una pueda formar y desenvolver integralmente su personalidad.

Artículo 30 - Deberes para con los hijos y los padres

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.

Artículo 31 - Deberes de instrucción

Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria.

Artículo 32 - Deber de sufragio

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.

Artículo 33 - Deber de obediencia a la Ley

Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.

Artículo 34 - Deber de servir a la comunidad y a la nación

Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.

Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional.

Artículo 35 - Deberes de asistencia y seguridad sociales

Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias.

Artículo 36 - Deber de pagar impuestos

Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos.

Artículo 37 - Deber de trabajo

Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.

Artículo 38 - Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero

Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

4. PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Los Estados Americanos Signatarios de la Presente Convención,
RECONOCIENDO Su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de la libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

RECONOCIENDO Que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que se ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;

***COMENTARIO:** los derechos fundamentales no corresponden a una persona en razón del territorio en el que han nacido, estos derechos traspasan cultura, religión y territorio.

CONSIDERANDO Que estos principios han sido consagrados en la carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

***COMENTARIO:** este Pacto se reafirma sobre los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

REITERANDO Que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

CONSIDERANDO Que la tercera conferencia internacional extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia carta de la organización y de normas más amplias sobre derechos

económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia.

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
CAPÍTULO PRIMERO
ENUMERACIÓN DE DEBERES

ARTÍCULO 1.- OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS.

1. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

***COMENTARIO:** Ecuador firmó el Pacto de San José el 22 de Noviembre de 1969 y lo ratificó el 12 de Agosto de 1977, por lo tanto tal y como dice este primer Artículo, el Ecuador está obligado a respetar los derechos establecidos en el presente Pacto.

2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.

ARTÍCULO 2.- DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

***COMENTARIO:** en este punto es necesario hacer mención a nuestra Constitución Ecuatoriana: “**Art. 425.-** El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”

CAPÍTULO II

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

ARTÍCULO 3.- DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

ARTÍCULO 4.- DERECHO A LA VIDA.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolida la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada por anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la penda de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad competente.

ARTÍCULO 5.- DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores pueden ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las personas privadas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

ARTÍCULO 6.- PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE.

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidos en todas sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluso.
3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
 - a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona reclusa en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los ejecuten no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
 - b) El servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la Ley establezca en lugar de aquel;
 - c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
 - d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas morales.

ARTÍCULO 7.- DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.

ARTÍCULO 8.- GARANTIAS JUDICIALES.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías:

- a) Derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, sino comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
- b) Comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;
- c) Concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
- d) Derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
- e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la Ley;
- f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
- g) Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable;
- h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculcado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

ARTÍCULO 9.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RETROACTIVIDAD.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la Ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

ARTÍCULO 10.- DERECHO DE INDEMNIZACIÓN.

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

ARTÍCULO 11.- PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques.

ARTÍCULO 12.- LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individualmente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la Ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

ARTÍCULO 13.- LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

***COMENTARIO:** se refiere al Derecho a la Información, que no podía faltar en un documento tan importante como el Pacto de San José, creado para asegurar a los pueblos una forma digna de vivir; reafirmando un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar:

- a) El respeto a los derecho o a la reputación de los demás, o
- b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o a la salud o la moral pública.

***COMENTARIO:** al igual que en nuestra Constitución y en nuestra reciente aprobada Ley de Comunicación se prohíbe la censura previa y se establece la responsabilidad ulterior, con el fin de asegurar la libertad de expresión y al mismo tiempo el respeto hacia los derechos de los demás.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la Ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la Ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

ARTICULO 14.- DERECHOS DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA.

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la Ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

ARTÍCULO 15.- DERECHO DE REUNIÓN.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la Ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.

ARTÍCULO 16.- LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.

1. Todas las personas tiene derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la Ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

CAPÍTULO III

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

ARTÍCULO 26.- DESARROLLO PROGRESIVO.

Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena actividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

CAPITULO IV

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

ARTÍCULO 27.- SUSPENSIÓN DE GARANTIAS.

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad); 23 (Derechos Políticos); ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

ARTÍCULO 28.- CLAUSULA FEDERAL.

Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

Cuando dos más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación y otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

ARTÍCULO 29.- NORMAS DE INTERPRETACIÓN.

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

- a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
- b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados;
- c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno; y
- d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención que se llamará "PACTO DE SAN JOSÉ COSTA RICA", en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

ENTRO EN VIGOR EL 18 DE JULIO DE 1978.

5. PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC

1.- No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de autoridades, es un derecho inalienable del pueblo.

***COMENTARIO:** se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto de San José, para establecer la titularidad universal de la libertad de expresión.

2.- Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.

***COMENTARIO:** se refiere al Derecho a la Información y las facultades que son inherentes a este.

3.- Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

4. - El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo de impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con oportunidad y sancionados con severidad.

5.- La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, laceración de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa.

***COMENTARIO:** la censura previa es uno de las peores formas de coartar la libertad de expresión, es por este motivo que los juristas, periodistas y expertos en el tema al escribir la Declaración de Chapultepec dicen que la Censura previa es un obstáculo al cumplimiento de este derecho.

6.- Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.

7.- Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.

8.- El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales deben ser estrictamente voluntarios.

9.- La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga.

***COMENTARIO:** si bien es cierto la libertad de expresión es un derecho, también es una obligación social con una responsabilidad con la objetividad de los hechos y acontecimientos, por este motivo, los periodistas deben siempre tomar en cuenta su ética y tratar de ser objetivos a la hora de difundir información.

10.- Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

6. LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISTA

No. 799-B

GENERAL GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

Presidente de la República,

Considerando:

Que debe protegerse al periodista profesional y estimular su superación intelectual y material;

Que los ecuatorianos tienen derecho a expresar su pensamiento sin otras restricciones que las que imponen la Ley, la moral y la seguridad nacional.

***COMENTARIO:** a pesar de que esta Ley fue expedida hace muchos años, expresa el sentir de los periodistas; apoya la libertad de expresión de los periodistas y de todos los ecuatorianos.

En uso de las facultades de que se halla investido,

E x p i d e:

LA LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISTA

Capítulo I

DEL PERIODISTA PROFESIONAL

Art. 1. - Es periodista profesional:

Quien hubiere obtenido el correspondiente título académico conferido por las universidades u otros establecimientos de educación superior de la República;

Quien hubiere obtenido ese título u otro equivalente en universidades o planteles de educación superior del extranjero, y lo revalidare legalmente en el Ecuador; y,

Quien obtuviere un certificado de profesionalización otorgado por el Ministerio de Educación Pública, en razón de haber ejercido la profesión con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, y de acuerdo con sus disposiciones.

***COMENTARIO:** tratándose del Derecho a la Información los periodistas serían los sujetos Cualificados, esto no quiere decir que en cualquier momento una persona que no sea profesional no pueda ejercer este derecho.

Capítulo II

DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS

Art. 2. – La Federación Nacional de Periodistas es una entidad de derecho privado, con personería jurídica, cuya sede será rotativa, de conformidad con lo dispuesto en el correspondiente Reglamento. La Federación se regirá por esta Ley, sus estatutos y reglamentos y por el Código de Ética Profesional.

Art. 3. – Son órganos de la Federación:

- a) La Asamblea Nacional;
- b) El Comité Ejecutivo Nacional;
- c) Los Colegios provinciales; y,
- d) Los Tribunales de Honor.

Art. 4. – La Asamblea Nacional es la máxima autoridad de la Federación y estará integrada por dos delegados nombrados por cada colegio, y un delegado más por cada veinte afiliados que excedieren del mínimo requerido para la constitución de un colegio.

Art. 5. – La Asamblea Nacional elegirá, cada dos años, al Presidente y a los Miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

El Presidente de la Asamblea Nacional será también del Comité Ejecutivo Nacional y el representante legal de la Federación, el que no podrá ser reelegido sino después de un período posterior al de su ejercicio.

Art. 6. – A la Asamblea Nacional corresponde dictar los estatutos y reglamentos de la Federación y sus reformas; y, al Comité Ejecutivo Nacional, el Código de Ética Profesional. Todos estos documentos serán puestos a conocimiento del Ministerio de Educación Pública para su aprobación legal.

Art. 7. – El Comité Ejecutivo Nacional seguirá la sede de la Federación Nacional de Periodistas. Sus integrantes no podrán ser reelegidos sino después de un período posterior al término de sus funciones.

Art. 8. – La organización y las demás funciones, atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional y de los demás órganos de la Federación, así como las normas administrativas, económicas, y cuantas más fueren del caso constarán en sus estatutos y reglamentos.

Art. 9. – En las provincias en las que residieren diez o más periodistas profesionales, se constituirá un colegio provincial que tendrá personería jurídica y domicilio en la capital de la provincia.

La personería jurídica de un colegio provincial se obtendrá por efecto de la aprobación, por el Ministerio de Educación Pública, de los estatutos de la Federación Nacional de Periodistas, los mismos que regirán para todos los colegios provinciales de la República.

Los periodistas profesionales que por su número no pudieren organizar un colegio provincial, se afiliarán al de la provincia cuya capital se encuentre más cercana a la ciudad de su residencia.

La afiliación se hará a un solo colegio provincial.

Art. 10. – Los colegios provinciales designarán, anualmente, a tres de sus miembros, para que formen el Tribunal de Honor, así como a los respectivos suplentes.

Las funciones en el Tribunal de Honor son de desempeño obligatorio, salvo las excepciones legales o los impedimentos debidamente comprobados.

Art. 11. – Corresponde a los Tribunales de Honor conocer en primera instancia las violaciones a esta Ley, los estatutos, reglamentos y al Código de Ética Profesional, así como todo aquello que fuere sometido a su decisión, de acuerdo a los estatutos.

Art. 12. – Los Tribunales de Honor, en consideración a la gravedad y circunstancias de la falta cometida, podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;

b) Multa; y,

c) Suspensión temporal del ejercicio profesional de tres meses a un año.

De la sanción determinada en el literal c), podrá apelarse para ante el Comité Ejecutivo Nacional, dentro de los ocho días posteriores a la respectiva notificación.

El Tribunal de Honor, cuando los actos cometidos por un periodista profesional fueren dolosos, podrá recomendar la suspensión definitiva de su ejercicio profesional y la consiguiente expulsión de la entidad, al colegio provincial al que pertenezca el periodista. El colegio, en conocimiento del particular y en asamblea extraordinaria, expedirá el fallo correspondiente, el mismo que será apelable para ante el Comité Ejecutivo Nacional, dentro del término señalado en el inciso anterior.

Las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional causarán ejecutoria, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

Art. 13. – Son fondos de la Federación Nacional:

- a) Las aportaciones de los colegios;
- b) Las herencias, legados y donaciones que reciba; y,
- c) Los bienes y valores que adquiera a cualquier título.

Art. 14. - Son fondos de los colegios:

- a) Las cuotas de sus afiliados;
- b) Las herencias, legados, donaciones y contribuciones que reciban; y,
- c) Los bienes y valores que adquieran a cualquier título.

Capítulo III

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Art. 15. – Para los fines de esta Ley se consideran cargos de desempeño exclusivo de los periodistas profesionales, los siguientes: jefes, subjefes, secretarios de redacción o de información, reporteros o cronistas, tituladores o correctores de estilo, reporteros gráficos, corresponsales, diagramadores e informadores; y, directores, jefes y reporteros de los programas de información radial, televisada y cinematográfica.

Se entiende por reportero gráfico al periodista profesional que ilustra las crónicas o reportajes con fotografías o dibujos de su propiedad.

Art. 16. – Los cargos de editor, director, editorialista, comentarista o redactor que representa la opinión del medio de comunicación colectiva, o el de redactor o columnista de secciones especializadas de ciencias, artes, letras, religión, técnica y, en general, de aquellas que representen la opinión del autor, no son de desempeño exclusivo de periodistas profesionales.

Art. 17. – Los propietarios, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes de los medios de comunicación colectiva, serán de nacionalidad ecuatoriana.

Art. 18. – El empleador privado dedicado total o parcialmente a la actividad periodística por cualquier medio, o que dentro de sus actividades mantuviere secciones o departamentos de información periodística, deberá ocupar a periodistas profesionales para los cargos determinados en esta Ley como de desempeño exclusivo de tales periodistas.

Art. 19. – Las remuneraciones de los periodistas a quienes se refieren los artículos anteriores podrán estipularse libremente entre el empleador y el trabajador, pero en ningún caso serán inferiores a las que señalare el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Art. 20. – En las entidades públicas y en las privadas con finalidad social o pública, los cargos de relacionadores públicos serán desempeñados por periodistas profesionales o especialistas en la materia.

Art. 21. – Las instituciones públicas, las privadas con finalidad social o pública y los empleadores privados, no están obligados a designar periodistas profesionales para el desempeño de funciones exclusivas, si en el lugar del trabajo no hubiere tales periodistas.

Art. 22. – Tampoco están obligados a contratar periodistas profesionales para el desempeño de funciones exclusivas, los empresarios o propietarios de medios de comunicación colectiva que cumplan dos de los siguientes requisitos: tener un activo fijo neto inferior a un millón de sucres; o que el tiraje promedio de cada edición sea menor de dos mil ejemplares, o tengan una potencia máxima instalada de 5 kilovatios o de 500 vatios, en el caso de las estaciones de radio y televisión, respectivamente; o contar con menos de 25 trabajadores en todas sus dependencias.

Art. 23. – La Dirección Nacional de Personal no inscribirá nombramiento alguno para cargos determinados como exclusivos, que no hubieren sido extendidos a favor de un periodista profesional.

Art. 24. – El Inspector del Trabajo que, previa denuncia escrita, comprobare que un empleador privado ha dado trabajo del calificado como de desempeño exclusivo del periodista profesional a quien no lo es, sancionará al empleador con una multa de tres mil a cinco mil sucres.

Art. 25. – Prohíbese el ejercicio de la profesión de periodista o el desempeño de cargos por personas que no cumplan con las disposiciones de esta Ley.

Art. 26. – Los periodistas profesionales que por cualquier motivo no estuvieren sujetos al régimen obligatorio de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, podrán afiliarse voluntariamente a éste, cumpliendo con las normas legales, estatutarias y reglamentarias pertinentes.

Art. 27. – Para que el periodista profesional pueda gozar de los beneficios de esta Ley, debe hallarse afiliado a uno de los colegios provinciales.

Art. 28. – Las disposiciones de esta Ley no impiden a las personas naturales o jurídicas dedicadas a transmitir información impresa, oral o televisada, contratar los servicios de agencias noticiosas nacionales o internacionales.

Art. 29. – No están sujetos a las obligaciones impuestas por esta Ley las personas naturales o jurídicas dedicadas, por cualquier medio de comunicación colectiva, a la transmisión de información científica, técnica, política o religiosa, siempre que su actividad no tuviere fines de lucro.

Art. 30. – Los periodistas profesionales, en cuanto a sus producciones intelectuales, estarán sujetos a la Ley de Derechos de Autor y demás disposiciones legales pertinentes.

Art. 31. – Los periodistas extranjeros que ingresaren al país para cumplir funciones profesionales temporales, deberán registrarse en la Secretaría Nacional de Información Pública, y no podrán dedicarse a tareas distintas de aquellas que comprendiere su misión específica. Estarán exentos del requisito de registro los periodistas extranjeros que acompañaren a delegaciones oficiales de Estados amigos, mientras dure el cumplimiento de las misiones.

Las autoridades de migración que tengan conocimiento del ingreso al país de los extranjeros a los que se refiere el inciso anterior, comunicarán inmediatamente a la Secretaría Nacional de Información Pública, la que determinará el plazo para el cumplimiento de su cometido.

Capítulo IV

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 32. – Las personas naturales o jurídicas que contrataren con el autor o con quien hubiere adquirido sus derechos, podrán difundir las producciones motivo del contrato ya sea para la imprenta, la radio, la televisión o cualquier otro medio lícito de comunicación colectiva, siempre que no hayan sido ordenadas por otras personas mediante el pago de remuneraciones o como el resultado de relaciones laborales.

Art. 33. – Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualesquiera de las formas de periodismo, y que por esta Ley se encontraren obligadas a contratar los servicios de periodistas profesionales, deberán aceptar en sus empresas para los fines de práctica a cursantes o egresados de las escuelas de Ciencias de la Información de las universidades o de otros planteles de educación superior, por el lapso mínimo de un año, de acuerdo al reglamento.

Art. 34. – Salvo los casos expresamente determinados en la Ley y en el Código Penal, ningún periodista profesional será obligado a revelar la fuente de información.

Esta garantía ampara también a las personas comprendidas en el Art. 16 de esta Ley.

Art. 35. – Los periodistas profesionales que en el ejercicio de su profesión incurrieren en delitos contrarios a la seguridad del Estado, quedarán incurso en las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Penal y demás leyes de la República y serán enjuiciados por las autoridades competentes.

Art. 36. – Ninguna entidad o corporación podrá usar los nombres de las entidades u organizaciones establecidas en esta Ley, sino con sujeción a sus disposiciones.

Art. 37. – Los medios de comunicación colectiva y en general las entidades para las que, de acuerdo con esta Ley, laboren periodistas profesionales, otorgarán a éstos un carné de identidad que será renovado anualmente.

De la concesión del carné, o de su retiro cuando terminaren sus relaciones laborales, se dará cuenta al Ministerio de Educación, a la Secretaría Nacional de Información Pública y al respectivo colegio provincial.

Art. 38. – Las cuotas y otras contribuciones dispuestas en los estatutos o por resoluciones legalmente adoptadas por los colegios provinciales, serán descontadas, obligatoriamente, de las remuneraciones que percibieren los periodistas profesionales afiliados, en las entidades de derecho público o de derecho privado.

Los Tesoreros, Colectores o Pagadores serán agentes de retención y enviarán los valores descontados a los respectivos colegios provinciales.

Art. 39. – Con las limitaciones establecidas en esta Ley, los periodistas profesionales tendrán libre acceso a las fuentes autorizadas de información, para lo cual todos los organismos del Estado, las entidades privadas con finalidad social o pública y las personas privadas, les prestarán la ayuda legal que fuere necesaria.

7. ESTATUTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE PERIODISTAS DEL ECUADOR

CAPÍTULO I DE SU CONSTITUCIÓN Y FINALIDADES

Artículo 1. - La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, creada en septiembre de 1975, es una entidad de derecho privado, con personería jurídica, y su sede será rotativa, de conformidad con el respectivo Reglamento.

Artículo 2. - La Federación se regirá por la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, estos Estatutos y sus Reglamentos. Su duración es indefinida. La representación legal de la Federación la ejerce el Presidente o quien haga sus veces, en su falta o ausencia.

Artículo 3. - Son finalidades de la Federación Nacional de Periodistas:

a) Velar por el respeto a la libertad de expresión y el derecho del pueblo a una información objetiva, veraz y oportuna;

***COMENTARIO:** la Federación Nacional de periodistas tiene como labor principal trabajar por la libertad de expresión, puesto que sus integrantes tienen como profesión la de informar, así mismo reconocen que la información que se otorgue debe ser objetiva, veraz y oportuna.

b) Velar por la aplicación de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, de su Estatuto y su Reglamento y del Código de Ética del Periodista;

c) Reunir en su seno a los periodistas profesionales del Ecuador;

d) Vigilar el cumplimiento del libre acceso a las fuentes de información;

e) Propender a la superación y capacitación de los periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, así como en su especialización;

- f) Exigir, tanto a las empresas periodísticas como a las entidades públicas y privadas, la contratación de periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, para los cargos de desempeño exclusivo que establece la Ley;
- g) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Escalafón, Sueldos y Salarios;
- h) Velar por la aplicación de la Ley de Derechos de Autor, en cuanto a los periodistas se refiere y como dueño de sus producciones;
- i) Establecer y mantener relaciones con entidades profesionales y especializadas del país y del exterior;
- j) Mantener órganos de información y opinión propios; y,
- k) Los demás que le fueren consignadas en estos Estatutos.

CAPÍTULO II

DE LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS

Artículo 4. - Son órganos de la Federación Nacional de Periodistas: la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, los Colegios Provinciales y los Tribunales de Honor.

PARÁGRAFO I

De la Asamblea Nacional

Artículo 5. - La Asamblea Nacional es la máxima autoridad de la Federación, se reunirá dentro de los tres primeros meses de cada año y estará integrada de acuerdo a lo que establece el Art. 4 de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista. Los delegados deberán ser necesariamente miembros del Colegio al que representen, estar aptos para ejercer sus derechos y tendrán derecho a un voto cada uno.

Artículo 6. - Son obligaciones y derechos de la Asamblea Nacional:

- a) Dictar las normas y decisiones que estimare convenientes para la mejor marcha de la Federación;
- b) Reunirse ordinariamente cada año para conocer y resolver sobre el informe de labores que deberá presentar a su consideración el Comité Ejecutivo Nacional, por medio de su Presidente;
- c) Elegir por votación, cada dos años, a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y designar la sede de la Federación;

- d) Remover a uno o más dignatarios del Comité Ejecutivo Nacional o resolver el inmediato y total cambio de éste, si a juicio de la Asamblea no hubiere cumplido con sus deberes o hubiese transgredido gravemente disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias;
- e) Reunirse extraordinariamente cada vez que fuere convocada por el Comité Ejecutivo Nacional o a petición de más del cincuenta por ciento de los Colegios Provinciales;
- f) Fijar las cuotas ordinarias que deberán pagar periódicamente los Colegios Provinciales a la Federación y las extraordinarias que fueren presentadas a su consideración por el Comité Ejecutivo Nacional en función del número de asociados;
- g) Pedir al Comité Ejecutivo Nacional estados de cuentas y efectuar auditorias cada vez que lo estime conveniente;
- h) Autorizar, con los dos tercios de votos de todos sus integrantes, la venta o hipoteca de los inmuebles de la Federación;
- i) Dictar el Estatuto y Reglamento de Elecciones de la Federación, la Ley de Ejercicio Profesional, así como sus reformas;
- j) Las demás que le fueren señaladas por la ley y el presente estatuto.

Artículo 7. - La Asamblea Nacional deberá ser convocada por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Periodistas por lo menos con treinta días de anticipación, por escrito, debiéndose reiterar dicha convocatoria a través de medios de comunicación colectiva ocho días antes de la fecha de la Asamblea.

Artículo 8. - La Asamblea podrá instalarse con el quórum reglamentario de por lo menos la mitad más uno de los delegados posibles, a la hora fijada por la convocatoria; pero, de no ser esto factible, podrá instalarse dos horas más tarde, con el número de delegados que concurrieren, siempre y cuando éstos representen, por lo menos, el treinta por ciento del total de delegados en capacidad de intervenir en la Asamblea.

Artículo 9. - La Asamblea Nacional estará presidida por el Presidente de la Federación o quien lo subroge, de acuerdo al Art. 2 del presente Estatuto.

PARÁGRAFO II

Del Comité Ejecutivo

Artículo 10. - El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por un Presidente, un primero, un segundo y un tercer Vicepresidentes; dos Secretarios, uno de Actas y otro de Comunicaciones; un Tesorero, un Síndico y ocho vocales principales, quienes tendrán derecho a voz y voto. Se elegirá igual número de vocales suplentes que reemplazarán a los principales en los casos previstos por los Estatutos y Reglamentos.

Artículo 11. - Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional durarán dos años en sus funciones, serán elegidos por la Asamblea Nacional y no podrán ser reelegidos sino después de un período posterior al de su ejercicio, se posesionarán y asumirán sus funciones ante la misma Asamblea Nacional.

Artículo 12. - Son obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo:

- a) Velar porque se cumpla la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, este Estatuto, el Reglamento de la Federación, la Ley de Escalafón, Sueldos y Salarios y las decisiones y resoluciones de la Asamblea Nacional;
- b) Presentar anualmente a la Asamblea Nacional el informe de labores;
- c) Velar porque se garanticen el ejercicio profesional de los periodistas, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, la estabilidad en sus cargos y todos los derechos conferidos por la ley;
- d) Respaldar las reivindicaciones clasistas;
- e) Propender a la organización y buena marcha de los Colegios Provinciales;
- f) Reorganizar los organismos de los Colegios Provinciales por inactividad o cuando hayan transgredido o incumplido las disposiciones legales estatutarias y/o reglamentarias de la Federación, de conformidad con el respectivo Reglamento y la Ley de Escalafón, Sueldos y Salarios;

- g) Llevar el registro actualizado de todos los periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador;
- h) Nombrar las comisiones que creyere convenientes para cumplimiento de sus propósitos;
- i) Conocer y resolver, en segunda y última instancia, los fallos que lleguen a su consideración, respecto a la suspensión temporal o definitiva o expulsión aprobada por los Colegios Provinciales. Las resoluciones del Comité Ejecutivo causarán ejecutoria;
- j) Efectuar las designaciones que no las hubiere hecho, a su debido tiempo, la Asamblea Nacional y llenar las vacantes que se produjeran dentro del ejercicio de su período, hasta que se reúna la próxima Asamblea;
- k) Convocar anualmente a la Asamblea Nacional y extraordinariamente cuando lo crea conveniente, de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto o a pedido de más del cincuenta por ciento de los Colegios Provinciales;
- l) Formular reformas al Estatuto, Reglamento de Elecciones, Código de Ética y a la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista para someterlas a consideración de la Asamblea Nacional;
- m) Autorizar al Presidente para la celebración de contratos con terceros, de conformidad con la cuantía establecida en el respectivo Reglamento;
- n) Velar o fijar cuotas para la oportuna recaudación y el correcto empleo de los fondos de la Federación;
- o) Fijar cuotas de carácter extraordinario de la Federación;
- p) Las demás que le fueren señaladas en la ley y el presente estatuto.

Artículo 13. - El Comité Ejecutivo deberá sesionar ordinariamente cada sesenta días y extraordinariamente cuantas veces sean necesarias, si así lo estimare su Presidente o lo solicitaren por lo menos cinco de sus miembros.

Artículo 14. - El Comité Ejecutivo podrá instalarse con el quórum reglamentario de la mitad más uno de sus miembros, a la hora fijada por la convocatoria; pero, de no ser esto factible, podrá instalarse una hora después, con la asistencia de por lo menos el Presidente o quien esté en sus funciones, uno de los Secretarios y por lo menos tres vocales principales.

Artículo 15. - La inasistencia consecutiva e injustificada a tres o más sesiones por parte de cualquiera de los miembros del Comité Ejecutivo determinará su reemplazo por el respectivo suplente o la designación del sustituto por parte del Comité Ejecutivo de aquellos que no lo tuvieron.

Artículo 16. - En caso de ausencia del Presidente, éste será reemplazado por los Vicepresidentes según su nominación; y, a falta de éstos, lo sustituirá el primer vocal y así sucesivamente.

PARÁGRAFO III

Del Presidente de la Federación y Miembros del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 17. - El Presidente es el representante legal de la Federación.

Artículo 18. - Son atribuciones y deberes del Presidente de la Federación:

- a) Presidir las sesiones de la Asamblea Nacional;
- b) Convocar y presidir las sesiones del Comité Ejecutivo;
- c) Legalizar juntamente con la firma del Secretario respectivo las actas y más documentos oficiales de la Federación;
- d) Vigilar la marcha económica de la Federación y autorizar con su firma, conjuntamente con la del Tesorero, las inversiones, de conformidad con lo que establecen los reglamentos;
- e) Preparar anualmente el informe de labores, el mismo que, previa aprobación del Comité Ejecutivo, pasará a conocimiento de la Asamblea Nacional; y,
- f) Las demás que le confieren la Ley, estos Estatutos, los Reglamentos, la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo.

Artículo 19. - Los Vicepresidentes cooperarán en las labores del Comité Ejecutivo y reemplazarán, en su orden, al Presidente, en los casos previstos en estos estatutos y en el respectivo reglamento.

Artículo 20. - El Secretario de Actas es responsable de la documentación oficial y el archivo de la Federación; preparará las actas de sesiones y las legalizará con su firma, conjuntamente con la del Presidente.

Artículo 21. - El Secretario de Comunicaciones tendrá la obligación de convocar a sesiones por disposición de la Presidencia y firmar, conjuntamente con el Presidente, los documentos oficiales de la Federación.

Artículo 22. - El Tesorero es personal y pecuniariamente responsable de los fondos y bienes que le fueren confiados y del cobro de las cuotas y asignaciones que fueren acordadas, de conformidad con disposiciones estatutarias y reglamentarias. Deberá, además, presentar estados de cuentas y detalles de gastos cuantas veces fuere requerido por la Presidencia o por el Comité Ejecutivo y preparar el informe anual de la actividad económica a su cargo para presentarlo, previo conocimiento del Comité Ejecutivo, a consideración de la Asamblea Nacional.

Artículo 23. - El Síndico es el asesor jurídico de la Federación.

Artículo 24. - Los miembros del Comité Ejecutivo son responsables de las resoluciones que se tomen, a menos que expresamente dejaren constancia escrita o en actas de su posición en contrario.

PARÁGRAFO IV

De los Colegios Provinciales

Artículo 25. - En las provincias en las que residieren diez o más periodistas profesionales se constituirá un Colegio Provincial, con personería jurídica y domicilio en la ciudad capital de provincia

Artículo 26. - La personería jurídica la obtendrá el Colegio Provincial en virtud de lo establecido en el Art. 9 de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista.

Artículo 27. - Los periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, que por su número no pudieren organizar un Colegio

Provincial, se afiliarán al de la provincia cuya capital se encuentre más cercana a la provincia de su residencia.

Artículo 28. - La afiliación se hará a un solo Colegio Provincial y es obligatoria para gozar de los beneficios de la Ley de Ejercicio Profesional.

En caso de cambio definitivo de domicilio podrán solicitar el traspaso de su registro al Colegio de Periodistas de su nueva residencia.

Artículo 29. - Son organismos de los Colegios Provinciales de Periodistas: la Asamblea General, el Directorio y el Tribunal de Honor.

Artículo 30. - La Asamblea General es la máxima autoridad del Colegio y estará integrada por todos sus miembros aptos para ejercer sus derechos.

Artículo 31. - La Asamblea General podrá instalarse con el quórum reglamentario, de por lo menos de la mitad más uno de sus miembros, a la hora fijada por la convocatoria; pero, de no ser esto posible, podrá instalarse una hora después con el número de miembros que concurrieren, siempre y cuando éstos representen por lo menos el treinta por ciento del total de miembros en capacidad de intervenir en la Asamblea.

Artículo 32. - Son atribuciones y deberes de la Asamblea General:

- a) Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto y el reglamento de la Federación, así como las disposiciones de la Asamblea Nacional y del Comité Ejecutivo;
- b) Reunirse ordinariamente en el mes de diciembre de cada año para conocer y resolver sobre el informe de labores y el plan de trabajo anual que deberá presentar a su consideración el Directorio del Colegio, por intermedio de su Presidente;
- c) Reunirse extraordinariamente cada vez que fuere convocada por su Presidente, el Directorio a iniciativa propia o a petición de más del cincuenta por ciento de sus miembros;
- d) Considerar y resolver las renunciaciones de los miembros del Directorio o llenar las vacantes que se hubieren producido en este organismo;

- e) Remover a uno o más dignatarios del Directorio o resolver el inmediato y total cambio de éste, si a juicio de la Asamblea no hubiere cumplido con sus deberes o hubiere transgredido gravemente disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias;
- f) Solicitar estados de cuentas y efectuar auditorias cada vez que lo estimare conveniente. Para el efecto, y en la sesión inaugural de cada administración, deberá designar de su seno una comisión fiscalizadora permanente, integrada por tres miembros – fuera del Directorio - la misma que será responsable de la buena marcha del Colegio;
- g) Discutir y aprobar ponencias e informes para ser presentados posteriormente a consideración del Comité Ejecutivo o de la Asamblea Nacional;
- h) Autorizar, por lo menos con los dos tercios de votos de todos sus miembros, la venta o hipoteca de propiedades del Colegio Provincial;
- i) Las demás que le fueren señaladas en los presentes Estatutos.

PARÁGRAFO V

Del Directorio del Colegio Provincial

Artículo 33. - El Directorio del Colegio de Periodistas estará integrado en cada provincia por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Síndico y de tres a siete vocales principales, según el respectivo Reglamento. Se elegirá igual número de vocales suplentes, quienes reemplazarán a los principales en los casos previstos en los Estatutos y Reglamentos.

Artículo 34. - Los miembros del Directorio deberán ser afiliados al correspondiente Colegio, durarán dos años en sus funciones, serán elegidos por votación directa y secreta y podrán ser reelegidos tal cual establecen el Estatuto y Reglamento de Elecciones.

Artículo 35. - Cada dos años, en la primera quincena del mes de diciembre, el Directorio convocará a elecciones de dignatarios, para lo cual designará un comité electoral que se encargará de preparar y realizar dicho acto, de conformidad con las disposiciones estatutarias y del Reglamento Electoral.

Artículo 36. - Quienes resultaren electos deberán asumir sus funciones el 5 de enero siguiente a las elecciones, en acto especial.

Artículo 37. - Son atribuciones y deberes del Directorio del Colegio Provincial:

a) Defender la libertad de expresión y el ejercicio profesional de sus afiliados;

***COMENTARIO:** todas las personas debemos estar inmiscuidas en la defensa de la libertad de expresión.

b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, Reglamento y la Ley de Escalafón, Sueldos y Salarios;

c) Presentar el informe anual de labores a la Asamblea General;

d) Llevar un registro de afiliaciones, nuevas inscripciones y transferencias de los periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, de su jurisdicción y comunicar de inmediato nuevos ingresos al Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad con la Ley;

e) Nombrar las comisiones que estimare convenientes para el mejor cumplimiento de sus fines y propósitos;

f) Propender a la capacitación y perfeccionamiento de sus miembros;

g) Designar y remover a sus representantes ante la Asamblea Nacional;

h) Organizar los actos de carácter cultural, científico, deportivo, social, etc., que estimare conveniente para fomentar la unidad entre los afiliados, su superación profesional y la de los miembros de la comunidad a la que pertenecen;

i) Propender a la estabilidad de los cargos de sus afiliados, así como a la aplicación de la Ley de Escalafón, Sueldos y Salarios, para lo cual los representarán en los organismos correspondientes del Ministerio de Trabajo;

j) Elaborar y dictar el presupuesto anual, así como fijar cuotas ordinarias y extraordinarias y autorizar egresos, según la cuantía señalada en el respectivo Reglamento;

k) Aceptar la renuncia de cualquiera de sus miembros y llamar al respectivo suplente, que durará en sus funciones hasta completar el período del principal. En caso de no existir suplente, designará uno;

l) Las demás que le confiere el presente Estatuto.

Artículo 38. - El Directorio deberá sesionar ordinariamente una vez cada treinta días y extraordinariamente cuantas veces sean necesarias si así lo estimare su Presidente o lo solicitaren por lo menos cinco de sus miembros, o por convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 39. - El Directorio podrá instalarse con el quórum reglamentario de la mitad más uno de sus miembros a la hora fijada por la convocatoria; pero, de no ser esto posible, podrá instalarse una hora más tarde con la asistencia de por lo menos el Presidente, o quien esté en sus funciones, el Secretario y un vocal principal, si el número de sus miembros del Directorio es de ocho o nueve; y de dos vocales, si el número es de diez a doce. En caso de ausencia del Secretario se nombrará uno Ad-hoc para la sesión.

Artículo 40. - La inasistencia consecutiva e injustificada a tres o más sesiones por parte de cualquiera de los miembros del Directorio determinará su reemplazo por el respectivo suplente o la designación por parte del Directorio de aquellos que no lo tengan.

Artículo 41. - En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente del Directorio, éste será reemplazado por el Vicepresidente, y, en su falta, por el primer vocal, a quien, a su vez, le sustituirá el segundo vocal principal, y así sucesivamente.

PARÁGRAFO VI

Del Presidente del Colegio y Miembros del Directorio Provincial

Artículo 42. - El Presidente del Colegio es su representante legal.

Artículo 43. - Son atribuciones y deberes del Presidente del Colegio:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General;

- b) Convocar y presidir las sesiones del Directorio del Colegio Provincial;
- c) Ejecutar las resoluciones del Directorio;
- d) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas y demás documentos del organismo seccional;
- e) Vigilar la marcha económica de la entidad a su cargo y autorizar con su firma, conjuntamente con la del Tesorero, las inversiones, según lo especifiquen los respectivos Reglamentos;
- f) Preparar anualmente el informe de labores, el mismo que previa aprobación del Directorio del Colegio, pasará a conocimiento de la Asamblea General; y,
- g) Las demás que le confieren la Ley, estos Estatutos, los Reglamentos, el Directorio del Colegio, la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

Artículo 44. - El Vicepresidente cooperará en las labores del Directorio y reemplazará al Presidente en los casos previstos en estos Estatutos y en el respectivo Reglamento.

Artículo 45. - El Secretario es el responsable de la documentación oficial, las comunicaciones y el archivo del Colegio; preparará las actas de las sesiones y las legalizará con su firma, conjuntamente con la del Presidente, así como convocará a sesiones por disposición de la Presidencia y firmará conjuntamente con el Presidente los documentos y comunicaciones oficiales del Colegio si fuere necesario.

Artículo 46. - El Tesorero es personal y pecuniariamente responsable de los fondos y bienes que le fueren confiados y del cobro de las cuotas y asignaciones que fueren acordadas, de conformidad con disposiciones estatutarias y reglamentarias. Deberá, además, presentar estados de cuentas y detalles de gastos cuantas veces fuere requerido por la Presidencia o por el Directorio y preparar el informe anual de la actividad económica a su cargo para presentarlo, previo conocimiento del Directorio, a consideración de la Asamblea General

Artículo 47. - Los miembros del Directorio del Colegio Provincial son responsables de las decisiones y resoluciones que se tomen, salvo el caso de que expresamente dejaren constancia escrita o en actas de su posición contraria a lo aprobado.

PARÁGRAFO V II

Del Tribunal de Honor

Artículo 48. - En Cada Colegio Provincial se constituirá un Tribunal de Honor, cuyos integrantes serán designados de acuerdo al Art. 10 de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista.

Artículo 49. - Los Tribunales de Honor estarán conformados por tres vocales principales. Se elegirá igual número de vocales suplentes. Los miembros del Tribunal de Honor no podrán formar parte del Directorio del Colegio Provincial.

Artículo 50. - Las funciones del Tribunal de Honor son de desempeño obligatorio, salvo las excepciones legales o los impedimentos debidamente comprobados, de conformidad con el Reglamento respectivo

Artículo 51. - Son funciones del Tribunal de Honor:

- a) Conocer en primera instancia las violaciones a la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, a los presentes Estatutos, Reglamentos y Código de Ética Profesional, así como todo lo que fuere sometido a su decisión, de conformidad con la Ley, los Estatutos y Reglamentos de la Federación;
- b) Imponer las siguientes sanciones, de conformidad con el respectivo Reglamento: a) amonestación escrita; b) multa; y, c) suspensión temporal del ejercicio profesional de tres meses a un año; y,
- c) Recomendar al Colegio Provincial, cuando los actos cometidos por un periodista profesional fueren dolosos, la suspensión definitiva de su ejercicio profesional.

CAPÍTULO III

DE LOS MIEMBROS

Artículo 52. - Son miembros de la Federación Nacional de Periodistas quienes cumplan lo establecido en el Art. 1 y se encuentren afiliados a un Colegio Provincial.

Artículo 53. - La inscripción en un Colegio Provincial es válida para todo el territorio nacional.

Artículo 54. - Son deberes y derechos de los periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador:

a) Respetar la Ley de Ejercicio Profesional, los presentes Estatutos, sus Reglamentos y las resoluciones que fueren adoptadas por los organismos directivos;

b) Acatar el Código de Ética;

c) Contribuir con una cuota de ingreso y otra mensual, fijadas por los respectivos organismos, de cuyo monto se reservará el treinta por ciento como aporte de cada Colegio Provincial para la Federación;

d) Participar en los beneficios que proporcionan la Federación Nacional de Periodistas o los Colegios Provinciales e intervenir en su orientación y destino, a través de sus organismos directivos;

e) Tener voz y voto, derecho a elegir y ser elegido para cualquier cargo directivo o representativo de la Federación Nacional de Periodistas y/o de los Colegios Provinciales.

Sólo los miembros que estuvieren al día en sus obligaciones estatutarias y reglamentarias podrán elegir y ser elegidos.

CAPÍTULO IV DE LOS FONDOS Y BIENES

Artículo 55. - Tanto el Comité Ejecutivo Nacional como los Colegios Provinciales tendrán sus propios fondos, rentas y bienes, sobre los que ejercerán patrimonio exclusivo.

Artículo 56. - Son fondos de la Federación:

a) Las aportaciones de los Colegios Provinciales;

b) Las herencias, legados, donaciones, contribuciones y subvenciones que aceptare;

c) Los bienes o valores que adquiriera a cualquier título por disposiciones legales.

Artículo 57. - Son fondos de los Colegios:

- a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que paguen los afiliados;
- b) Los que resultaren de actividades empresariales o de cualquier índole, que fueren financiados, auspiciados u organizados por el organismo seccional;
- c) Las herencias, legados, donaciones, contribuciones y subvenciones que aceptaren;
- d) Los bienes y valores que adquieran a cualquier título o por disposiciones legales.

Artículo 58. - Los tesoreros, colectores o pagadores de las entidades de derecho público o privado serán agentes de retención de las cuotas y otras contribuciones dispuestas por la Federación y los Colegios a sus afiliados, debiendo enviar dichos valores, descontados de la remuneración que percibieren, a los tesoreros de los respectivos organismos.

Artículo 59. - En el caso de donaciones, contribuciones, subvenciones, así como herencias, éstas deben ser aceptadas previamente por el Comité Ejecutivo Nacional o por el Directorio del Colegio, en su caso.

CAPÍTULO V

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Artículo 60. - Para ejercer la profesión, el periodista profesional, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, deberá obligatoriamente estar afiliado a un Colegio Provincial.

Artículo 61. - Todos los miembros de la Federación recibirán un carné y una insignia institucional, de carácter nacional, cuyo valor lo estipulará el Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 62. - Se considerarán cargos de desempeño exclusivo de los periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, los estipulados en el Art. 15 de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista.

Artículo 63. - En las instituciones públicas y en las privadas con finalidad social o pública, los cargos de relacionadores públicos serán desempeñados por periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador.

Artículo 64. - La Dirección Nacional de Personal tampoco inscribirá nombramiento alguno para los cargos determinados en el Art. 15 de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista que no hubiere sido extendido a favor de periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador.

Artículo 65. - Cada Colegio Provincial, a través de su Presidente, estará obligado a denunciar ante el Inspector de Trabajo, los Organismos de Control y el Poder Judicial, el no-acatamiento de lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, exigiendo se impongan las sanciones que contempla la Ley.

El Colegio deberá denunciar a la Federación Nacional de Periodistas los casos en que el Inspector del Trabajo no hubiere cumplido con la Ley.

Artículo 66. - Las agencias noticiosas, nacionales o extranjeras, que operan en el país están obligadas a contratar exclusivamente a periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador, para las labores determinadas en el Art. 15 de la Ley.

Artículo 67. - Para los efectos de la aplicación del Art. 37 de la Ley, cada Colegio Provincial llevará el correspondiente registro de los carnés otorgados por los medios de comunicación colectiva o de las entidades en que, de acuerdo a la Ley de Ejercicio Profesional, laboren periodistas profesionales, Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social e Información del Ecuador.

Los estatutos originales de la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE, fueron aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial No. 7833, de 7 de agosto de 1979, publicado en el Registro Oficial No. 3, de 15 de agosto de 1979.

Las reformas a los estatutos originales de la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE, fueron aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial No. 1431, de 15 de noviembre de 2001.

8. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL PERIODISTA

***COMENTARIO:** todo profesional debe contar con un código de ética, porque no son suficientes los conocimientos en un Mundo en el que día a día nuestra voluntad se pone a prueba y en el que solo las personas con suficiente calidad moral alcanzan el éxito.

La libertad de expresión del pensamiento es derecho fundamental del hombre y piedra angular de todas las libertades consagradas en la Constitución Política de la República, sancionada por el voto popular el 15 de enero de 1978 y es, por tanto, una necesidad vital del pueblo ecuatoriano, un derecho irrenunciable del periodista profesional y una obligación ineludible de los medios de comunicación social y del Estado.

***COMENTARIO:** como se analizó en el capítulo III, al promulgarse la Constitución de 1978 se profundizó en los temas de libertad de expresión, es por eso que en este preámbulo se la menciona.

La libertad de expresión se plasma esencialmente en la libertad de información y de opinión, a través de los medios de la comunicación social. Este derecho es, en consecuencia, inalienable, por lo que le corresponde al periodista profesional su plena aplicación práctica, ya para satisfacer el anhelo comunitario de una información oportuna, veraz y objetiva, ya para contribuir a la correcta interpretación y orientación de los problemas en el complejo mundo en que vivimos, ya para ofrecer distracción constructiva y útil; ya, en fin, para reforzar e impulsar los programas y planes de desarrollo social y para luchar por la soberanía, independencia y dignidad nacionales.

***COMENTARIO:** como se explicó en el Capítulo II la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad de información son esencialmente lo mismo, solo que la terminología obedece a una etapa determinada de la historia. En este preámbulo se determina que el periodista está cumpliendo un derecho fundamental e inalienable, también cumple un papel fundamental dentro de la sociedad, un papel de informar de manera veraz y ética.

El periodista profesional debe cumplir en este contexto un rol esencial. Está obligado a ser leal y consecuente con los principios y las aspiraciones de su pueblo, de su comunidad y de su familia. No es ni puede ser neutral, porque en la sociedad humana es imposible esa neutralidad, como no sea para

favorecer directa o indirectamente, intereses antipopulares. Es y debe ser esencialmente objetivo, de manera especial para interpretar los acontecimientos de la vida diaria y darle a la información la categoría, el volumen, la importancia y la interpretación que realmente merece.

***COMENTARIO:** en esta parte del preámbulo se llama a los periodistas a ir más allá del deber, a no quedarse callados aún cuando las circunstancias sean complicadas, y considero que todas las personas deberíamos actuar de la misma manera, no quedarnos callados jamás y hacer uso de los derechos que nos corresponden.

La delicada tarea que cumple el periodista profesional le obliga también a ser altamente responsable con los principios universales de la convivencia pacífica entre los países del mundo y el respeto mutuo con los fundamentos sociales de su propio pueblo y sus legítimas aspiraciones y con las libertades y derechos de la persona humana. No puede, en consecuencia, prestarse para alentar acciones o planes que atenten contra estos principios fundamentales. Deberá ser ajeno al sensacionalismo irresponsable, a la mercantilización de la noticia o cualquier tipo de manipuleo de la información o de la opinión que falsee, tergiverse, niegue o limite la verdad.

***COMENTARIO:** el periodista debe apegarse siempre a la verdad y ser responsable, de hecho todas las personas debemos ser responsables con nuestra opinión y con aquello que difundimos porque nuestros derechos acaban donde comienzan los derechos de los demás.

Personalmente el periodista profesional, así como tiene derecho a garantías y facilidades para el mejor cumplimiento de su función, está obligado a respetar los derechos de los demás y la integridad moral de las personas, especialmente su vida privada, y a guardar una conducta ejemplar que avalice precisamente su autoridad para informar, orientar, denunciar o exigir a través de los medios de comunicación social. Vista esta Declaración de Principios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador dicta el siguiente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL para normar la conducta profesional de los periodistas ecuatorianos:

CAPÍTULO I

EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD

Artículo 1. - El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una información objetiva, veraz y oportuna.

***COMENTARIO:** solo a través de la información veraz y objetiva se puede decir que se está cumpliendo con la libertad de expresión.

Artículo 2. - El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores fundamentales de su comunidad.

Artículo 3. - El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del país, la educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y los pueblos.

Artículo 4. - La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones.

***COMENTARIO:** parte de los principios básicos del Derecho a la Información.

Artículo 5. - El periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o humillar la dignidad humana.

Artículo 6. - El periodista está obligado a respetar la convivencia humana. Le está prohibido preconizar la lucha racial o religiosa. Defenderá la supervivencia de los grupos étnicos y sus derechos a la integración y al desarrollo del país.

Artículo 7. - El periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente de los marginados de la comunicación social.

***COMENTARIOS:** todos los ciudadanos estamos obligados a defender el derecho y el ejercicio de la libertad de expresión.

Artículo 8. - El periodista está obligado a luchar por la comunidad en la que se desenvuelve y defender el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

Artículo 9. - El periodista debe oponerse y denunciar las campañas promocionales y publicitarias que atenten contra los valores humanos y sociales de la comunidad.

Artículo 10. - El periodista tiene la obligación de utilizar correctamente los idiomas oficiales.

CAPÍTULO II

EL PERIODISTA Y EL ESTADO

Artículo 11. - El periodista está obligado a defender la soberanía y la integridad territorial, sus símbolos patrios, su historia, su cultura y sus tradiciones.

Artículo 12. - El periodista exigirá del Estado una política nacional de comunicación que impida el monopolio de la información.

Artículo 13. - El periodista demandará del Estado la defensa de los derechos de los trabajadores, su capacitación, salarios justos, seguridad social y estabilidad.

Artículo 14. - El periodista exigirá del Estado la plena vigencia de la libertad de expresión, el libre acceso a las fuentes de información y el derecho del pueblo a una información objetiva, veraz y oportuna.

Artículo 15. - El periodista debe luchar para que el Estado garantice la plena vigencia de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista.

Artículo 16. - El periodista debe rechazar cualquier presión del Estado que pretenda obligarle a adoptar determinada posición o identidad política, religiosa o ideológica.

Artículo 17. - El periodista debe impulsar y promover los programas del Estado destinados a fomentar el desarrollo integral del país.

Artículo 18. - El periodista luchará por la plena vigencia de los derechos humanos y se manifestará contrario a los regímenes fascistas o que no respeten la dignidad humana.

CAPÍTULO III

EL PERIODISTA Y LA FENAPE

Artículo 19. - El periodista debe cumplir y hacer cumplir este Código, la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, los Estatutos, Reglamentos, así como las resoluciones de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE.

Artículo 20. - El periodista será leal militante de la FENAPE y defensor de los principios profesionales.

Artículo 21. - El periodista está obligado a fomentar la fraternidad y el respeto mutuo entre colegas.

Artículo 22. - El periodista está obligado a defender a sus colegas que, en razón de su ejercicio profesional o creencias políticas, ideológicas o religiosas, sufrieran persecución, cárcel, tortura, exilio o cualquier otro acto represivo del sector público o privado que atente contra su libertad y dignidad.

Artículo 23. - Al periodista le está prohibido promover o participar en actos contrarios a la Federación Nacional de Periodistas.

CAPÍTULO IV

EL PERIODISTA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL

Artículo 24. - El periodista guardará estricto secreto en el ejercicio de su profesión respecto de las fuentes de información.

Artículo 25. - El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes que garanticen una información veraz.

Artículo 26. - Le está prohibido al periodista recibir bienes o valores destinados a interferir o tergiversar su labor informativa y de opinión.

Artículo 27. - Le está prohibido al periodista utilizar prácticas desleales para desplazar a un colega y ocupar su puesto.

Artículo 28. - Al periodista le está prohibido aceptar remuneraciones inferiores al mínimo establecido por la ley.

Artículo 29. - El periodista denunciará ante la FENAPE las presiones que las fuentes ejerzan sobre el patrono para removerlo injustificadamente o impedir el ejercicio de su profesión.

Artículo 30. - Le está prohibido al periodista comunicar de mala fe informaciones que atenten contra la dignidad, el honor o prestigio de personas, instituciones y agrupaciones.

***COMENTARIOS:** en relación con el Linchamiento Mediático, esta figura fue creada con el fin de denunciar a aquellas personas que en concertación con otros difunda información con el fin de desprestigiar a una persona.

Artículo 31. - El periodista está obligado a rectificar las informaciones probadas como falsas. Los rumores y las noticias no confirmadas deben identificarse y tratarse como tales.

Artículo 32. - Al periodista le está prohibido utilizar como suyo material informativo en cuya elaboración no haya participado, no prestar su nombre para amparar publicaciones o programas donde no tenga participación efectiva.

Artículo 33. - El periodista debe informar a su Colegio Provincial los casos de ejercicio ilegal de la profesión, a fin de que el Colegio denuncie el incumplimiento de la ley a las autoridades correspondientes.

Artículo 34. - Los periodistas que tienen funciones directivas no pueden ejercer acciones que perjudiquen a sus colegas subordinados por discrepancias políticas, ideológicas, religiosas, enemistad personal o consignas empresariales injustificadas.

Artículo 35. - Al periodista le está prohibido usar el anonimato, las publicaciones apócrifas y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos.

CAPÍTULO V

EL PERIODISTA Y LA EMPRESA

Artículo 36. - El periodista está obligado a velar porque se cumplan las disposiciones de la legislación laboral.

Artículo 37. - El periodista exigirá a la empresa respeto para sus creencias políticas, ideológicas y religiosas.

Artículo 38. - El periodista exigirá a la empresa respeto a su producción, cuyo sentido no podrá ser cambiado sin su consentimiento.

Artículo 39. - El periodista debe asumir conjuntamente con la empresa la responsabilidad de toda información elaborada por él y difundida sin que ésta haya sufrido alteración ajena a su voluntad.

Artículo 40. - El periodista debe propender a que se le reconozca el derecho a intervenir en la elaboración y ejecución de la política editorial e informativa del medio en que trabaja.

Artículo 41. - El periodista debe exigir en sus relaciones con la empresa un tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e importancia que tiene su profesión en la sociedad.

CAPÍTULO VI

EL PERIODISTA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 42. - El periodista está obligado a cumplir las decisiones y acuerdos que la institución tome estatutariamente en sus relaciones internacionales.

Artículo 43. - El periodista debe luchar por la libertad de los pueblos, contra el colonialismo, el neocolonialismo y toda forma de discriminación ideológica, religiosa y racista.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 44. - El presente CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL fue aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, en la ciudad de Cuenca, el 17 de noviembre de 1978. Publicado en el Registro Oficial No. 120, de 4 de febrero de 1980.

BIBLIOGRAFÍA

1. AGUIRRE NIETO, Marisa. (2003). El derecho de la información como ciencia. Barcelona-España. Ariel Comunicación.
2. ALVAREZ FERRETJANS, Daniel. (1986). Crónica del Periodismo en Uruguay. Montevideo-Uruguay. Fundación Hanns-Seidel.
3. ÁLVAREZ, Jesús. (1992). Historia de la Prensa Hispanoamericana. Madrid-España. Editorial Mapfre S.A.
4. AUZA, Néstor Tomás. (1988). Periodismo y feminismo en la Argentina 1830-1930. Buenos Aires-Argentina. Emecé Editores.
5. BARLETTA, Villarán. (2011). Breve historia de Simón Bolívar. Madrid-España. Ediciones Nowtilus.
6. BOBBIO, Norberto. (1996) Teoría General del Derecho. Madrid-España. Editorial Debate.
7. BONET, Jordi. (1994). El derecho a la información en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Barcelona-España. PPU.
8. COOPER, Kent. (1959). Kent Cooper and the Associated Press: an autobiography. E.U. Random House
9. DE LUSARRETA, Pilar. (1956). Reseña del Periodismo Argentino. Buenos Aires-Argentina. Editorial ARM.
10. DESANTES, José María. (1977). Fundamentos del Derecho a la Información. Madrid-España. Confederación Española de Cajas de Ahorro.
11. ERAZO, Luis. (1980). Manual Práctico de Radiodifusión. Quito-Ecuador. Imprenta del Ilustre Municipio de Quito.
12. ESCOBAR, Luis. (2000). Principios del derecho de la Información. Madrid-España. Dykinson.
13. FERRAJOLI, Luigi. (2001). Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid-España. Trotta.
14. FERNANDEZ DE CASTRO, Juan. (1941). Periodismo y periodistas en Hispanoamérica. México DF-México. El Diario.
15. FERNÁNDEZ, Manuel. (1977). Introducción al Derecho a la Información. Barcelona-España. ATE.

16. GARGUREVICH, Juan. (1987). Prensa, Radio y Tv. Historia Crítica. Lima-Perú. Editorial Horizonte.
17. GARGUREVICH, Juan. (1991). Historia de la Prensa Peruana 1594-1990. Lima-Perú. Ediciones La Voz.
18. GONZÁLEZ ALCÁNTARA, Juan Luis. (2003). Transparencia y acceso a la información judicial, Reforma Judicial, Revista Mexicana de Justicia, UNAM. México DF-México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
19. SANTA CRUZ Y ESPEJO, Eugenio. Primicias de la Cultura de Quito.
20. SAN FELIX, Álvaro. (1991). Radiodifusión en la Mitad del Mundo. Quito-Ecuador. Editora Nacionalista.
21. FOURNIER, Celinda. (1995). Comunicación Verbal. México-México. Thompson Editoriales.
22. GARCÍA, Sebastián. (1975). La Imprenta en la historia de Venezuela. Caracas-Venezuela. Monte Ávila Editores.
23. GARZA, R. (2008). La radio del siglo XXI. México DF-México. Libros para todos S.A.
24. GIL, Luis. (2007). Censura en el Mundo Antiguo. Madrid-España. Alianza Editorial S.A.
25. HENRÍQUEZ UREÑA, Catalina. (1977). En torno a Martí, el periodista. La Habana-Cuba. Anuario del centro de Estudios Martianos.
26. KAPLAN, Marcos. (1969). La Formación del Estado en América Latina. Buenos Aires-Argentina. Editores Argentina S.A.
27. LÓPEZ, Sergio. (2000). El Derecho a la Información como derecho fundamental. México DF-México. UNAM.
28. LYNCH, John. (1976). Las revoluciones Hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona-España. Grupo Planeta.
29. MANTILLA CISNEROS, Kléber. (2013) ¿Linchamiento Mediático? Artículo dentro de la Revista Espejo. Quito-Ecuador.
30. MCQUAIL, Denis. (1983). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona-España. Paidós Comunicación.
31. MIQUEL Y VERGES, José María. (1941). La Independencia Mexicana y la prensa insurgente. México DF-México. Grupo Anaya.
32. MORAGAS, S. (1985). Sociología de la Comunicación, Barcelona- España. Editorial Educa S.A.
33. NOVOA, Andrés. (1980). Conceptos Básicos sobre Comunicación. Turrialba-Costa Rica. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, Unidad de Comunicación e Información.

34. OCAMPO, Eduardo. (1978). Historia del Periodismo Boliviano. La Paz-Bolivia. Librería Editorial Juventud.
35. OCHOA OLVERA, Salvador. (1998) Derecho de prensa. Libertad de expresión. Libertad de imprenta. Derecho a la información, México DF-México. Montealto.
36. OTERO, Gustavo. (1936). Historia del Periodismo en Colombia. Bogotá-Colombia. Planeta.
37. RODRIGUEZ, Ángel. (2012) Manual de Derecho Constitucional. Barcelona-España. Tecnos
38. SÁNCHEZ, Remedio. (1974). El Derecho a la Información, Valencia-España, Cosmos.
39. SÁNCHEZ, Remedio. (2003). El Derecho de la Información como ordenación. Barcelona-España, Ariel Comunicación.
40. SANTACRUZ, Eduardo. (1988). Análisis Histórico del Periodismo Chileno. Santiago de Chile-Chile. Nuestra América Ediciones.
41. SEOANE, María Cruz. (1977). Oratoria y Periodismo en la España del siglo XIX. Madrid-España. Editorial EduSa.
42. VARELA, Mirta. (2005). La Televisión Criolla: Desde Sus Inicios Hasta la Llegada Del Hombre a la Luna, 1951-1969. Madrid-España. Edhasa.
43. VILLALOBOS, Sergio. (1974). Historia de Chile. Santiago de Chile-Chile. Editorial Universitaria S.A.
44. VILLANUEVA, Ernesto. (2003). Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica. Estudio introductorio y compilación. México. UNAM.

BIBLIOGRAFÍA VIRTUAL

1. Apoyo para Acosta. (1995). En El Hoy. Consultado el día 20 de marzo de 2014 de la World Wide Web: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/apoyo-para-acosta-21154.html>
2. AVILÉS PINO, Efrén. (2012). Periodismo. En Enciclopedia del Ecuador. Consultado el día 5 de marzo de 2014 de la World Wide Web: <http://www.encyclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1730&>
3. AYALA MORA, Enrique. (2011). El Quiteño Libre. En El Comercio. [Columnistas]. Consultado el día 5 de enero de 2014 de la World Wide Web: http://www.elcomercio.com.ec/columnistas/quitenolibre_0_421157960.html
4. CIDH urge a Ecuador a cambiar ley comunicación para no "intimidar" a medios. En Ecuavisa. Consultado el día 20 de marzo de 2014 de la World Wide Web: <http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/34248-cidh-urge-ecuador-cambiar-ley-comunicacion-para-no-intimidar>
5. Censura Previa. (2011) En OEA Relatoría Especial para la libertad de expresión. Consultado el día 24 de febrero del 2014 de la World Wide Web: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=152&lID=2>
6. CHECA MONTÚFAR, Fernando. (2012) La Libertad de Expresión. En CIESPAL. Consultado el día 3 de febrero de 2014 de la World Wide Web: http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&view=article&id=860:la-libertad-de-expresion&catid=28:institucional&Itemid=41
7. Condenan a Periodista de la Gaceta a 60 días de prisión. (2007). En El Diario Manabita de Libre Pensamiento. Consultado del día 20 de marzo del 2014 de la World Wide Web: <http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/30621-condenan-a-periodista-de-la-gaceta-a-60-dias-de-prision/>
8. Constituciones del Ecuador 1830-2008. (2014). Biblioteca Alejandro Segovia G. En Escuela Politécnica del Ejército Biblioteca Virtual. Consultado el día 25 de marzo de 2014 de la World Wide Web: http://biblioteca.espe.edu.ec/index.cgi?wid_seccion=35
9. La Historia de la Comunicación Humana. En Elementos de la Comunicación. [Artículos]. Consultado el día 28 de diciembre de 2013 de la World Wide Web: <http://www.lacomunicacionhumana.com/articulos/historia-de-la-comunicacion-humana.htm>

10. La Radio en Ecuador Reseña Histórica. (2010). En Enlace Comunicacional. [Artículos]. Consultado el día 15 de diciembre de 2013 de la World Wide Web: <http://enlacecomunicacional.herobo.com/wordpress/?tag=la-radio-en-ecuador-resena-historica>
11. La Televisión en Ecuador. En Gestión de Comunicación: investigación aplicada, extensión y servicios. Consultado el día 3 de enero de 2014 de la World Wide Web: <http://abelsuing.wordpress.com/2009/08/24/la-television-en-ecuador/>
12. Los pájaros contra las escopetas. (1996). En El Hoy. Consultado el día 24 de febrero de 2014 de la World Wide Web: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-pajaros-contra-las-escopetas-69751.html>
13. MEDINA, Luis, (2013). Correa crea el delito de “linchamiento mediático” para controlar a la prensa. En El País Internacional. Consultado el día 20 de marzo de 2014 de la World Wide Web: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/14/actualidad/1371232204_252270.html
14. MENA ERAZO, Paúl. (2013). Ecuador: ¿qué es el "linchamiento mediático" y por qué se castiga? En BBC Mundo. Consultado el día 20 de marzo de 2014 de la World Wide Web: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130614_ecuador_aproaba_ley_comunicacion_msdshtml
15. ORTIZ ARELLANO, Carlos. (2011). Los inicios de la Radiodifusión en Ecuador/Radio “El Prado”. En Casa de la Cultura Ecuatoriana. Consultado el día 27 de diciembre del 2013 de la World Wide Web: <http://www.culturaenecuador.org/artes/personajes-de-chimborazo/193-los-inicios-de-la-radiodifusion-en-ecuador-radio-el-prado.html>
16. POMA, Fredy. (2008). La Historia de la Televisión en el Ecuador. En Televisión Satelital News. Consultado el día 3 de enero del 2014 de la World Wide Web: <http://megadigitalnews24.blogspot.com/2008/11/la-historia-de-la-television-en-ecuador.html>
17. Rafael Correa cree que se debe imponer sanciones al ‘linchamiento mediático’. (2013). En El Universo. Consultado el día 20 de marzo de 2014 de la World Wide Web: <http://www.eluniverso.com/2013/04/27/1/1355/rafael-pide-investigar-uso-espacios-ciertas-compras-bnf.html>
18. Real Academia Española (2014). Diccionario de la Lengua Española. Consultado el día 3 de abril de 2014 de la World Wide Web: <http://lema.rae.es/drae/?val=concertaci%C3%B3n>
19. RFS pide precisar norma linchamiento mediático en Ecuador. (2013). El Tiempo. Consultado el día 20 de marzo del 2014 de la World Wide Web: <http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/132351-rfs-pide-precisar-norma-linchamiento-media-tico-en-ecuador/>

20. RODRÍGUEZ, Carlos. (2010). Historia del Internet en Ecuador. DistroGeek Noticias tecnología y más. Consultado el día 1 de enero de 2014 de la World Wide Web: <http://www.distrogeek.com/2010/12/historia-del-internet-en-ecuador/>
21. VILLARUEL, Marco. (2011). Gabriel García Moreno Ex-Presidente Del Ecuador, también Periodista. En La Comunicación y el Periodismo en la República 1830-1895 Universidad Central del Ecuador FACSO. Consultado el día 30 de enero de 2014 de la World Wide Web: <http://comunicacioninteractivafacso.blogspot.com/2011/06/gabriel-garcia-moreno-presidente-del.html>